

# DESAFÍOS Y OBSTÁCULOS DEL SISTEMA JUDICIAL EN ECUADOR:

Redes de corrupción y su impacto  
en la integridad institucional

Abg. María Auxiliadora Fabre Haro MSc.

Abg. Nelson Daniel Vela Andrade MSc.

ECUADOR, 2024



## Abg. María Auxiliadora Fabre Haro MSc.

Destacada profesional del ámbito jurídico con una amplia formación académica. Abogada de los Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador, así como Especialista y Magíster en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales, así como en Derecho Penal. Actualmente se encuentra cursando un Doctorado en Ciencias Jurídicas en la Universidad Católica de Argentina.

En su trayectoria laboral, ha desempeñado roles importantes como Defensora Pública de la Provincia de Guayas, Jefa Departamental Área de Tránsito en la Defensoría Pública Provincial de Guayas, Sub Directora del Patrocinio Penal Guayas, Asesora Jurídica en la Fiscalía General del Estado, Experta litigante en la Corte Nacional y Constitucional de la Nación, Docente en la Cátedra de Derecho Procesal Penal COIP en la Universidad de Guayaquil y en la Maestría de Derecho Constitucional en la Universidad Estatal Península de Santa Elena. Secretaria General de la comisión de biodiversidad de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador y actualmente Presidenta Ejecutiva en Fidal Lawyers Estudio Jurídico. Todos estos logros ha dejado una marca indeleble en la gestión y el desarrollo institucional.

## Abg. Nelson Daniel Vela Andrade MSc.

Abogado ecuatoriano con una sólida formación académica y experiencia laboral diversificada. Ha complementado su formación con estudios de postgrado en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, donde obtuvo un Magister en Derecho Procesal y en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo alcanzando el grado de Magister en Derecho Penal. Actualmente está cursando un Doctorado en Ciencias Jurídicas en la Universidad Pontificia Católica de Argentina.



En cuanto a su experiencia laboral, ha ocupado roles destacados en instituciones como el Banco del Austro S.A., la Agencia de Garantías de Depósitos, en la Municipalidad de Balao como Procurador Síndico y Jefe de Asesoría Jurídica y la Fiscalía General del Estado donde actualmente se desempeña como Agente Fiscal del Guayas, con experiencia en unidades especializadas en crimen organizado, delitos contra la fe pública, aduanas, lavado de activos, entre otros, incluyendo un periodo como Fiscal Provincial encargado de la provincia de Santa Elena. Además, ha ocupado el cargo de Profesor Principal de la Universidad de Guayaquil. Acciones que destacan su labor y compromiso tanto en la sociedad como en el campo jurídico ecuatoriano.

"Afrontar los desafíos y superar los obstáculos en el sistema judicial de Ecuador es esencial para garantizar una administración de justicia eficiente y equitativa, fortaleciendo así la confianza de la sociedad en las instituciones encargadas de impartir la ley."

*Abg. María Fabre*

*Abg. Nelson Vela*



## Reflexionando

**“La lucha contra la corrupción constituye un enorme desafío para el poder Judicial, porque tiene la doble tarea de accionar contra la corrupción externa, pero también y especialmente contra la corrupción interna”.**

***Elvia Barrios***

---

## Acerca de:

A lo largo de este libro la Abg. María Fabre y el Abg. Nelson Vela, proporcionan una mirada detallada sobre las complejidades que desafían el actual Sistema Judicial Ecuatoriano y sus implicaciones en el Estado de Derecho y la Democracia. A través de distintos epígrafes se ofrece un recorrido sobre las implicaciones de la administración de justicia en el país, abordando temáticas que vierten dentro de todo un debate de ideas, sobre los fundamentos y la racionalidad de los actores del sistema de justicia.

TÍTULO: Desafíos y obstáculos del sistema judicial en Ecuador: redes de corrupción y su  
impacto en la integridad institucional

Primera edición

REVISIÓN TÉCNICA

Ab. Daniel Alexander Chang Macias  
Ab. Margarita Rosa Cabrera Cevallos

DISEÑO Y MAQUETACIÓN:

Ana Matango

© de los textos: los autores

© de la presente edición: CEO Editorial

PRIMERA EDICIÓN: 27 DE AGOSTO DE 2024

ISBN: 978-9942-663-10-8

DOI: <https://doi.org/10.59764/ceo.88>

Publicado por acuerdo con los autores

Capacitación y Estrategia Online

CEO Editorial

Guayaquil – Ecuador

Fecha: 27 de agosto de 2024 Cámara Ecuatoriana de Libro

NOTA EDITORIAL: Las opiniones y contenidos publicados en esta obra son de  
responsabilidad exclusiva de sus autores

<https://editorialceo.ceocapacitacionestrategias.com/index.php/editorial/catalog/book/88>

## ÍNDICE DE CONTENIDO

PRÓLOGO .....	10
INTRODUCCIÓN .....	11
ENFOQUE PRELIMINAR.....	14
Parte I. Puntos de vista sobre el sistema judicial .....	16
Introducción .....	16
Capítulo 1. El Sistema Judicial como pilar de la Democracia y el Estado de Derecho.....	197
1.1. El papel crucial del sistema judicial en la salvaguarda de los derechos humanos y las libertades sociales .....	20
<i>La gestión de la justicia se erige como un pilar clave para garantizar la protección y la vigencia de los derechos humanos en las sociedades modernas.....</i>	<i>24</i>
<i>La salvaguarda de los derechos humanos a través del sistema judicial.....</i>	<i>27</i>
1.2. La contribución del sistema judicial en la protección de los derechos humanos.....	30
1.3. Aseguramiento de la independencia de los poderes y el balance institucional.....	36
1.4. El sistema judicial como garante de la legalidad y la justicia social .....	39
Capítulo 2. El Papel del sistema judicial en la resolución de conflictos y la paz social .....	442
2.1. Función del sistema judicial en la resolución de disputas y conflictos en la sociedad.....	46
2.2. Aporte del sistema judicial en la promoción de la convivencia democrática, la paz y la cultura.....	54

2.3. Importancia de la administración de justicia en la seguridad ciudadana ...	57
Parte II. El Sistema Judicial y la corrupción .....	61
Introducción .....	61
Capítulo 3. La Relación Intrínseca entre el Sistema Judicial y la Corrupción.	642
3.1. Tipología de la Corrupción Judicial: Exploración de las formas y manifestaciones de corrupción dentro del sistema judicial. ....	65
<i>La politización del sistema judicial y sus consecuencias</i> .....	68
<i>Implicaciones de la corrupción en la administración de justicia desde el ámbito público</i> .....	70
<i>Las formas de corrupción dentro de los sistemas judiciales</i> .....	72
3.2. Análisis comparativo de la naturaleza y gravedad de la corrupción judicial en diferentes contextos jurídicos y culturales.....	74
<i>La corrupción en el sistema judicial de América Latina</i> .....	74
Capítulo 4. Factores y dinámicas que facilitan la corrupción en el Poder Judicial .....	79
4.1. Comportamientos corruptos en el sistema judicial .....	86
4.2. Debate sobre la relación entre la corrupción judicial y otros fenómenos sociales, como la desigualdad, la falta de acceso a la justicia y la inseguridad jurídica.....	88
<i>La relación entre la corrupción judicial, la falta de acceso a la justicia y la inseguridad jurídica</i> .....	93
Capítulo 5. Impacto de la Corrupción Judicial en la Sociedad y el Estado de Derecho.....	103
5.1. Discusión sobre las repercusiones de la corrupción judicial en la percepción que tienen los ciudadanos del sistema de justicia y en la legitimidad de las instituciones democráticas. ....	104

5.2. Debate sobre los desafíos que plantea la corrupción judicial para la consolidación del Estado de Derecho.....	106
<i>La corrupción y su impacto en el estado de derecho .....</i>	<i>107</i>
<i>Formas criminales que agravan las consecuencias de la corrupción en el sistema judicial .....</i>	<i>108</i>
Parte III. El Sistema Judicial como bastión contra la corrupción.....	119
Introducción .....	119
Capítulo 6. Guardianes de la Legalidad y la Integridad.....	122
6.1. Explorando el papel del sistema judicial como guardián de la legalidad y la integridad institucional.....	123
6.2. ¿Cómo la falta de transparencia, la impunidad y la debilidad de los mecanismos de rendición de cuentas contribuyen a la corrupción judicial? ..	126
6.3. El sistema judicial en la promoción de la integridad en la sociedad a través de la aplicación coherente de las leyes y la impartición imparcial de justicia.	129
Capítulo 7. Cooperación Internacional y Lucha contra la Corrupción Transnacional .....	1342
7.1. Colaboración entre sistemas judiciales de diferentes países para enfrentar la corrupción que trascienden las fronteras nacionales.....	136
7.2. Ejemplos de tratados y acuerdos internacionales diseñados para incentivar la lucha contra la corrupción a nivel global .....	141
Parte IV. Ecuador: reflexiones sobre la justicia y la integridad institucional ...	145
Introducción .....	145
Capítulo 8. El juicio de la justicia: desafíos y batallas actuales.....	1487
El juicio de la justicia: desafíos y batallas actuales .....	148
8.1. Hitos que han forjado el carácter de la justicia en el país. ....	151



8.2. Reflexionando sobre la percepción pública de la justicia a través del tiempo y su impacto en la integridad institucional.....	155
8.3. Radiografía de los desafíos contemporáneos del sistema judicial ecuatoriano.....	157
Capítulo 9. Entre Luces y Sombras: Corrupción Judicial en Ecuador desde Perspectivas contrastantes .....	1721
9.1. La corrupción en el sistema judicial ecuatoriano.....	173
9.2. Crimen Organizado y corrupción en el sistema judicial del Ecuador.....	180
9.3. Justicia Ecuatoriana: Una mirada a los casos de crimen organizado y de corrupción "Metástasis" y "Purga". .....	190
<i>Reflexiones jurídicas de los casos de corrupción en el sistema judicial ecuatoriano.....</i>	<i>200</i>
<i>Puntos a favor y en contra de los casos Metástasis y Purga.....</i>	<i>203</i>
9.4. ¿Deficiencias en la integridad institucional o ataques contra el poder judicial?: Un análisis desde diversos ángulos .....	205
Capítulo 10. Alternativas Futuras y Recomendaciones.....	210
10.1. Reflexión sobre el futuro del sistema judicial ecuatoriano y las posibles reformas necesarias. ....	211
10.1. Recomendaciones para mejorar la independencia judicial, combatir la corrupción y fortalecer la integridad institucional.....	214
CONCLUSIONES FINALES: LLAMADO A LA ACCIÓN PARA GARANTIZAR UNA JUSTICIA EQUITATIVA Y TRANSPARENTE EN ECUADOR .....	227
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .....	229

## PRÓLOGO

El sistema judicial ecuatoriano enfrenta retos y obstáculos que exigen un análisis profundo y una reflexión crítica. Ecuador, un país rico en historia y diversidad, enfrenta distintos obstáculos y desafíos en su sistema judicial, lo que exigen una profunda reflexión y análisis. Por esta razón, considero de vital importancia el libro *Desafíos y Obstáculos del Sistema Judicial en Ecuador: Redes de Corrupción y su Impacto en la Integridad Institucional*.

Este libro ofrece una visión detallada y bien documentada sobre las redes de corrupción que han permeado nuestro sistema judicial. A través de esta investigación, los autores nos revelan cómo estas prácticas corruptas afectan no solo a las instituciones, sino también a la percepción y confianza del público en la justicia ecuatoriana.

Los desafíos que se describen en el libro no son meras teorías, sino realidades palpables que he podido vislumbrar en mi propia práctica profesional. La corrupción judicial es un problema que requiere atención inmediata y soluciones efectivas. Las propuestas y análisis presentados en este libro son fundamentales para entender la magnitud del problema y empezar a delinear caminos hacia la reforma.

Además, esta obra no solo identifica los problemas, sino que también ofrece posibles vías para la mejora y fortalecimiento de nuestro sistema judicial. Es una lectura esencial para todos aquellos comprometidos con la justicia y la integridad institucional en Ecuador.

Agradezco profundamente a los autores por su valiosa contribución y espero que este libro inspire a muchos a unirse en la lucha por un sistema judicial más transparente y justo. Como jurista, considero que esta obra es un recurso indispensable para entender y enfrentar los desafíos que tenemos por delante.

***Dr. Juan Ángel Jiménez Guartán***

*Gestor del Programa de Maestría en Derecho Penal*

*en la Universidad de Guayaquil*

## INTRODUCCIÓN

El sistema judicial, esa compleja amalgama de instituciones, leyes, principios y actores, se erige en uno de los pilares principales que soporta la estructura misma de la sociedad. *“La Justicia es considerada como el poder más conservador, formalizado y jerárquico del sistema democrático”*.<sup>1</sup>

Su importancia trasciende lo meramente funcional, convirtiéndose en un bastión esencial para salvaguardar los derechos, asegurar la estabilidad social y fomentar un desarrollo económico justo. Su enfoque principal es impartir justicia, la cual constituye *“Un componente esencial tanto del Estado como de la sociedad es el sistema judicial, al cual se acude para resolver de manera pacífica las disputas entre sus integrantes. Cuando se gestiona adecuadamente, este sistema actúa como el mecanismo definitivo para resolver conflictos y restablecer la armonía”*<sup>2</sup>.

En el contexto ecuatoriano, la consagración del sistema judicial se ha perfilado como un medio para el alcance de justicia social, tal como lo establece la constitución nacional<sup>3</sup>. Sin embargo, este sistema enfrenta desafíos monumentales y obstáculos casi insondables que amenazan su integridad y eficacia. La corrupción, cual hiedra venenosa, se enrosca en los cimientos de la justicia, comprometiendo no solo la equidad y transparencia de este estamento, sino erosionando la confianza pública en las instituciones que deberían ser sus más firmes defensores.

Esta introducción pretende ser más que un preludio al análisis profundo y meticuloso que se desarrollará a lo largo de las páginas de "Desafíos y obstáculos del sistema judicial en Ecuador: redes de corrupción y su impacto en la integridad

---

<sup>1</sup> «Justicia Abierta: un desafío para la gobernanza democrática | Comunidades Cepal».

<sup>2</sup> Carvajal Martínez et al., «La corrupción y la corrupción judicial».

<sup>3</sup> Observatorio Judicial, «LA JUSTICIA EN ECUADOR ¿Cuenta la Función Judicial con suficientes recursos para cumplir con su labor?»

institucional". Busca establecer un marco de referencia sobre el cual se articulan los diversos argumentos, estudios de caso y reflexiones que componen el cuerpo de este trabajo. El propósito es doble: por un lado, desglosar la importancia crítica que reviste el sistema judicial ante la proliferación de redes de corrupción; por otro; delineando los contornos de la estructura que adoptará el libro, previsto como una herramienta de análisis, discusión y propuesta frente a una problemática de magnitudes escalonadas.

La obra se organiza en cuatro partes cruciales, que buscan abarcar de manera exhaustiva la problemática planteada desde distintos ángulos y perspectivas. La primera se inclina hacia los puntos de vista sobre el sistema judicial, examinando su papel como pilar de la democracia y el estado de derecho, su función en la resolución de conflictos y su contribución al desarrollo económico y social. Esta sección refleja una idea central: *el sistema judicial no solo se ocupa de la aplicación de la ley, sino que también cumple un rol activo en la configuración de la sociedad, influenciando aspectos que van más allá de lo jurídico.*

La segunda parte profundiza en el vínculo indisoluble entre el sistema judicial y la corruptela, analizando los factores que permiten su florecimiento dentro de la judicatura y los devastadores efectos que esta práctica desleal tiene sobre la sociedad y el marco de legalidad que pretende regirla. *Aquí se exponen los mecanismos mediante los cuales la corrupción se infiltra y perpetúa dentro de las esferas judiciales, subrayando la urgencia de abordar esta cuestión con determinación y rigor.*

La tercera sección plantea al sistema judicial como un formidable adversario contra la corrupción, detallando las estrategias, reformas y acciones necesarias para fortalecer su capacidad de actuar en defensa de la legalidad y la integridad institucional. *Se presenta una visión esperanzadora y proactiva, donde la acción conjunta y la voluntad política se perfilan como herramientas indispensables en la lucha contra este flagelo.*

Finalmente, el libro se aboca al análisis específico de Ecuador, aportando una visión crítica sobre el estado actual de su sistema judicial, los desafíos que enfrenta y las batallas que se libran tanto en el plano legal como en el de la percepción pública. *A través de un diálogo entre perspectivas contrastantes, esta sección busca trazar un camino hacia alternativas futuras y recomendaciones concretas que contribuyan a una reforma judicial profunda y perdurable.*

"Desafíos y obstáculos del sistema judicial en Ecuador: redes de corrupción y su impacto en la integridad institucional" no solo se dirige a estudiantes de Derecho, activistas anticorrupción y académicos; se extiende una invitación abierta a todo aquel comprometido con la causa de la justicia y la integridad institucional. El texto se concibe como un llamado a la acción, incitando a una participación activa y consciente en los esfuerzos por garantizar una justicia equitativa y transparente para Ecuador. En las páginas que siguen, se pretende construir un diálogo constructivo y enriquecedor que aporte luz a una problemática oscura, pero crucial, para el futuro de la nación.

***Abg. María Auxiliadora Fabre Haro MSc.***

***Abg. Nelson Daniel Vela Andrade MSc.***

## **ENFOQUE PRELIMINAR**

Uno de los aspectos fundamentales que queremos abordar a lo largo de esta obra es el impacto devastador que tiene la corrupción dentro de la sociedad y en especial en la estructura del sistema judicial. No se trata de una simple discusión superficial, sino de analizar sus causas, sus efectos y explorar posibles soluciones.

Todo esto implica identificar y comprender las redes de corrupción, examinando los actores involucrados, los métodos utilizados y los efectos que esto tiene en la integridad institucional y la creencia de los ciudadanos en la legitimidad del sistema legal.

Pero no nos quedaremos en el plano teórico. Nuestro enfoque incluirá el análisis de casos específicos que ilustren los desafíos y las complejidades involucradas en la lucha constante que se ha vivido para regular y eliminar la corrupción. Queremos mostrar de manera concreta el impacto que tiene la corrupción y los problemas que enfrentan aquellos que intentan combatirla.

Por estas razones, también queremos destacar los esfuerzos que se están realizando para combatir la corrupción y fortalecer el sistema judicial en Ecuador. Analizaremos las reformas implementadas hasta el momento y exploraremos las estrategias y acciones necesarias para erradicar eficazmente esta gran problemática. Desde medidas de transparencia hasta el fortalecimiento de un sistema independiente.

Es relevante destacar que este análisis no busca señalar culpables, sino identificar los problemas sistémicos que afectan al sistema judicial ecuatoriano y proponer posibles soluciones. Nuestro propósito es aportar una crítica teórica y documental a la evolución del sistema judicial, dentro de parámetros justos e imparciales que beneficien a todos los ciudadanos y fortalezca la democracia en nuestro país.



**PARTE I.**  
**PUNTOS DE VISTA SOBRE**  
**EL SISTEMA JUDICIAL**

## Parte I



### Puntos de vista sobre el sistema judicial

#### Introducción

**E**n la primera parte de nuestro libro, exploramos diversos aspectos del sistema judicial ecuatoriano desde diferentes perspectivas. El propósito de esta sección es proporcionar una comprensión detallada de la relevancia y el funcionamiento del sistema judicial dentro del contexto nacional.

El primer capítulo se centra en el sistema judicial y su relevancia para el fortalecimiento democrático. En esta sección, se analiza en profundidad cómo el sistema judicial

no solo protege los derechos humanos y las libertades fundamentales, sino que también es clave para mantener la separación de poderes y el equilibrio institucional. Asimismo, se investiga el papel del sistema judicial en la promoción de la legalidad y la justicia social, fomentando la igualdad y la equidad en la sociedad ecuatoriana.

En el segundo capítulo, nos sumergimos en la actuación del sistema judicial como promotor de la paz social y su rol para dar



respuestas oportunas ante la presencia de conflictos.

En este análisis, examinamos detalladamente el papel crucial que tiene el sistema judicial en la solución de controversias y desacuerdos en el ámbito comunitario, y su papel en fomentar una cultura que promueva la armonía y la vida democrática. También investigamos cómo una gestión efectiva de la justicia puede ayudar a prevenir y reducir los conflictos sociales, con el objetivo de fomentar la armonía y la estabilidad en la sociedad.

El tercer capítulo se centra en el análisis del sistema judicial como promotor del desarrollo económico y social. Además, exploramos cómo el

sistema judicial contribuye a la seguridad económica y jurídica, creando un entorno propicio para el crecimiento y el desarrollo sostenible.

En conjunto, estos capítulos ofrecen una visión integral del sistema judicial en Ecuador, destacando su importancia en la sociedad y explorando las adversidades y oportunidades que se presentan en la búsqueda de la justicia y la equidad. Nuestro objetivo es proporcionar una base sólida para comprender los temas más amplios que abordaremos en el libro, especialmente en relación con la corrupción y su impacto en la integridad institucional.

# Capítulo 1

## **El Sistema Judicial como Pilar de la Democracia y el Estado de Derecho**

# Capítulo 1

## El Sistema Judicial como fundamento del Estado de Derecho y de la Democracia

**E**n este primer capítulo emprendemos un análisis exhaustivo sobre el rol fundamental que ocupa el sistema judicial dentro de las estructuras democráticas y legales, en especial en Ecuador.

La perspectiva que adoptamos como autores subraya con énfasis la relevancia de dicho sistema en lo que respecta a la salvaguarda de los derechos y libertades fundamentales de la ciudadanía ecuatoriana.

A lo largo de nuestra experiencia como profesionales en este campo y de distintas investigaciones que hemos emprendido, hemos descubierto que el sistema judicial trasciende su rol tradicional de árbitro neutral en la adjudicación de controversias, asumiendo una función imperativa en la preservación de la división de

poderes y el equilibrio entre las diversas instituciones que conforman el tejido social. Este papel es indispensable para obviar infracciones al poder y asegurar la cohesión de la estructura democrática.

De igual manera, nuestra perspectiva profundiza en la capacidad del sistema judicial como ente promotor de legalidad y justicia social en el territorio ecuatoriano. Mediante la aplicación equitativa de la normativa vigente, el sistema judicial no se limita a fomentar la paridad jurídica, sino que también juega un papel decisivo en la forja de un contexto social caracterizado por una mayor justicia y equidad para todos los actores sociales.

Se busca ofrecer un panorama detallado sobre su funcionamiento y

su importancia estratégica en el fortalecimiento de la sociedad. Se explorarán multitud de aspectos relacionados con esta institución, abarcando desde su influencia en la participación activa dentro de la consolidación de la estabilidad institucional y social en Ecuador.

A través de esta disertación, aspiramos a enriquecer la comprensión sobre el valor intrínseco que el sistema judicial representa para la sociedad

ecuatoriana en la actualidad. Además, esperamos generar un diálogo constructivo acerca de los desafíos y obstáculos que enfrenta este sistema en su camino hacia la plena garantía del estado de derecho y la integridad institucional. En definitiva, nuestro objetivo principal es contribuir al debate sobre cómo mejorar el funcionamiento del sistema judicial y fomentar la eficacia y transparencia en la construcción de justicia en Ecuador.

## **1.1. El papel crucial del sistema judicial en la salvaguarda de los derechos humanos y las libertades sociales**

La comunidad global ha reconocido la importancia de implementar medidas para asegurar el respeto y la defensa de los derechos humanos. En respuesta, se han desarrollado varios instrumentos y mecanismos jurídicos.

Entre los más destacados se encuentran la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), el

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), además de otros tratados regionales. Estos documentos representan un esfuerzo conjunto para reconocer y proteger los derechos esenciales para todas las personas, los cuales

han sido violados en diferentes regiones del mundo.<sup>4</sup>

En este contexto, los distintos países han enfocado parte de sus esfuerzos en asegurar una protección efectiva de los derechos humanos, incorporando progresivamente diversos instrumentos y mecanismos en el ámbito jurídico y político global. Esta tendencia ha influenciado la interpretación y concepción moderna de la legislación en cada país, impulsando la adopción de regulaciones que reflejen las disposiciones a nivel internacional sobre esta temática.

El sistema judicial se ha erigido en un actor clave en esta labor, orientando sus funciones hacia la preservación de las garantías constitucionales de cada individuo.<sup>5</sup> Los órganos jurisdiccionales han desempeñado un papel central en la resolución de controversias legales y en la interpretación de la ley,

buscando asegurar la constitucionalidad de las normativas y decisiones judiciales.

No obstante, uno de los temas más discutidos en el campo del derecho es la armonización de los derechos humanos, debido a su carácter universal y su relevancia en la protección de la dignidad humana frente a las autoridades estatales. Esto significa que la salvaguarda de los derechos humanos no se restringe únicamente a los límites nacionales, sino que también requiere un compromiso con su respeto y promoción a nivel global.

En este contexto, cada país ha adaptado su sistema judicial de manera particular, priorizando la búsqueda y aplicación de instrumentos internos que permitan respetar los derechos humanos. Las regulaciones internas, su interpretación y aplicación han sido clave en este proceso, conformando

---

<sup>4</sup> Platonova, A. «Corrupción, derechos humanos, independencia judicial».

<sup>5</sup> Gómez Pérez, «Jueces y derechos humanos. Hacia un sistema judicial transnacional».

las bases de la jurisprudencia y adaptándose a la evolución del derecho internacional.

Así, al examinar el concepto de derechos humanos, es crucial subrayar su vínculo íntimo con la dignidad individual frente al poder estatal. Los derechos humanos se comprenden como un conjunto de derechos y mecanismos que, en cada época, materializan las demandas de dignidad, libertad e igualdad humanas.

Esta definición implica que los derechos humanos se basan en la dignidad inherente de cada individuo y, por lo tanto, imponen restricciones a la actuación del poder estatal. Sin embargo, esta comprensión ha tardado mucho tiempo en ser internalizada y aplicada en la práctica de estos derechos.

Por otro lado, los derechos humanos representan reclamaciones de bienes primarios esenciales para todo individuo, que reflejan las demandas de libertad y dignidad en cada período histórico.

Estas reclamaciones se dirigen principalmente al Estado y están legitimadas tanto por un sistema normativo como por el reconocimiento internacional. Esta perspectiva implica una coincidencia entre la teoría e implementación práctica de los derechos ciudadanos, donde las personas afectadas por injusticias cometidas por las autoridades o estructuras estatales alzan su voz en busca del respeto de sus derechos.

En tiempos pasados, aquellos que desafiaban la realidad en la que vivían y buscaban cambios en el sistema solían ser denominados "revolucionarios".

En línea con estas reflexiones, e apoya la idea de que el concepto de derechos humanos implica la afirmación de la dignidad humana frente al Estado, que tiene la responsabilidad de asegurar el respeto integral de los derechos inherentes a las personas. Esto conlleva reconocer un sistema normativo que facilite la reclamación de estos derechos y permita el

desarrollo pleno de la vida dentro del Estado.

En el ámbito legal, los derechos humanos presentan un desafío complejo que une tanto la filosofía como el estudio del derecho. El Derecho Constitucional se ocupa de estos derechos, ya que están consignados en la constitución y deben ser detallados y aplicados por la ley.

Por lo tanto, tanto el poder Ejecutivo como el Judicial tienen la responsabilidad de asegurar el respeto efectivo de estos derechos en la práctica y de llenar cualquier vacío legal que pueda aparecer.

Es fundamental reconocer que este sistema tiene una función crucial en asegurar y fomentar el respeto por estos derechos. Los derechos humanos, en su esencia, representan reclamaciones de bienes primarios esenciales para todo individuo, que reflejan las demandas de libertad y dignidad en cada período histórico.

En este sentido, el sistema judicial se convierte en el principal actor encargado de salvaguardar y hacer cumplir estos derechos, actuando como un mecanismo de protección frente a posibles violaciones estatales o de terceros.

Por lo tanto, el sistema judicial despliega su función interpretativa y aplicativa del derecho para garantizar que las leyes y normativas, tanto nacionales como internacionales, se garanticen y se implementen de forma efectiva en la salvaguarda de los derechos humanos. Además, el sistema judicial debe encargarse de resolver conflictos y disputas relacionadas con la legislación que regula estos derechos, asegurándose de que sus fallos estén en consonancia con los principios fundamentales de los derechos humanos.

Además, a través de sus órganos jurisdiccionales, actúa como un contrapeso frente al poder estatal, garantizando que este último no pueda ejercer su autoridad en detrimento del resguardo de la

ciudadanía. En este marco, el sistema judicial actúa como defensor de la legalidad y la justicia social, asegurando que todos los individuos reciban un trato justo y respetuoso ante la ley.

***La gestión de la justicia se erige como un pilar clave para garantizar la protección y la vigencia de los derechos humanos en las sociedades modernas.***

La validación de los derechos fundamentales se realiza mediante los tribunales y los órganos judiciales, que tienen la responsabilidad de interpretar y aplicar las leyes para salvaguardar las libertades individuales y asegurar la igualdad ante la ley. En este contexto, la eficiencia de sus acciones muestra directamente la efectividad del cuidado de en una sociedad específica.

Estas reflexiones se basan en la premisa de que esta administración es un campo clave para evaluar si los derechos fundamentales se aplican de manera efectiva dentro de las comunidades modernas.

**En este contexto, se evalúa si las libertades y garantías establecidas en los distintos tratados internacionales, al ser infringidas, tienen una aplicación práctica. En otras palabras, es en los tribunales donde se concreta y se demuestra la capacidad de los sistemas judiciales para preservar la dignidad humana y asegurar la igualdad ante la ley.**

Por consiguiente, un enfoque centrado en los derechos humanos ofrece un marco claro para determinar quiénes son los titulares de derechos y qué libertades y derechos les corresponden según las normas internacionales de



derechos humanos. Además, este enfoque permite identificar las obligaciones de las entidades responsables de garantizar que los titulares de derechos puedan disfrutar plenamente de sus derechos.<sup>6</sup>

En términos sencillos, asegurar que las instituciones encargadas de salvaguardar y hacer cumplir los derechos de salud actúen adecuadamente a lo largo de todo el proceso de formulación de políticas públicas requiere una fuerte dosis de responsabilidad y rendición de cuentas.

Cuando estas instituciones no logran cumplir con sus obligaciones o encuentran dificultades para hacerlo, es necesario contar con mecanismos que permitan presentar quejas y recibir respuestas a esas reclamaciones. Esto garantiza que no solo sean reconocidos los derechos en teoría, sino que también

se implementen y respeten en la práctica.<sup>7</sup>

La efectividad y legitimidad de los derechos humanos están estrechamente ligadas a la capacidad de los tribunales para abordar y resolver adecuadamente las violaciones a estos derechos. Para que esto ocurra, es fundamental que los sistemas judiciales sean autónomos, justos y operativos.

Esto asegura que los derechos fundamentales se respeten de manera efectiva. Cuando los jueces y otros integrantes del sistema se comprometen a proteger estos derechos y a actuar como defensores frente a posibles abusos de poder, se refuerza la credibilidad en el sistema judicial y en el estado de derecho en su conjunto.

Por el contrario, si los miembros del sistema judicial no están orientados a cumplir su función de proteger los derechos

---

<sup>6</sup> United Nations Human Rights, «el SISTEMA JUDICIAL y derechos humanos - Buscar con Google».

<sup>7</sup> United Nations Human Rights.

fundamentales y en cambio muestran complicidad con el poder, los esfuerzos por salvaguardar y promover los derechos humanos probablemente fracasarán.

Toda la literatura sobre derechos humanos, junto con la legislación vigente y las iniciativas de la sociedad civil orientadas a su implementación efectiva, fracasarán si no se instauran con eficiencia actuaciones de garantía y protección de la población.

Los ciudadanos perciben la vigencia real de los derechos humanos cuando encuentran amparo ante las violaciones que sufren<sup>8</sup>. Es decir, cuando sus reclamos por vulneraciones de sus derechos son atendidos y resueltos por las instancias judiciales de manera justa y eficiente.

El retraso en la tramitación de procesos judiciales o la ausencia de responsabilidad en crímenes graves no solo disminuye la confianza en el aparato judicial, sino que también

amenaza la legitimidad de un auténtico estado de derecho.

Por consiguiente, la manera en que las instituciones abordan la vulneración de los derechos es fundamental para la auténtica legitimidad del Poder Judicial y de todos los componentes del sistema en un contexto legal específico. Hoy en día, la administración de justicia y su desempeño en América Latina está sujeta a un intenso debate, con opiniones divididas sobre la efectividad de los Estados en la protección de los derechos fundamentales.

No obstante, desde nuestra apreciación personal, se siguen haciendo notables esfuerzos para fortalecer los poderes judiciales en esta región, promoviendo la independencia funcional, modernizando su legislación y capacitando a sus miembros.

Sí, es cierto que todavía hay mucho que hacer, pero es importante destacar que la

---

<sup>8</sup> Ávila-Hernández et al., *Derechos humanos, democracia y poder judicial*.

legitimación democrática y el fortalecimiento de los poderes judiciales son procesos continuos y que son cruciales para garantizar los derechos.

### ***La salvaguarda de los derechos humanos a través del sistema judicial***

Como hemos venido desglosando en líneas anteriores, la protección de los derechos humanos desde el sistema judicial es un aspecto fundamental en cualquier sociedad democrática que busca garantizar la dignidad, la libertad y la igualdad de todas las personas ante la ley. A través de su función de interpretar y aplicar la ley, revisar las acciones del gobierno y promover la rendición de cuentas, el sistema judicial actúa como un defensor de todos los individuos, asegurando el resguardo de sus derechos humanos en todo momento.

- **El hábeas corpus**

El hábeas corpus, desde su surgimiento en el derecho inglés medieval hasta su aplicación contemporánea en diversos

sistemas legales, se ha constituido como una herramienta esencial en la protección de los derechos humanos a través del sistema judicial.

Desde su origen, el hábeas corpus ha sido diseñado para proteger la libertad personal contra arrestos arbitrarios o ilegales efectuados por el Estado. En este contexto, se reconoce como un mecanismo legal esencial que asegura el derecho de cualquier individuo detenido a presentarse ante un tribunal para que se evalúe la legalidad de su detención.

Esta herramienta judicial es vital para garantizar que nadie sea privado de su libertad de manera injusta o sin justificación.

La aplicación de esta herramienta jurídica está estrechamente

vinculada a los principios fundamentales en la protección de los derechos humanos. Al exigir que la autoridad que detiene a un individuo presente pruebas suficientes para justificar la detención, el hábeas corpus garantiza que se respete el principio de legalidad y se evite la detención arbitraria o la desaparición forzada.

En este sentido, el sistema judicial desempeña un papel crucial como garante de los derechos individuales frente al poder estatal.

Su importancia se hace aún más evidente en contextos donde existe un riesgo elevado de abuso de poder por parte de actores gubernamentales que intervienen como autoridad.

En estas situaciones, el hábeas corpus actúa como una herramienta legal crucial para desafiar la detención y asegurar el respeto de los derechos fundamentales, incluso en momentos de emergencia o conflicto. De esta manera, el sistema judicial se enfoca en la protección de

los derechos humanos, sirviendo como contrapeso frente al uso indebido del poder del Estado.

De la misma manera, intervienen de manera determinante dentro del proceso de rendición de cuentas del Estado frente a sus ciudadanos. Al permitir que las personas impugnen su detención ante un tribunal independiente, el hábeas corpus contribuye a la transparencia y la responsabilidad del sistema de justicia, asegurando que el Estado responda por sus acciones y se ajuste a los estándares internacionales de derechos humanos.

- **Derecho de amparo**

El derecho de amparo, también conocido como recurso de amparo o acción de amparo, es un mecanismo legal fundamental en la protección de los derechos humanos desde el sistema judicial.

En su esencia, el derecho de amparo garantiza a los individuos la posibilidad de impugnar cualquier acto, decisión o situación que

vulnera sus derechos constitucionales o los reconocidos por tratados internacionales de derechos humanos. Este mecanismo permite a los ciudadanos recurrir a los tribunales para obtener una protección rápida contra posibles abusos del Estado, sin importar el tipo de derecho que haya sido infringido.

Una característica fundamental del derecho de amparo es su carácter sumario y expedito. Esto significa que los procedimientos judiciales relacionados con el amparo tienden a ser ágiles y rápidos, con la finalidad de ofrecer una respuesta efectiva y oportuna ante la vulneración de los derechos. Esta celeridad es crucial para evitar que se perpetúen las vulneraciones de derechos y para restaurar la situación de legalidad y justicia lo antes posible.

Cualquier persona que sienta que sus derechos fundamentales han sido violados, ya sea por acciones u omisiones de autoridades públicas, entidades privadas u otros

individuos, tiene el derecho de ejercitar esta protección. Al presentar una solicitud de amparo, el individuo afectado busca que el tribunal declare la ilegalidad o inconstitucionalidad del acto o situación que ha causado la violación de sus derechos, así como que ordene medidas correctivas para restaurar la situación de legalidad y proteger sus derechos.

En muchos países, este recurso está consagrado en la Constitución como un derecho fundamental y se encuentra regulado por leyes y procedimientos específicos. Los tribunales encargados de tramitar los recursos de amparo suelen ser órganos especializados o jurisdicciones específicas dentro del sistema judicial, diseñados para proteger efectivamente a la sociedad.

Asimismo, constituye una herramienta fundamental para mantener el equilibrio de poder entre el Estado y los ciudadanos, asegurando que las autoridades actúen según las disposiciones

previstas en las normativas nacionales a favor de los ciudadanos.

## **1.2. La contribución del sistema judicial en la protección de los derechos humanos**

En un mundo donde las injusticias abundan y son vulnerados los derechos de la población, el papel de los sistemas judiciales cobra una importancia capital. Los sistemas judiciales, al ser los mecanismos estatales encargados de impartir justicia, se encuentran en una posición para permitir el cumplimiento de las leyes que protegen los derechos humanos.

A través de sus resoluciones, los tribunales no solo resuelven conflictos entre partes, sino que también interpretan y dan forma al derecho interno en consonancia con los principios de los derechos humanos reconocidos internacionalmente.

Una función esencial de estos sistemas es garantizar que las legislaciones nacionales estén en

armonía con los tratados y convenciones internacionales ratificados por los Estados. Esto implica, en muchos casos, un proceso de adaptación y revisión de leyes y prácticas nacionales para asegurar su compatibilidad con los estándares internacionales, un proceso en el que el sistema judicial actúa como árbitro final.

Al respecto, la autora Mara Gómez, en su libro *¿Es viable considerar la existencia de un Sistema Transnacional de Protección Judicial de los Derechos Humanos*, compuesto por tribunales

tanto nacionales como internacionales?<sup>9</sup>, destaca que:

*“Los tribunales en todo el mundo han experimentado cambios significativos en su funcionamiento, y especialmente en los vínculos, relaciones y contactos que ahora existen entre ellos. Según Mara Gómez, esto está conduciendo a la formación de una comunidad judicial y una cultura común entre los jueces a nivel global, lo que tiene un impacto positivo en la protección de los derechos humanos”.*<sup>10</sup>

Sin embargo, esta protección efectiva se encuentra plagada de la existencia constante de grandes desafíos. Uno de los obstáculos más significativos es la politización de los sistemas judiciales. En contextos donde la independencia judicial está comprometida, la capacidad de los tribunales para actuar como protectores imparciales de los

derechos humanos se ve severamente mermada.

Otro reto importante es la falta de acceso a la justicia. Para que los derechos humanos sean efectivamente protegidos y reivindicados, es fundamental que todos los ciudadanos puedan acceder a recursos judiciales adecuados y efectivos. Esto incluye asegurar que los procedimientos sean accesibles, comprensibles y asequibles para todos.

A pesar de tales desafíos, existen ejemplos notables donde los sistemas judiciales han logrado avances significativos en la protección de los derechos humanos. Un claro ejemplo es el rol de las cortes en la expansión de los derechos de los ciudadanos de bajas condiciones.

En varias localidades, los tribunales han sido pioneros en el respeto de las condiciones humanas de las minorías sexuales y de

---

<sup>9</sup> Gómez Pérez, «Jueces y derechos humanos. Hacia un sistema judicial transnacional».

<sup>10</sup> Ibid.

género, la protección contra la discriminación y la garantía de derechos sociales básicos para grupos desfavorecidos.

Otro ámbito donde los sistemas judiciales han tenido un impacto positivo es en el resguardo de los migrantes y refugiados. A través de decisiones que enfatizan en garantizar condiciones de vidas dignas y nuevas oportunidades, los tribunales han ofrecido protecciones importantes a individuos y familias vulnerables.

Para maximizar su contribución a la protección de los derechos humanos, los sistemas judiciales deben abordar de manera proactiva los desafíos existentes y potenciales. Esto incluye esfuerzos continuos para preservar su independencia y efectivizar el acceso a la justicia.

Es necesario capacitar y educar a los actores judiciales en materia de derechos humanos. Una comprensión profunda de estos principios y normas internacionales les permite a los jueces aplicarlos

eficazmente en los casos nacionales.

Además, el fortalecimiento de la cooperación internacional entre los sistemas judiciales puede representar una alternativa para mejora de la protección de los derechos humanos. El intercambio de buenas prácticas, experiencias y conocimientos entre jurisdicciones contribuye a un entendimiento más profundo y uniforme.

En este escenario, el sistema judicial se convierte en un agente clave. Mediante el mantenimiento de una firme garantía judicial, garantizando la justicia efectiva y fomentando la educación en derechos humanos, los sistemas judiciales tienen la capacidad de enfrentar tanto los retos presentes como los futuros, fortaleciendo su papel en la defensa de los derechos humanos. La justicia, como base fundamental de la sociedad, debe servir como el resguardo donde cada individuo pueda encontrar la protección de sus derechos más esenciales.



Su importancia no puede ser subestimada, y es crucial seguir fortaleciéndolos para asegurar que se cumpla con su deber de garantizar una sociedad justa e igualitaria para todos.

En otras palabras, el sistema judicial actúa como un baluarte contra posibles abusos de poder por parte de los distintos órganos del Estado o de individuos con influencia.

Mediante la interpretación de las leyes y la evaluación de las acciones gubernamentales, los tribunales tienen la capacidad de supervisar tanto al poder ejecutivo como al legislativo, asegurando que sus acciones se alineen con los principios de derechos humanos establecidos en las normas constitucionales y en instrumentos internacionales ratificados a nivel nacional.

También, el sistema judicial desempeña un papel fundamental en la resolución de conflictos entre individuos, empresas y

organizaciones, especialmente cuando dichos conflictos afectan a la sociedad. Los tribunales proporcionan un foro imparcial y neutral donde las partes involucradas pueden presentar sus argumentos y obtener una resolución justa y equitativa.

Además, el sistema judicial interviene en la interpretación y desarrollo del marco legal relacionado con los derechos humanos. Por medio de sentencias y decisiones judiciales, los tribunales aportan grandes avances al derecho, adaptándolo a las cambiantes realidades sociales y tecnológicas. Este proceso judicial es esencial para asegurar que este proceso permanezca de manera significativa y efectiva en un mundo en continuo cambio.

Por otro lado, el sistema judicial también actúa como un mecanismo de rendición de cuentas para aquellos que violan los derechos humanos. Los tribunales están facultados para examinar, procesar y castigar a quienes cometan

violaciones de derechos humanos, ya sea que estos actos sean llevados a cabo por entidades gubernamentales o por individuos o grupos ajenos al estado. Este rol es crucial para asegurar que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos y para garantizar que se haga justicia en representación de las víctimas.

En el caso específico del Ecuador, el funcionamiento del sistema judicial es un actor de gran relevancia en esta materia, apoyándose en diversas leyes y disposiciones que promueven su autonomía y efectividad. La Constitución de 2008 se establece como el eje central que define los cimientos y directrices para garantizar condiciones dignas de su población dentro de la nación.<sup>11</sup>

La Carta Magna ecuatoriana abraza un vasto espectro de derechos humanos, abarcando desde los ciudadanos, políticos, culturales, económicos y sociales.

Estos derechos, integrados en la constitución, son custodiados por el sistema judicial, que los interpreta y aplica para garantizar su protección.

Primordialmente, la Constitución asegura la independencia de la judicatura como uno de los pilares esenciales para el sostenimiento del Estado de Derecho. Este fundamento permite que jueces y magistrados desempeñen su labor con imparcialidad y sin intervenciones externas, facilitando el cumplimiento de la normativa relacionada.

Adicionalmente, a nivel constitucional, se han establecido estrategias para el resguardo de los derechos humanos a través de procedimientos como el amparo, el habeas corpus, el habeas data y la acción de protección, entre otras herramientas legales que los ciudadanos pueden utilizar para defender sus derechos fundamentales ante la justicia. Los procedimientos son esenciales para

---

<sup>11</sup>«Constitucion-de-la-Republica-del-Ecuador\_act\_ene-2021.pdf».

garantizar que las personas puedan acceder a la justicia y obtener protección contra posibles violaciones de sus derechos.

En conjunto, el artículo 17 del Código Orgánico de la Función Judicial de 2009 presenta un enfoque direccionado a resaltar que un servicio público esencial del Estado es la administración de justicia. Este servicio tiene como objetivo principal apoyar la obligación de respetar y defender los derechos garantizados por la Carta Magna, así como por los preceptos internacionales y las leyes vigentes.<sup>12</sup>

En lo que concierne al ámbito legal específico vinculado a los derechos humanos, Ecuador ha adherido a numerosos tratados y convenios internacionales que definen estándares y mandatos sobre la materia. Este cuerpo incluye la Convención para la Eliminación de

Todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros.

Estos documentos internacionales son incorporados al cuerpo legal ecuatoriano y son de aplicación obligatoria por los tribunales ante situaciones de conflicto o interpretaciones divergentes con leyes locales. Los jueces en Ecuador también toman en cuenta las resoluciones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos internacionales especializados en la protección de los derechos humanos al interpretar y aplicar la legislación nacional.

---

<sup>12</sup> «Código\_Orgánico\_fj.pdf».

### **1.3. Aseguramiento de la independencia de los poderes y el balance institucional.**

El principio de la división de poderes es esencial en la teoría política democrática, una idea introducida por pensadores como Montesquieu en el siglo XVIII. Este concepto establece que el poder del Estado debe estar repartido entre tres ramas independientes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. La finalidad de esta separación es impedir que la autoridad se concentre en una sola persona o entidad, lo que podría resultar en el abuso de poder y la transgresión de los derechos.

Dentro de delimitación, el sistema judicial tiene una función vital, sirviendo como contrapeso frente a las otras dos ramas del Estado. Mientras *“el poder legislativo se encarga de la elaboración de leyes y el poder ejecutivo de su implementación, el poder”* judicial se dedica a interpretar y aplicar dichas leyes. Además, asegura *“que el comportamiento y actuación del*

*Estado debe alinearse a los límites definidos por la Constitución y la legislación vigente”.*

La exclusividad a nivel judicial es un elemento de gran importancia para la separación de poderes y el equilibrio institucional. Los actores involucrados deben ser imparciales y estar libres de influencias externas, ya sean políticas, económicas o sociales.

Esta independencia garantiza que el sistema judicial pueda cumplir su función de manera objetiva y justa, considerando esta gran misión para reducir la injerencia del poder.

En este sentido, la Constitución y las leyes de un país desempeñan un papel fundamental en la protección de la independencia judicial. Estas normativas establecen los procedimientos para la designación y remoción de jueces, así como las garantías necesarias para asegurar su independencia y autonomía.

Además, los sistemas de control y rendición de cuentas, como la fiscalización del Consejo de la Judicatura o la necesidad de recursos de amparo ante posibles interferencias externas, son fundamentales para garantizar la independencia judicial y el equilibrio institucional.

El equilibrio institucional se refiere a la distribución equitativa del poder entre las distintas instituciones del Estado, de modo que ninguna de ellas pueda ejercer un control absoluto sobre las demás. En este sentido, el sistema judicial desempeña un papel crucial como contrapeso frente a los otros poderes del Estado, protegiendo los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos y garantizando el respeto al Estado de Derecho.

La separación de poderes y el equilibrio institucional son fundamentales para prevenir abusos de poder y proteger a la sociedad democrática.

Cuando uno de los poderes del Estado concentra un poder excesivo, existe el riesgo de que se vulneren los derechos y libertades individuales, y de que se produzcan actos de corrupción y arbitrariedad. Por ello, es crucial que exista un sistema de control que garantice la independencia y actuación del poder.

En el caso del sistema judicial, esta situación se traduce en la autonomía judicial y en la existencia de estrategias de control que aseguren el cumplimiento de sus funciones de manera imparcial y eficaz. Los jueces y magistrados deben actuar como guardianes de la Constitución, garantizando un trato basado en la igualdad de todos los ciudadanos, respetando los principios de legalidad y justicia.

En Ecuador, asegurar la separación de poderes y mantener el equilibrio institucional es esencial para la operatividad de la democracia y la salvaguardia de los derechos humanos. En el escenario ecuatoriano, esta división se

consagra en la Constitución de la República del Ecuador de 2008, la cual especifica de manera precisa las funciones y responsabilidades de las tres ramas del Estado: legislativa, ejecutiva y judicial.<sup>13</sup>

En Ecuador, el sistema judicial cumple un rol esencial al actuar como contrapeso frente a las otras dos ramas del Estado. Mientras que el poder legislativo se encarga de formular leyes y el poder ejecutivo de aplicarlas, el poder judicial tiene la responsabilidad de interpretar y aplicar las leyes, además de garantizar que las acciones gubernamentales se mantengan dentro de los límites establecidos por la Constitución y la legislación.

La autonomía judicial es un principio clave en Ecuador, respaldado tanto por la Constitución como por otras normativas legales. Los jueces y magistrados son seleccionados mediante concursos

públicos de méritos y oposición, asegurando la elección de profesionales competentes e imparciales. La remoción de jueces está regulada por procedimientos legales que protegen sus derechos y resguardan su independencia.

El Consejo de la Judicatura es el organismo encargado de administrar y supervisar el sistema judicial en Ecuador. Este consejo asegura la independencia del poder judicial y se encarga de la transparencia y eficiencia en la administración de justicia. A través de sus funciones de control y fiscalización, contribuye al fortalecimiento del Estado de Derecho y al respeto de los derechos humanos en el país.

La Carta Magna y las leyes ecuatorianas también prevén mecanismos de control y rendición de cuentas para asegurar la transparencia e imparcialidad del sistema judicial. Los jueces y

---

<sup>13</sup> «Constitucion-de-la-Republica-del-Ecuador\_act\_ene-2021.pdf». En el capítulo cuarto, se establecen los aspectos referidos a la función judicial, abarcando desde el artículo 167 hasta el 178. Dentro de este contexto, su composición, los requisitos y requerimientos, las disposiciones para el ejercicio de estas funciones y los principios establecidos para la debida diligencia.

magistrados deben adherirse a normas de conducta y ética profesional, y pueden enfrentar procesos disciplinarios en casos de conducta inapropiada o incumplimiento de sus deberes.

Además, los ciudadanos tienen el derecho de acudir a instancias judiciales para proteger sus derechos y denunciar posibles abusos de poder.

#### **1.4. El sistema judicial como garante de la legalidad y la justicia social**

La idea de justicia ha sido una constante en el pensamiento humano, evolucionando a través de los siglos, desde la justicia como una virtud individual hasta concebirse como un principio rector de las sociedades modernas. En este vasto marco, el sistema judicial emerge como el pilar fundamental para la garantía y la promoción de la justicia social.

Globalmente, el sistema judicial se erige sobre el principio de legalidad, entendido como la subordinación plena a la ley. Esta concepción implica que instituciones y ciudadanos se encuentran sujetos a lo dispuesto por las normas legales,

las cuales deben ser claras, públicas y aplicadas de manera consistente.

La autonomía de jueces y tribunales es esencial en este marco, ya que permite realizar interpretaciones objetivas que garantizan la aplicación adecuada de los principios que resguardan los derechos.

No obstante, la realidad revela que la influencia política en la justicia, la corrupción y el acceso restringido a la justicia son desafíos continuos que alteran la aplicación efectiva de la legalidad en diferentes contextos.

Al margen de la simple aplicación de las leyes, el sistema judicial posee

un imperativo ético: la promoción de la justicia social.

Esto se traduce en su labor por erradicar las desigualdades, garantizar derechos y ofrecer protección a los grupos vulnerables. Sin embargo, la justicia social no solo compete al ámbito de lo judicial; requiere de un esfuerzo intersectorial que abarque políticas públicas inclusivas, educación en derechos humanos y la eficaz administración de bienes y servicios públicos.

A nivel global, se observa un creciente reconocimiento de la justicia social como objetivo jurídico, aunque su implementación eficaz sigue siendo un reto significativo debido a estructuras socioeconómicas arraigadas y desigualdades sistemáticas.

Al centrarnos en Ecuador, nos encontramos con un sistema judicial que, en teoría, se alinea con los principios universales de legalidad y justicia social. La Constitución de 2008 estableció un marco legal progresista, enfocado en el respeto a

los derechos y la dignidad humana. Sin embargo, la práctica judicial ecuatoriana enfrenta desafíos similares a los observados globalmente: demoras en los procesos, falta de acceso a servicios legales en comunidades remotas y cuestionamientos sobre la independencia e imparcialidad judicial, especialmente en casos políticamente sensibles.

En Ecuador, el principio de legalidad se ve frecuentemente desafiado por la percepción de ineficacia y corrupción dentro de algunas instancias judiciales. Esta situación erosiona la confianza ciudadana en los organismos y complica la garantía de un estado de derecho robusto.

La reforma judicial iniciada en 2011 buscó abordar estos problemas; sin embargo, las mejoras han sido graduales y aún insuficientes. La capacitación continua, la meritocracia en el acceso a cargos judiciales y la transparencia en el funcionamiento



de la justicia son aspectos cruciales que aún requieren atención.

Ecuador ha realizado esfuerzos notables por incorporar la justicia social en su marco jurídico y político, con leyes orientadas a mejorar la equidad y proteger a los sectores más vulnerables. La introducción de la justicia indígena como sistema paralelo es un ejemplo reseñable de cómo el país busca respetar la pluralidad y ofrecer mecanismos de justicia adaptados a diferentes realidades culturales.

No obstante, la articulación entre justicia ordinaria y justicia indígena, así como la garantía de derechos fundamentales en ambos sistemas, presentan áreas de mejora en pro de una justicia social efectiva.

Sin embargo, es crucial destacar los desafíos específicos que se hacen evidentes dentro del sistema judicial ecuatoriano en su búsqueda de legalidad y justicia social.

Uno de los principales obstáculos radica en las demoras procesales, que no solo afectan la eficiencia del

sistema, sino que también pueden perjudicar los derechos de los ciudadanos, especialmente aquellos que buscan justicia en casos de violencia de género, derechos laborales o disputas de tierras.

La falta de acceso a servicios legales, especialmente en zonas rurales y comunidades indígenas, es otro problema significativo. La geografía montañosa y la dispersión poblacional dificultan el funcionamiento efectivo del sistema judicial a nivel nacional. Esto crea disparidades en el acceso a la justicia y desigualdades entre los distintos grupos sociales.

La percepción de corrupción e influencia política en el sistema judicial plantea preocupaciones significativas. Aunque se han implementado reformas, como la creación del Consejo de la Judicatura y sistemas de formación para jueces y personal judicial, los resultados han sido variados, ya que la divergencia que suele presentarse en la elección de jueces y la persistencia de prácticas clientelistas

y nepotistas siguen siendo barreras importantes para lograr un sistema judicial verdaderamente imparcial y eficiente.

En cuanto a la justicia social, Ecuador ha avanzado considerablemente en la protección de los derechos de grupos con mayores necesidades sociales y económicas. La adopción de leyes y políticas que fomentan la igualdad e inclusión social y el reconocimiento de la diversidad cultural son pasos significativos hacia una sociedad más justa y equitativa.

De la misma manera, la norma constitucional ecuatoriana reconoce a la justicia indígena, donde se intenta integrar la cultura de las comunidades indígenas en el sistema legal nacional.

Sin embargo, su integración con el sistema judicial formal ha sido desigual y ha generado tensiones, especialmente en casos que involucran conflictos de tierras o recursos naturales.

Para fortalecer la justicia social en Ecuador, es fundamental mejorar la coordinación y colaboración entre los sistemas judiciales ordinario e indígena, garantizando al mismo tiempo el respeto y garantías de los derechos humanos y procesales.

Esto requerirá un diálogo intercultural continuo y una mayor sensibilidad hacia las necesidades y perspectivas de las comunidades marginadas.

# Capítulo 2

## **El Papel del Sistema Judicial en la Resolución de Conflictos y la Paz Social**

## Capítulo 2

### **La función del sistema judicial en la resolución de disputas y el mantenimiento de la armonía social**

**E**n cualquier sociedad, el aparato judicial se ha constituido como una estructura diseñada para sostener la convivencia, la estabilidad y el desarrollo. Su papel va más allá de la simple resolución de conflictos, abarcando el impulso de valores esenciales que buscan promover condiciones aptas y dignas para los ciudadanos.

En este capítulo, abordaremos en detalle su papel fundamental en la sociedad, enfocándonos en tres aspectos cruciales: su rol en la resolución de disputas y conflictos, su aporte a la formación de paz y la democracia, y su relevancia en la administración de justicia para prevenir y mitigar conflictos sociales.

Primero, es esencial entender la función principal del sistema judicial en la resolución de conflictos y

disputas que surgen inevitablemente en la interacción humana. De esta forma, los tribunales y las instancias judiciales actúan como árbitros imparciales, encargados de interpretar y aplicar la ley para resolver conflictos de manera justa y equitativa.

Desde disputas civiles sobre contratos y propiedades hasta conflictos penales que involucran violaciones a la ley, el su participación representa una herramienta indispensable para la legalidad y la justicia en una sociedad.

Pero el papel del sistema judicial trasciende la simple resolución de conflictos individuales. En su esencia, juega un papel crucial en la creación de una cultura de paz y convivencia democrática al

establecer precedentes legales, fundamentar bases jurisprudenciales y fomentar el respeto por el estado de derecho. Cuando los ciudadanos confían en la imparcialidad e integridad del sistema judicial, se fortalece el tejido social, fomentando la cohesión y la armonía entre los diversos actores de la sociedad.

En este sentido, los tribunales se convierten en guardianes de la paz social al garantizar que las normas y los principios democráticos se apliquen de manera justa y equitativa para el beneficio de todos los ciudadanos.

Además de su rol retrospectivo tiene una función esencial en la administración de justicia para prevenir y reducir tensiones sociales. Al funcionar como un instrumento de control y supervisión sobre las acciones de individuos y entidades, el sistema judicial ayuda a disuadir comportamientos ilegales y a fomentar el cumplimiento de leyes y regulaciones.

La certeza de que las infracciones legales serán sancionadas de manera justa y proporcional contribuye a mantener el orden social y a evitar el agravamiento de conflictos que podrían derivarse de la impunidad y la injusticia.

En suma, la relevancia del sistema judicial en la sociedad se manifiesta en su capacidad para asegurar que la justicia sea accesible, equitativa y efectiva para todos los ciudadanos, sin importar su condición socioeconómica, género, origen étnico u otras características.

Un sistema judicial que funcione adecuadamente fortalece la confianza de las personas en las instituciones que gestionan la democracia y ayuda a asegurar que se mantenga el estado de derecho. Esto, a su vez, establece las condiciones necesarias para que la sociedad sea más justa, tranquila y exitosa.

Por lo tanto, analizaremos en detalle cómo el sistema judicial aborda estos desafíos y contribuye al

bienestar y la estabilidad de la sociedad. A través de estudios de casos, análisis comparativos y entrevistas con expertos en el campo, exploraremos las fortalezas

y debilidades del sistema judicial en su función crucial de resolver conflictos, promover la paz y garantizar la justicia para todos los ciudadanos.

## **2.1. Función del sistema judicial en la resolución de disputas y conflictos en la sociedad.**

La actuación del sistema judicial dentro de la estructura estatal es crucial para la gestión de conflictos e inconvenientes surgidos en el tejido social. Su misión trasciende la mera aplicación de normativas legales; se establece como columna vertebral de la estabilidad social, asegurando la dispensa de justicia equitativa para la ciudadanía. Este ensayo se propone explorar la intrincada función que cumple el sistema judicial, analizando sus implicancias, retos y el impacto que tiene en la sociedad.

En primer lugar, debemos subrayar la importancia capital que el sistema judicial ostenta dentro del esquema gubernamental, cuyo objetivo es preservar tanto el orden como la cohesión comunitaria.

Mediante la interpretación y ejecución de leyes, los juzgados dirimen litigios de diversa índole, abarcando desde disputas civiles hasta procedimientos penales. Esta herramienta se sustenta en principios de legalidad y equidad, presuponiendo que los magistrados desarrollen su labor de forma neutral, aplicando normativas de modo justo y uniforme.

No obstante, la realidad operacional del sistema judicial exhibe una complejidad superior a la idealización previamente descrita. En numerosas ocasiones, la justicia resulta ser menos accesible y equitativa de lo esperado. Se evidencia que el sistema judicial puede verse aquejado por retrasos, corrupción, insuficiencia de recursos

y prejuicios subyacentes. Estas deficiencias pueden mermar su eficacia en la resolución de disputas y disminuir la confianza pública en su capacidad para actuar de manera imparcial e íntegra.

Uno de los retos más significativos para el sistema judicial en su cometido de dirimir conflictos es la cuestión de accesibilidad. En diversas naciones, especialmente aquellas con limitaciones económicas, acceder a servicios de justicia puede resultar excesivamente oneroso o logísticamente difícil. Individuos con recursos económicos reducidos o residentes de áreas remotas pueden encontrarse con obstáculos notables para acudir a los tribunales y obtener representación legal adecuada. Esta disparidad en el acceso a servicios jurídicos puede perpetuar ciclos de desigualdad e injusticia social, ampliando la brecha entre quienes tienen medios para procurarse resolución legal y aquellos que carecen de tal posibilidad.

Otro escollo de gran envergadura es la corrupción dentro de las estructuras judiciales. La corrupción puede adoptar múltiples formas, incluyendo sobornos, extorsiones e indebidas influencias políticas en las decisiones judiciales. Cuando los jueces son objeto de sobornos o coacciones, se compromete la neutralidad y la integridad del sistema. La corrupción también puede agravar las desigualdades preexistentes, facilitando que individuos con recursos económicos o influencia política eludan la responsabilidad por sus actos.

Adicionalmente, el sistema judicial puede enfrentarse a desafíos relacionados con recursos y capacidad operativa. La escasez de personal cualificado, infraestructura inadecuada y financiamiento insuficiente pueden limitar la habilidad del sistema para gestionar eficientemente la demanda de trabajo y brindar soluciones rápidas y efectivas a los conflictos. Esto puede originar retrasos prolongados en procedimientos judiciales,

causando frustración y pérdida de confianza entre las partes involucradas.

Los prejuicios arraigados en el sistema judicial también constituyen un desafío relevante en la gestión de litigios y controversias. Sesgos basados en factores como raza, género, clase social o características personales pueden influenciar los fallos judiciales, derivando en veredictos injustos o desproporcionados. Tales prejuicios pueden ser especialmente marcados en casos que involucran a colectivos marginalizados o vulnerables, donde estereotipos y preconcepciones pueden afectar la percepción de culpabilidad o inocencia.

A pesar de estos obstáculos, es esencial reconocer que el sistema judicial posee el potencial para intervenir de manera positiva dentro de la sociedad. Cuando su funcionamiento es el adecuado, puede proveer justicia a las víctimas, exigir responsabilidades a los transgresores y fomentar la paz y la estabilidad social. Los tribunales

pueden constituirse en ámbitos para la resolución pacífica de disputas, ofreciendo un espacio donde las partes involucradas puedan exponer sus argumentos de manera civilizada y recibir una sentencia imparcial y justa.

Para enfrentar los retos que el sistema judicial experimenta en la resolución de conflictos, se torna imperativo implementar reformas substanciales en diversos niveles. Esto podría incluir medidas orientadas a efectivizar el acceso a la justicia, como la instauración de asesorías legales gratuitas o a bajo costo y la ampliación de servicios de representación legal sin costo para quienes lo requieran. Adicionalmente, es necesario adoptar acciones contundentes para combatir la corrupción y asegurar la independencia e imparcialidad de las instancias judiciales.

La modernización de la infraestructura judicial, el aumento en la capacitación de personal y la mejora en la asignación de recursos son pasos fundamentales para



incrementar la eficiencia y la efectividad con la que se manejan las disputas legales.

Estas reformas no solo abordarían las problemáticas actuales, sino que también prepararían al sistema judicial para enfrentar los desafíos futuros de manera más efectiva, asegurando así un acceso más justo y equitativo a la justicia para toda la ciudadanía.

En concordancia con estos argumentos, Gladys Álvarez<sup>14</sup> destaca que la implementación de métodos alternativos para solucionar disputas (MASD) se destaca como un pilar fundamental en la evolución y modernización de la justicia. Este término abarca cualquier método de solución de conflictos que evite el veredicto judicial, el recurso a la fuerza o la simple negligencia de la disputa.

Se argumenta que proporcionar a la población un sistema de justicia diversificado es un deber intrínseco

de cualquier nación democrática y moderna que se preocupe por el bienestar de sus ciudadanos. Esto implica que la responsabilidad del Estado de salvaguardar los derechos de los individuos no se cumple únicamente mediante el establecimiento de un sistema judicial eficaz, íntegro y transparente. También requiere la promoción y apoyo de mecanismos alternativos para la resolución de disputas. Según la naturaleza del conflicto, estos mecanismos pueden ser más eficientes y económicos, ofrecer resoluciones más rápidas, prevenir futuras disputas y tener un mayor valor social al facilitar y mejorar la relación entre las partes involucradas.

Así, se reconoce que los elementos que conforman la justicia, no siempre permiten la resolución de conflictos legales, y que las concepciones de justicia y administración judicial deben

---

<sup>14</sup> Álvarez, «Los métodos alternativos de solución de conflictos en los procesos judiciales: experiencias argentinas».

ampliarse para incluir definiciones más amplias e inclusivas.

En este sentido, por ejemplo, afirmar que "únicamente mediante el fallo de un juez los ciudadanos pueden obtener justicia" limita la comprensión de justicia legal y omite la justicia inherente al caso, la cual puede ser resuelta satisfactoriamente por las partes involucradas sin necesidad de intervención estatal, salvo que estén en juego el orden público u otras justificaciones que superen el beneficio individual.

Esta visión sobre los Mecanismos Alternativos de Solución de Disputas (MASD) resalta la promoción, legalización y provisión de estas alternativas por parte de las decisiones judiciales, como parte de las responsabilidades del Estado hacia la sociedad e integran los servicios de administración de justicia.

Existen razones específicas para la implementación y formalización de sistemas MASD en la sociedad. Es

fundamental para el bienestar tanto personal como social realizar una transformación en la manera de abordar los conflictos, moviéndose de un enfoque que permita la confrontación y competitividad hacia uno que promueva la colaboración y la resolución pacífica. Además, es crucial que el sistema judicial y sus jueces restauren la confianza y la credibilidad que se han visto afectadas por varios factores.

Estos factores incluyen la lentitud judicial, el acceso a la justicia, la tendencia tradicional a asociar conflictos con litigios, y los costos asociados a la resolución de disputas, aspectos que requieren un análisis y reflexión profundos.

Por ende, es esencial redefinir el objetivo del bienestar social para incorporar metas tales como facilitar el acceso a los procedimientos más eficaces, proporcionar una mayor protección legal a costos reducidos, diversificar los métodos de resolución de conflictos, promover la desjudicialización del sistema,

fomentar una cultura de diálogo y superar la mentalidad litigiosa.

Al indagar dentro del escenario ecuatoriano, se evidencia que una de las principales formas en que el sistema judicial actúa en la resolución de disputas es a través de los tribunales. Estos tribunales, que incluyen tanto tribunales ordinarios como tribunales especializados en áreas específicas del derecho, tienen la autoridad para resolver una amplia gama de disputas legales, desde conflictos civiles y comerciales hasta casos penales y de familia.

En el ámbito civil, los tribunales ecuatorianos son responsables de resolver disputas entre individuos, empresas y otras entidades en áreas como contratos, propiedad, herencias y responsabilidad civil. Los tribunales civiles emplean procedimientos legales establecidos para analizar los argumentos de las partes, evaluar la evidencia presentada y emitir un fallo que resuelva la disputa de manera justa y equitativa.

Desde la perspectiva penal, el sistema judicial ecuatoriano es el responsable de realizar todo el proceso de investigación y penalización de los delitos perpetrados por individuos. Los tribunales penales garantizan que se respeten los derechos de los acusados durante el proceso legal y que se aplique la ley de manera justa y proporcional. Así, el sistema penal busca rehabilitar a los infractores y brindar acciones de protección mediante el establecimiento de penas adecuadas.

Además de los tribunales, el sistema judicial en Ecuador también utiliza otros mecanismos y procesos para resolver disputas de manera efectiva. El artículo 190 de la Constitución de la República del Ecuador proporciona un marco importante para la resolución de conflictos fuera de los tribunales convencionales. Al reconocer los diversos métodos alternativos como formas válidas de resolver disputas, el Estado ecuatoriano destaca la relevancia de opciones que generen

menos confrontaciones y que pueden proporcionar soluciones más efectivas y conciliatorias para las partes implicadas.<sup>15</sup>

Este enfoque refleja una comprensión profunda de la naturaleza de ciertos litigios, aquellos en los que se permite la negociación y el acuerdo entre las partes. Se trata de situaciones donde los derechos en juego son de aquellos que se pueden ceder o transigir. Esto pone de manifiesto una visión de la justicia que va más allá de la confrontación en tribunales, abriendo paso a una búsqueda consensuada de soluciones que beneficien a todas las partes involucradas.

Dentro de estos mecanismos se encuentra la mediación, la cual representa la actuación de un tercero imparcial que facilita la negociación y llegar a un acuerdo entre las partes en conflicto. La mediación es

especialmente útil en casos civiles y familiares, donde las partes pueden tener un interés en preservar la relación o resolver la disputa de manera rápida y confidencial.<sup>1617</sup>

La mediación y el arbitraje, como procedimientos alternativos destacados por la Constitución, promueven un ambiente donde el diálogo y el acuerdo prevalecen sobre el conflicto. Estas opciones ofrecen una vía para que los individuos resuelvan sus desacuerdos de una forma más flexible y personalizada, considerando las necesidades y los deseos específicos de las partes. Además, estos métodos pueden resultar en soluciones más rápidas y con menor costo, comparado con los procedimientos legales estándar, lo que no solo beneficia a las partes implicadas sino que también despeja las cargas de los sistemas jurisdiccionales tradicionales.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> «Constitucion-de-la-Republica-del-Ecuador\_act\_ene-2021.pdf».

<sup>16</sup> Asamblea Nacional, «Código Orgánico General de Procesos», artículo 294, numeral 6.

<sup>17</sup> Asamblea Nacional, «Ley de Arbitraje y Medicación», artículo 43, 47.

<sup>18</sup> Ibid, Artículo 5.

Otro mecanismo importante en la resolución de disputas en Ecuador es la conciliación que involucra a un tercero imparcial que ayuda a las partes a alcanzar un acuerdo que sea aceptable para ambas. La conciliación se utiliza principalmente en disputas civiles y comerciales, donde las partes pueden tener un interés en evitar un litigio prolongado y costoso.<sup>19</sup>

Además de estos mecanismos formales de resolución de disputas, el sistema judicial en Ecuador también fomenta la resolución de conflictos a través de medios alternativos, como la negociación y el diálogo. Estos enfoques pueden ser útiles en situaciones donde las partes prefieren resolver la disputa de manera informal y sin la intervención de terceros.

De esta manera, el sistema judicial en Ecuador actúa a través de una variedad de mecanismos y procesos, incluyendo los tribunales, la mediación, la conciliación y otros medios alternativos. El objetivo principal del sistema judicial es asegurar que las leyes y normativas se apliquen efectivamente, protegiendo los derechos de los ciudadanos y mantener la paz social. A pesar de enfrentar desafíos como la falta de recursos y la corrupción, el sistema judicial sigue siendo crucial para el estado de derecho en Ecuador. Su papel en la resolución de disputas es necesario para fortalecer la democracia y fomentar el desarrollo del país.

---

<sup>19</sup> Asamblea Nacional, «Código Orgánico General de Procesos». Art. 233.

## **2.2. Aporte del sistema judicial en la promoción de la convivencia democrática, la paz y la cultura**

Otra de las características del sistema judicial es su importancia en las democracias, siendo un pilar vital para la defensa de los derechos individuales, asegurando el cumplimiento de las leyes y fomentando un ambiente de paz civil. La solidez y el avance de cualquier país se apoyan significativamente en la eficiencia y credibilidad de su estructura judicial. De esta manera, el impacto de dicho sistema en el fomento de una cultura pacífica y de convivencia democrática abarca varios aspectos clave que se entremezclan para favorecer un ambiente de cohesión social.

En su función principal, el sistema judicial actúa como un mediador para la resolución de litigios y controversias de un modo justo. La presencia de un mecanismo judicial imparcial y abierto asegura que cada individuo tenga acceso a recursos legales para la solución de sus conflictos, evitando así recurrir a la

violencia. Este aspecto es esencial para el mantenimiento de la armonía social, ya que ofrece un medio legítimo y legal para tratar las disputas y promover equidad.

A partir de la interpretación y aplicación de leyes y tratados internacionales relacionados con los derechos humanos, los tribunales aseguran la protección de los individuos y grupos en situaciones de vulnerabilidad, como el derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad y a la dignidad. Esta función no solo promueve una cultura de respeto y tolerancia, sino que también fortalece la estructura social, garantizando un trato justo y respetuoso para todos los miembros de la comunidad.

Además, el sistema judicial cumple con una función educativa y de prevención en el cultivo de una cultura de paz y convivencia democrática. A través de la emisión de fallos ejemplares y la

administración de justicia de forma visible y puntual, se pueden destacar los valores y normas sociales vigentes. Este aspecto educativo es vital para el desarrollo de ciudadanos informados y comprometidos con el cumplimiento de la legislación nacional y los derechos humanos.

**El sistema judicial también es clave en el fortalecimiento del estado de derecho, actuando como un balance ante el poder político y económico. Al asegurar la división de poderes y la verificación de la legalidad de las acciones gubernamentales y privadas, se puede evitar el abuso de autoridad y proteger los intereses generales.**

Este papel es indispensable para la conservación de una democracia basada en la primacía de la ley y la transparencia.

En el Ecuador, el tejido judicial se ha configurado como un pilar fundamental en la cultivación de un entorno de armonía y coexistencia

dentro de los preceptos democráticos.

Este aspecto cobra especial relevancia en un escenario históricamente marcado por conflictos sociales arraigados, brechas de desigualdad y transgresiones a los derechos elementales de las personas.

Con el paso de los años, Ecuador ha sido testigo de una evolución notable de su estructura judicial, que ha buscado no solo reforzar los cimientos de su democracia sino también asegurar un marco de justicia y salvaguarda para los derechos de cada uno de sus habitantes.

El sistema judicial ecuatoriano se distingue por su compromiso con la preservación de la independencia judicial y la protección de la separación de poderes. Con la Constitución de 2008, se implementaron reformas significativas para fortalecer la autonomía de la judicatura y asegurar su independencia frente a

otros órganos del Estado. Esta valorización de la independencia judicial es crucial para promover un entorno de paz, permitiendo que los tribunales resuelvan los conflictos de manera imparcial y sin prejuicios.

Por otro lado, el marco judicial en Ecuador ha emprendido iniciativas enfocadas en democratizar la justicia, sin distinción alguna por su estatus social, capacidad económica o pertenencia étnica.

Se han puesto en marcha programas de asesoramiento legal sin costo y se han implementado cortes especializadas para atender casos de violencia, discriminación y desigualdad. Dichas acciones son cruciales para promover un sentido de igualdad e inclusión en la sociedad ecuatoriana, contribuyendo de esta manera al desarrollo de la paz.

En cuanto a la defensa de los derechos humanos, Ecuador ha avanzado considerablemente, especialmente con la fundación de la Corte Constitucional en 2008, la cual

ha reforzado esta misión, a través de la revisión de legislaciones y resolución de litigios relacionados con la vulneración de prerrogativas constitucionales, así como la adhesión a instrumentos internacionales, donde la legislación ha dado pasos significativos hacia la mejora en la tutela de los derechos humanos dentro de las fronteras nacionales.

Un elemento destacado de la función judicial ecuatoriana en esta área, es su intervención en la mediación y resolución de controversias sociales y políticas.

Los tribunales han jugado un papel medular en arbitrar y encontrar soluciones a disputas entre distintos sectores de la sociedad, incluyendo al gobierno, comunidades indígenas, grupos sociales y el ámbito empresarial. Estas gestiones han sido vitales en la reducción de tensiones, promoviendo el uso del diálogo y la negociación como herramientas para superar desacuerdos de forma pacífica y democrática.



No obstante, el camino hacia una cultura de paz sostenible y democracia cabal aún encuentra obstáculos, tales como la corrupción, insuficiencia de recursos y demoras en la administración de justicia, los cuales impiden una operatividad óptima de la justicia en el Ecuador.

Persisten, además, retos estructurales como la discriminación y la impunidad, así como barreras al momento de acceder a la justicia, lo que compromete la protección de los derechos humanos y la aspiración de una cultura de paz verdaderamente inclusiva y justa.

### **2.3. Importancia de la administración de justicia en la seguridad ciudadana**

Entender la relación entre la seguridad ciudadana y el sistema de administración de justicia requiere una reflexión profunda sobre los elementos interconectados que conforman ambos conceptos y su impacto en la sociedad.

La seguridad ciudadana, en su esencia, se refiere al resguardo de la comunidad, la integridad física y la propiedad de los individuos dentro de una comunidad.

Por otro lado, el sistema de administración de justicia es la integración institucional, que conjugan la aplicación de leyes y procesos diseñados para garantizar

el fiel cumplimiento legislativo y la resolución imparcial de disputas.

En este análisis, es crucial comprender que la seguridad ciudadana y el sistema de administración de justicia están intrínsecamente relacionados.

El grado de efectividad y legitimidad de un sistema de justicia tiene un impacto directo en como la ciudadanía percibe la seguridad que le ofrece el Estado. Cuando los individuos confían en que sus derechos serán protegidos y que los delitos serán castigados de manera adecuada, se sienten más seguros y confiados en su entorno.

Sin embargo, si el acceso a este sistema se ve truncado por barreras significativas como es la corrupción en el sistema judicial, la impunidad y la discriminación, su confianza en las instituciones de justicia puede verse limitada afectando la seguridad ciudadana.

Ante esta disyuntiva, es más probable que busquen otras formas de resolver conflictos, incluida la justicia por mano propia, lo que puede generar un ciclo de violencia y desconfianza en la sociedad.

Por otro lado, un sistema justicia alineado efectivamente a lo establecido por las normas y su fiel cumplimiento, puede aportar significativamente a la evolución de una sociedad más segura y pacífica.

Cuando los ciudadanos tienen acceso a mecanismos legales justos y eficaces para resolver disputas y hacer valer sus derechos, se fortalece el tejido social y se fomenta el respeto por la ley.

Razones por las cuales, es importante reconocer que cuando el

estado de derecho se debilita, ya sea debido a la corrupción, la incompetencia o el autoritarismo, la seguridad ciudadana se ve amenazada y los derechos de los individuos están en riesgo.

Al analizar esta temática dentro del Ecuador, no cabe duda de que la relación entre la seguridad ciudadana y el sistema de administración de justicia reviste una importancia crucial para el bienestar y la estabilidad del país.

Cuando los individuos confían en que los responsables de cometer delitos serán llevados ante la justicia de manera adecuada, se sienten más seguros y protegidos en su entorno.

También implica aspectos preventivos, como la promoción de la justicia social y los derechos humanos. Un sistema de administración de justicia efectivo no solo castiga los delitos, sino que también trabaja en la prevención de la delincuencia a través de políticas y programas integrales que abordan

las causas subyacentes de la criminalidad.

Sin embargo, como muchos países latinoamericanos, Ecuador enfrenta desafíos en ambos frentes. La seguridad ciudadana se ve afectada por diversos factores, como la delincuencia común, la violencia

de género, el crimen organizado y la corrupción.

Por lo que, si los ciudadanos tienen acceso a mecanismos legales justos y eficaces para resolver disputas y hacer valer sus derechos, se fortalece el estado de derecho y se fomenta el respeto por la ley.



The background of the page is a blurred, high-angle photograph of several people walking on a light-colored, square-tiled floor. The figures are out of focus, creating a sense of movement and a busy environment. The overall color palette is light and neutral, with the text in a dark blue color.

**PARTE II.**  
**EL SISTEMA JUDICIAL Y**  
**LA CORRUPCIÓN**

## Parte II



### El Sistema Judicial y la corrupción

#### Introducción

**E**n esta sección de nuestra obra, analizamos una de las problemáticas más complejas y profundas que enfrentan las instituciones democráticas actuales: la interacción entre el sistema judicial y las actuaciones relacionadas con la corrupción.

La naturaleza de esta relación no solo revela las fisuras en los cimientos de los sistemas legales, sino que también ofrece una perspectiva única sobre cómo la corrupción se infiltra y se arraiga

dentro de los pilares que deberían sostener la justicia y la equidad en nuestra sociedad.

La relación intrínseca entre el sistema judicial y la corrupción emerge como un tema de estudio crítico, crucial para entender no solo cómo la corrupción se manifiesta en este poder estatal, sino también cómo su presencia promueve los principios fundamentales de la justicia y la imparcialidad.

Este análisis nos invita a reflexionar sobre los mecanismos a

través de los cuales el poder judicial, destinado a ser el árbitro imparcial y el guardián de la ley, puede desviarse de su noble propósito bajo el peso de la corrupción.

Exploraremos las dinámicas y factores que facilitan la corrupción en el poder judicial, enfocándonos en cómo las deficiencias para garantizar la transparencia, la insuficiencia de acciones para la adecuada rendición de cuentas, y la politización de los nombramientos judiciales crean un espacio para germinar la corrupción.

Esta parte de nuestro estudio explica cómo estos elementos no solo permiten, sino que, en muchos casos, incentivan prácticas corruptas, poniendo de relieve la urgente necesidad de reformas estructurales profundas.

Finalmente, consideraremos el impacto devastador que la corrupción genera a nivel judicial, y sus consecuencias en la sociedad y la democracia.

Este análisis va más allá de las consecuencias jurídicas inmediatas para abordar cómo la erosión de la confianza en el sistema judicial afecta los principios morales y cívicos de una nación.

Al debilitar la confianza pública en las instituciones estatales, la corrupción en el poder judicial no solo impide el acceso a la justicia, sino que también compromete los pilares sobre los cuales se construyen nuestras democracias.

A través de esta sección, intentamos ofrecer una comprensión integral de cómo el sistema judicial paradójicamente, puede convertirse en uno de los refugios para la corrupción.

# Capítulo 3

## La Relación Intrínseca entre el Sistema Judicial y la Corrupción

# Capítulo 3

## La Relación Intrínseca entre el Sistema Judicial y la Corrupción

**E**n el marco del Capítulo 3 se explora un terreno complejo y crucial: la tipología de la corrupción judicial y el análisis comparativo de su naturaleza y gravedad en diversos contextos jurídicos. Es en este espacio donde converge tanto la realidad tangible de los sistemas legales como las complejas dinámicas humanas que influyen en ellos.

Al abordar la tipología de la corrupción judicial, se vislumbra un ejercicio de discernimiento meticuloso, desglosando las distintas formas y manifestaciones que esta puede adoptar dentro del sistema judicial.

Desde la coacción y el soborno hasta la manipulación de evidencia o la obstrucción de la justicia, cada manifestación revela una faceta

distinta de un problema sistémico que deteriora la confianza en el sistema legal y menoscaba su integridad.

Este enfoque comparativo nos permite trascender hacia un territorio de contrastes y similitudes, donde nos enfrentamos a la compleja tarea de evaluar la naturaleza y gravedad de la corrupción judicial en distintos contextos.

Desde sistemas judiciales marcados por un alto grado de eficiencia, hasta aquellos donde la corrupción se ha arraigado profundamente en las estructuras institucionales, cada caso ofrece lecciones valiosas sobre los desafíos y las oportunidades en la lucha contra este flagelo.

En definitiva, este capítulo nos invita a reflexionar sobre la



intersección entre el sistema judicial y la corrupción, recordándonos que la integridad del primero es esencial para la preservación de un Estado de democracia y el resguardo de los derechos de los ciudadanos.

En un mundo donde la confianza en las instituciones se ve

constantemente cuestionada, este análisis nos insta a enfrentar los desafíos con determinación y a trabajar hacia la construcción de sistemas judiciales más justos, transparentes y respetuosos de los principios democráticos.

### **3.1. Tipología de la Corrupción Judicial: Exploración de las formas y manifestaciones de corrupción dentro del sistema judicial.**

Estamos inmersos en una era en la que el término "corrupción" incluye una diversidad de significados y despierta fuertes emociones en la sociedad. Algunos ven la corrupción como un problema de índole moral, mientras que otros la entienden como una cuestión arraigada en la cultura y estructura de las organizaciones, que no solo toleran, sino que incluso fomentan tales conductas.

Sin embargo, una tercera perspectiva sostiene que limitar la discusión sobre la corrupción únicamente al ámbito organizacional

es simplificar en exceso la complejidad del problema. Esta visión argumenta que detrás de cada funcionario corrupto hay otro individuo que actúa como el instigador de dichos actos. Además, sugiere que la corrupción está estrechamente relacionada con otros factores externos a la organización, como la forma en que se realizan negocios y se generan riquezas en la sociedad.

Esta diversidad de enfoques revela que el problema de la corrupción es multifacético y tiene

raíces profundas en la estructura misma de la sociedad.

Los sistemas judiciales, por su parte, no han escapado a este problema. Han enfrentado la corrupción desde una doble perspectiva: por un lado, luchando contra la corrupción interna dentro de sus propias instituciones, y por otro, abordando casos de corrupción que involucran a actores externos a la judicatura.<sup>20</sup>

La corrupción dentro del sistema judicial se ha convertido en un fenómeno multifacético y complejo, que desvirtúa los cimientos mismos del Estado que buscan garantizar la justicia.

En su esencia, la corrupción judicial se manifiesta a través de una amplia gama de prácticas y comportamientos indebidos que distorsionan el funcionamiento adecuado de los tribunales y comprometen la imparcialidad, la equidad y la integridad del proceso

legal. Este análisis buscará arrojar luz sobre las diversas dimensiones de este problema, explorando sus causas, consecuencias y posibles estrategias de prevención y combate.

Según lo establece Carvajal et al. (2019), *“es un problema que afecta a la mayoría de los países del mundo en diferentes grados. Enfrentar y erradicar la corrupción es un desafío importante que involucra no solo a los gobiernos locales, sino también a la sociedad en general y a las organizaciones internacionales que trabajan para asegurar la transparencia en los Estados”*<sup>21</sup>.

Este tema se ha configurado como un problema de profundo interés y preocupación en América Latina, dado su impacto en múltiples facetas sociales. Desde la desigualdad hasta el crecimiento de la economía, pasando por la superación de conflictos, la corrupción se entrelaza con diversos aspectos de la vida

---

<sup>20</sup> Binder, «Corrupción y sistemas judiciales».

<sup>21</sup> Carvajal Martínez et al., «La corrupción y la corrupción judicial».

social, política y económica de la región.

La corrupción se asocia estrechamente con la desigualdad, ya que algunos individuos o grupos tienen acceso privilegiado a recursos y oportunidades, mientras que otros se ven marginados y excluidos.

Esta desigualdad profundiza las brechas sociales y económicas, alimentando la percepción de injusticia y frustración entre amplios sectores de la población.

Asimismo, la corrupción puede obstaculizar la superación de conflictos al perpetuar la impunidad y la falta de rendición de cuentas.

Cuando los actores políticos y económicos están más preocupados por proteger sus intereses personales que por resolver los conflictos de manera justa y equitativa, se generan tensiones y divisiones que dificultan la construcción de consensos y la

búsqueda de soluciones sostenibles.<sup>22</sup>

En cuanto al desarrollo económico, la corrupción actúa como un freno que obstaculiza la inversión, desalienta la innovación y distorsiona el funcionamiento eficiente de los mercados.

Los recursos desviados hacia actividades corruptas podrían haberse destinado a proyectos de infraestructura, educación o salud que beneficien a toda la sociedad. Además, la falta de transparencia y predictibilidad en el entorno empresarial ahuyenta a inversores y reduce la competitividad de la región a nivel internacional.

En el aspecto específico de la justicia, la corrupción deja efectos desbastadores. Cuando los jueces y funcionarios judiciales son percibidos como corruptos o parciales, se erosiona la legitimidad de sus decisiones y se debilita la protección de los derechos.

---

<sup>22</sup> Claudio Nash Rojas y Marie Fuchs, «Corrupción, Estado de derecho y derechos humanos».

Esto puede llevar a un aumento de la violencia, la inseguridad y la conflictividad social, así como a un

deterioro de la calidad de la democracia y la gobernabilidad en la región.

### ***La politización del sistema judicial y sus consecuencias***

La politización del sistema judicial es un fenómeno complejo y preocupante que tiene importantes implicaciones para la independencia, imparcialidad y eficacia de la justicia. Este fenómeno se refiere a la influencia indebida de intereses políticos en el funcionamiento del sistema judicial, ya sea por medio del establecimiento de jueces afines a determinados partidos políticos, la interferencia en procesos judiciales o la manipulación de decisiones judiciales con fines políticos.

Una de las consecuencias más graves de la politización del sistema judicial es la pérdida de la confianza social en la imparcialidad y la integridad de la justicia.

Esto puede generar un ambiente de descontento y desconfianza en las instituciones democráticas,

alimentando la polarización política y la falta de cohesión social.

Además, la politización del sistema judicial puede conducir a la instrumentalización de la justicia con fines políticos. Los casos de persecución judicial selectiva, donde se utilizan los recursos del Estado para perseguir a opositores políticos o silenciar voces críticas, son ejemplos claros de cómo la politización puede pervertir el propósito mismo de la justicia y convertirla en una herramienta de represión y control político.

Por otro lado, la politización del sistema judicial también puede fomentar la corrupción, al crear incentivos perversos para que los jueces y funcionarios judiciales actúen en función de intereses políticos en lugar de criterios legales y éticos.

La designación de jueces por motivos políticos puede generar lealtades indebidas y comprometer la independencia de los tribunales, facilitando así la influencia indebida y la corrupción en este sistema.

En este sentido, es crucial destacar los esfuerzos realizados por distintos organismos y agencias internacionales, que buscan abordar el problema de la corrupción judicial a través de proyectos y medidas específicas. Estas iniciativas buscan fortalecer la independencia y la transparencia del sistema judicial, así como promover una cultura de integridad y ética en el ámbito judicial.<sup>23</sup>

Sin embargo, es importante reconocer la complejidad y los desafíos inherentes a la implementación de reformas judiciales.

La designación de jueces basada en criterios políticos, la falta de sistemas efectivos de carrera judicial y la ausencia de indicadores de

desempeño son solo algunos de los obstáculos que deben abordarse para garantizar la eficacia y la legitimidad del sistema judicial.

Así, la politización del sistema judicial representa un desafío significativo para la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento del Estado de derecho.

Para abordar este problema de manera efectiva, es necesario adoptar un enfoque integral que combine medidas de reforma institucional, supervisión independiente y fortalecimiento de la cultura de integridad en el ámbito judicial.

Solo así podremos garantizar que el sistema judicial cumpla su función crucial, otorgándoles a los ciudadanos la promoción de la justicia y la equidad en nuestras sociedades.

---

<sup>23</sup> Asís, «La corrupción judicial».

## ***Implicaciones de la corrupción en la administración de justicia desde el ámbito público***

La corrupción dentro de esta estructura es una manifestación grave y perniciosa de la corrupción pública. Este fenómeno, que puede manifestarse de diversas maneras y en diferentes contextos, implica el abuso de poder, la manipulación de procesos legales y la violación de normas éticas y legales por parte de aquellos encargados de administrar la justicia.

En un sentido amplio, abarca un conjunto de conductas ilícitas que distorsionan el comportamiento del sistema judicial y afecta negativamente la confianza en la imparcialidad y la integridad de las instituciones judiciales.

Estas conductas pueden incluir desde el soborno y la extorsión hasta el favoritismo, el nepotismo y la negligencia deliberada en el cumplimiento de las responsabilidades judiciales.

Una de las formas más comunes de corrupción en esta área es el soborno, el cual debilita la igualdad ante la ley y mina la confianza en la imparcialidad del sistema judicial. Los jueces, fiscales, abogados y otros funcionarios judiciales pueden ser sobornados para dictar fallos favorables a una de las partes en un caso, ignorar pruebas incriminatorias o retrasar deliberadamente el proceso judicial.<sup>24</sup>

Además del soborno, otras formas de corrupción en la administración de justicia incluyen el favoritismo y el nepotismo, que implican el trato preferencial hacia ciertas partes en detrimento de otras basadas en relaciones personales, vínculos familiares o afiliaciones políticas.

Este tipo de conducta puede distorsionar el proceso judicial y

---

<sup>24</sup> Gómez Pérez, «Jueces y derechos humanos. Hacia un sistema judicial transnacional».

minar la confianza pública en la imparcialidad del sistema judicial.

Otra forma de corrupción en la administración de justicia es la extorsión, que implica el uso indebido del poder judicial para obtener beneficios personales o políticos. Los jueces y otros funcionarios judiciales pueden extorsionar a las partes en un caso exigiendo sobornos o favores a cambio de dictar fallos favorables o acelerar el proceso judicial. Este tipo de conducta es especialmente perniciosa, ya que no solo viola la ley, sino que también compromete la integridad del sistema judicial en su conjunto.

Además de estas formas de corrupción, también existen prácticas corruptas relacionadas con la manipulación de procesos judiciales, como la fabricación de pruebas, la obstrucción de la justicia y el uso indebido de recursos judiciales para perseguir intereses personales o políticos.

Estas conductas pueden tener consecuencias devastadoras para las víctimas de la injusticia y la credibilidad de la estructura judicial en general.

Este tipo de corrupción puede tener una incidencia relevante en la sociedad en su conjunto<sup>25</sup>. También, puede alimentar el ciclo de la corrupción al crear un ambiente en el que aquellos que buscan eludir la ley creen que pueden hacerlo impunemente.

Para abordar eficazmente esta problemática que se agudiza día a día, es necesario implementar acciones integrales que involucren la actuación efectiva de los diversos actores e impulse, adecuadamente, la autonomía del poder judicial.

Esto puede incluir la adopción de leyes y regulaciones anticorrupción, el diseño de estrategias de supervisión y control independientes y el fortalecimiento de la

---

<sup>25</sup> Binder, «Corrupción y sistemas judiciales».

capacitación y la ética profesional en el sistema judicial.

Así, es fundamental promover una cultura de integridad y responsabilidad en todas las instituciones judiciales, así como

fomentar la participación ciudadana en la vigilancia y denuncia de actos corruptos<sup>26</sup>.

### ***Las formas de corrupción dentro de los sistemas judiciales***

Durante las últimas décadas, se han observado numerosas razones objetivas que indican la presencia de corrupción que involucra una profundidad preocupante.

Además, el la impunidad que se hace presente ante estos actos flagrantes es tan alarmante que resulta difícil atribuirlo únicamente a la tradicional ineficiencia.<sup>27</sup>

Sin tomar partido por ninguna perspectiva particular sobre la corrupción, se reconoce que el modelo de organización desempeña un papel crucial, y en muchos casos determinante, en este problema. La organización judicial, en particular,

es un ejemplo de cómo las prácticas corruptas pueden camuflarse en este sistema, volviéndose prácticamente invisibles.

Ante tal realidad, la organización judicial requiere de una reforma que no solo aborda aspectos relacionados a la eficiencia y evolución, sino también una condición indispensable para implementar políticas anticorrupción efectivas en el sistema judicial.<sup>28</sup>

En relación con las acciones para el tratamiento de la corrupción en estos sistemas, a menudo se ha abordado desde una perspectiva moralista, centrándose

<sup>26</sup> Así, «La corrupción judicial».

<sup>27</sup> Binder, «Corrupción y sistemas judiciales».

<sup>28</sup> «Justicia Abierta: un desafío para la gobernanza democrática | Comunidades Cepal».



principalmente en la modificación de los procesos para la asignación y remoción de cargos judiciales.

Sin embargo, el limitado éxito de estas políticas sugiere la incorporación de enfoques integrales, más complejo y estructural, que aborde tanto los casos individuales como las condiciones sistémicas que los favorecen.

Otro aspecto a considerar es cómo se percibe la corrupción dentro de las propias instituciones judiciales. A menudo, los actos ilegales se trivializan debido a la deficiente organización del trabajo y a la falta de conciencia sobre las graves consecuencias de tales prácticas.

También, el trato preferencial otorgado a personas con conexiones personales o familiares dentro del sistema judicial es una forma de corrupción que pasa desapercibida, pero que debilita la imparcialidad y la transparencia del sistema.

La delegación de funciones es otro fenómeno generalizado que contribuye a la corrupción, al transferir poder de manera indebida a sectores administrativos de las instituciones judiciales. Aunque se ha podido vislumbrar la intensidad de la problemática, el proceso de reforma judicial no ha abordado de manera adecuada la corrupción judicial, en parte debido a la falta de voluntad política y a la resistencia interna al cambio.

Para abordar este desafío, es necesario fortalecer las instituciones judiciales y dotarlas de los recursos y la capacidad necesarios para investigar y juzgar casos de corrupción de manera efectiva.

En este sentido, es fundamental mejorar los métodos de investigación y combatir la impunidad que perpetúa este tipo de corrupción. Sin embargo, también es importante evitar sacar la investigación y el enjuiciamiento del ámbito judicial, ya que esto podría abrir puertas igualmente peligrosas a la corrupción

### **3.2. Análisis comparativo de la naturaleza y gravedad de la corrupción judicial en diferentes contextos jurídicos y culturales.**

La corrupción judicial plantea desafíos significativos en todo el mundo. A medida que las sociedades luchan por garantizar la imparcialidad y la integridad en sus sistemas judiciales, surge la necesidad de comprender la naturaleza y la gravedad de la corrupción judicial en diferentes contextos jurídicos y culturales.

Desde sobornos y favoritismos hasta manipulaciones de procesos y obstrucciones a la justicia, la

corrupción judicial puede manifestarse de muchas formas y tener consecuencias profundas en la sociedad. Sin embargo, la naturaleza y la gravedad de este fenómeno pueden variar considerablemente según el contexto jurídico y cultural en el que se produzca. Factores como el estado de derecho, la independencia judicial, la transparencia y la rendición de cuentas pueden influir en la prevalencia y la intensidad de la corrupción en el sistema judicial.

#### ***La corrupción en el sistema judicial de América Latina***

En el contexto latinoamericano, la corrupción en el sistema judicial ha sido un tema persistente que ha afectado la efectividad de las instituciones judiciales.

A lo largo de la región, se han observado una serie de problemas y desafíos que han contribuido a la corrupción en el sistema judicial, aunque la naturaleza y la gravedad

de estos problemas pueden variar según el país y el contexto específico.

En primer lugar, es importante reconocer que la corrupción en el sistema judicial latinoamericano no es un fenómeno homogéneo, sino que presenta una amplia gama de manifestaciones que reflejan las complejidades y diversidades de

cada país. Desde sobornos y extorsión hasta influencias políticas indebidas y manipulación de procesos judiciales, la corrupción puede manifestarse de diversas formas y tener impactos significativos en la justicia y la democracia.

Una de las principales causas que genera la corrupción en el sistema judicial latinoamericano es la inexistencia de autonomía judicial, asimismo, los jueces y magistrados enfrentan presiones políticas y económicas que pueden influir en sus decisiones y comprometer su imparcialidad.

La falta de seguridad laboral y la insuficiente protección contra la interferencia externa pueden hacer que los funcionarios judiciales sean vulnerables a la corrupción y la influencia indebida.

Otro factor importante a tener en cuenta es la ineficiencia y la sobrecarga de trabajo. La falta de recursos humanos y financieros, así como la poca promulgación de

programas de capacitación y tecnología adecuadas, pueden contribuir a una administración deficiente de la justicia.

Esto, a su vez, puede aumentar las oportunidades para la corrupción, ya que los litigantes pueden recurrir a prácticas ilícitas para acelerar o manipular el curso de los procedimientos judiciales.

Además de estos factores internos, la corrupción en el sistema judicial latinoamericano también puede estar influenciada por dinámicas políticas y económicas más amplias. La falta de separación de poderes puede debilitar la independencia judicial y facilitar la interferencia política en los asuntos judiciales.

Asimismo, la presencia de grupos de interés poderosos y la influencia del crimen organizado pueden representar amenazas adicionales a la integridad del sistema judicial.

En respuesta a estos desafíos, se han implementado una serie de medidas y reformas en toda la región

con el fin de combatir la corrupción, incluyendo, acciones de fortalecimiento de la autonomía judicial, optimizar la transparencia, aumentar la eficiencia y la capacidad e incentivar el control y supervisión.

Sin embargo, si bien estas medidas son importantes, también enfrentan obstáculos significativos en términos de implementación y aplicación efectiva.

De esta manera, podemos afirmar que, en el vasto panorama del sistema judicial latinoamericano, la corrupción emerge como una sombra persistente que oscurece la promesa de justicia y equidad. Al comparar la naturaleza y la gravedad de la corrupción en diferentes países de la región, se revelan tanto similitudes como disparidades significativas, cada una marcada por su contexto jurídico, cultural y político único.

Argentina, un país donde la corrupción judicial ha sido objeto de una atención constante y a menudo intensa, ofrece un caso

paradigmático. A pesar de los esfuerzos por garantizar la independencia judicial, como los concursos públicos para la selección de jueces, persisten acusaciones de influencia política y cohecho. La opacidad en los procesos judiciales y la dilación en la resolución de casos contribuyen a erosionar la confianza en el sistema judicial.

En contraste, Brasil ha experimentado un escrutinio sin precedentes de su sistema judicial en el contexto de la operación "Lava Jato". Esta iniciativa, aclamada por desmantelar redes de corrupción de alto nivel, también ha sido objeto de críticas por presuntas violaciones de derechos procesales y parcialidad judicial.

La influencia política en la nominación de jueces y la interferencia en los procesos judiciales plantean interrogantes sobre la imparcialidad y la integridad del sistema.

Es importante mencionar, que este tipo de corrupción no es

exclusiva de estos países, sino que también se extiende por toda la región, manifestándose de diversas formas y grados de gravedad. Se hace prevalente en los casos donde la falta de recursos y capacitación adecuada para los jueces y funcionarios judiciales crea un entorno propicio para prácticas corruptas.

En Venezuela, la politización extrema del sistema judicial ha llevado a la presión sobre políticos opositores y a la erosión de la independencia judicial.

Los juicios injustos y la represión de la disidencia política son características preocupantes de un sistema judicial que ha sido instrumentalizado para mantener el poder político.

Colombia, aunque ha realizado avances significativos en la lucha contra la corrupción, sigue enfrentando desafíos persistentes. La influencia de grupos criminales en este sistema ha impulsado actos de corrupción.

En México, se manifiesta en forma de sobornos, extorsión y colusión con el crimen organizado. La impunidad de los delitos cometidos por funcionarios judiciales y la falta de estrategias efectivas para la rendición de cuentas perpetúan un ciclo de corrupción e injusticia.

En Ecuador, esta problemática ha sido una preocupación persistente que ha afectado la credibilidad y la eficacia del poder judicial. A lo largo de los años, se han documentado numerosos casos de corrupción que van desde el soborno de jueces hasta la manipulación de procesos judiciales con fines políticos.

Una de las principales fuentes de este fenómeno se refiere a la politización de la justicia. Durante períodos de inestabilidad política, se han producido interferencias indebidas en el poder judicial por parte de figuras políticas influyentes.

Esto ha llevado a la manipulación de casos judiciales para perseguir a opositores políticos o proteger a aliados, en lugar de garantizar una

administración imparcial de la justicia.

La influencia indebida de intereses externos, como grupos económicos poderosos o el crimen organizado, han impulsado la imparcialidad de las decisiones judiciales.<sup>29</sup>

Otro factor que ha contribuido a la corrupción en el sistema judicial ecuatoriano es la falta de transparencia y acceso a la información. La opacidad en los procesos judiciales y la falta de supervisión efectiva han facilitado la realización de prácticas corruptas sin temor a ser descubiertas o sancionadas.

Si bien se han realizado esfuerzos para abordar esta situación, incluida la implementación de reformas legales y la creación de instituciones anticorrupción, persisten desafíos significativos. La cultura de la impunidad, la resistencia al cambio y la falta de recursos adecuados para investigar y enjuiciar casos de corrupción continúan obstaculizando los esfuerzos para combatir este problema arraigado.

---

<sup>29</sup> «Justicia Abierta: un desafío para la gobernanza democrática | Comunidades Cepal».

# Capítulo 4

## **Factores y Dinámicas que Facilitan la Corrupción en el Poder Judicial**

## Capítulo 4

### Factores y dinámicas que facilitan la corrupción en el Poder Judicial

**E**l poder judicial, como pilar fundamental del Estado de derecho, se supone que debe actuar con imparcialidad, integridad y transparencia en la administración de justicia. Sin embargo, en muchos países, los tribunales enfrentan desafíos significativos que comprometen estos principios fundamentales.

Uno de los factores clave que facilitan la corrupción en el poder judicial es la falta de independencia judicial. Cuando los jueces están sujetos a presiones políticas, económicas o sociales externas, su capacidad para tomar decisiones imparciales se ve comprometida.

La interferencia indebida en el proceso judicial, ya sea por parte del poder ejecutivo, grupos de interés o individuos influyentes, deja a la luz

las deficiencias que persisten en el sistema judicial.

Además, la opacidad en los procesos judiciales y la falta de transparencia en la toma de decisiones crean oportunidades para la corrupción. Cuando las actuaciones judiciales no están sujetas a un escrutinio público adecuado, existe un mayor riesgo de que se produzcan prácticas corruptas, como el soborno, el favoritismo o la manipulación de casos.

Los sistemas judiciales también pueden verse afectados por la falta de recursos adecuados, la burocracia excesiva y la corrupción sistémica en otras instituciones del Estado. La escasez de fondos, personal capacitado y tecnología adecuada puede debilitar la



capacidad del poder judicial para funcionar de manera efectiva y eficiente, lo que a su vez aumenta la vulnerabilidad a la corrupción.

Por último, los factores culturales, sociales y políticos, como la tolerancia hacia la corrupción, la falta de valores éticos y la impunidad, intervienen en la facilitación de la corrupción en el poder judicial. Cuando la corrupción se percibe como algo aceptable o inevitable, se crea un ambiente propicio para su proliferación.

#### **Contexto social:**

Dentro de este escenario se posiciona una teoría que examina cómo el entorno en el que operan los jueces puede influir en su imparcialidad. Según una perspectiva inicial, se argumenta que la aceptación social de la corrupción desempeña un papel crucial en el aumento de este tipo de prácticas ilícitas dentro de los tribunales. Se sugiere que, en ciertas sociedades, cometer actos corruptos no se

considera moral o éticamente incorrecto, sino más bien como una práctica aceptada para agilizar la administración de justicia.<sup>30</sup>

Por otro lado, se menciona que la existencia y participación de grupos criminales dentro de este sistema, ha incidido en la proliferación de la corrupción judicial. Estas organizaciones, debido a su considerable poder económico y político, podrían incrementar el incentivo para que muchos jueces acepten sobornos a cambio de sentencias favorables, e incluso podrían amenazar la vida de los jueces o sus familias para influir en sus decisiones.

Sin embargo, esta explicación puede ser válida en ciertos contextos donde estos grupos son prominentes, como en Colombia, pero no necesariamente se aplica a países con altos niveles de corrupción donde la participación de este tipo de grupos es mínima.

---

<sup>30</sup> «Explicando la corrupción judicial en las cortes intermedias e inferiores de Chile, Perú y Ecuador».

Otro aspecto que interviene en la lucha contra la corrupción judicial, se relaciona a la divulgación pública de las decisiones judiciales a través de plataformas en línea, lo que puede actuar como un elemento disuasorio contra la corrupción.

Por ejemplo, en Costa Rica, se ha observado una disminución de esta problemática tras la implementación de un sistema o portal oficial donde se publican las decisiones judiciales realizadas por la Corte Suprema. No obstante, algunos estudios han encontrado resultados contradictorios sobre la eficacia de este enfoque.<sup>31</sup>

### **Funcionamiento de los tribunales:**

Una segunda perspectiva para entender la corrupción judicial se enfoca en variables relacionadas con la formación profesional de los jueces, Esta corriente de pensamiento sostiene que existen

factores internos a los tribunales que influyen en los distintos niveles de corrupción judicial.

Se argumenta que aquellos con una sólida preparación educativa tienen menores probabilidades de verse envueltos en actos de corrupción. Este razonamiento se fundamenta en consideraciones cognitivas, sugiriendo que los individuos con un mayor conocimiento y comprensión de los temas en discusión son menos susceptibles a ser influenciados por estrategias de persuasión o disuasión.

Por otro lado, la sobrecarga de trabajo también se señala como un factor que contribuye al aumento de la corrupción judicial.<sup>32</sup>

Esto crea incentivos para que los litigantes busquen acelerar el proceso mediante actos de corrupción, con la esperanza de que

---

<sup>31</sup> Binder, «Corrupción y sistemas judiciales».

<sup>32</sup> Aguirre Rivera, «El delito de corrupción de funcionarios públicos y su impacto social, en el juzgado de investigación preparatoria del distrito judicial de Huánuco 2016».

sus casos reciban atención prioritaria.

Es importante destacar que, en este escenario, el soborno o la corrupción no necesariamente implican un sesgo en el fallo judicial, sino más bien una búsqueda de una resolución más rápida de los casos.

Por último, los medios no apropiados y utilizados para ascensos y cambios dentro del sistema judicial también se consideran como un elemento influyente.

Se argumenta que los jueces que aspiran a avanzar en sus carreras y comprenden la importancia de mantener un historial limpio pueden no incurrir en actos corruptos.<sup>33</sup>

Por el contrario, en aquellos países donde los méritos profesionales de los jueces no son suficientes para obtener promociones o traslados a tribunales mejor ubicados geográficamente, es

más probable que se incurran a actos de corrupción.

### **Aspectos económicos:**

Un tercer enfoque que interviene pone énfasis en factores económicos como posibles determinantes. La premisa central es que los jueces con salarios bajos están más inclinados a incurrir en prácticas corruptas.

Esta teoría sugiere que la falta de incentivos económicos adecuados puede llevar a los jueces a buscar ingresos adicionales a través de medios ilegales, como sobornos o favores a cambio de beneficios personales.

Sin embargo, la interacción entre los beneficios económicos de los jueces y la corrupción judicial no es tan simple como parece a primera vista.

Por ejemplo, se ha observado que, en algunos casos, como ejemplo el de Camboya, un aumento en los salarios de los jueces no

---

<sup>33</sup> «Explicando la corrupción judicial en las cortes intermedias e inferiores de Chile, Perú y Ecuador».

produjo cambios significativos en los niveles de corrupción. Este hallazgo desafía la noción de que simplemente mejorar los salarios resolvería el problema de la corrupción judicial.

Además, otros factores económicos, también se han considerado como posibles influencias en la corrupción judicial.

Sin embargo, diversas investigaciones han demostrado que la relación entre estos factores y la corrupción en los tribunales es compleja y no puede ser explicada únicamente por variables económicas.<sup>34</sup>

Por lo tanto, si bien es importante considerar los factores económicos al analizar la corrupción judicial, también es crucial reconocer que estos factores interactúan con una variedad de otros factores sociales, políticos e institucionales. Una comprensión más completa de la corrupción judicial requiere un enfoque multidimensional que tenga

en cuenta la complejidad de los sistemas judiciales y las sociedades en las que operan.

### **Aspectos institucionales:**

Una serie de factores institucionales son considerados para entender la corrupción judicial. Uno de estos factores sugiere que la sobrecarga de competencias puede incentivar actos de corrupción en los tribunales.

Este argumento ha llevado a la creación de Consejos de la Judicatura en muchos países de América Latina.

También, es interesante notar que algunos países que carecen de esta estructura institucional, tienen niveles relativamente bajos de corrupción judicial, mientras que otros como Ecuador y Bolivia, que sí cuentan con Consejos de la Judicatura, enfrentan serios problemas de corrupción según

---

<sup>34</sup> Platonova, «Corrupción, derechos humanos, independencia judicial».

mediciones de Transparencia Internacional.<sup>35</sup>

La efectividad de los Consejos de la Judicatura para reducir la corrupción judicial también depende del alcance de sus facultades. Por ejemplo, en el Salvador se argumentan que la separación clara de las funciones jurisdiccionales y administrativas, junto con el otorgamiento de amplias capacidades a estos órganos, puede ayudar a reducir la corrupción judicial.

Otro factor institucional relevante es el procedimiento para obtener una decisión judicial. Se argumenta que a medida que aumenta la complejidad del procedimiento o la falta de claridad en los pasos a seguir, los costos de transacción aumentan. Esto puede incentivar a los usuarios del sistema judicial a buscar una resolución rápida a través de la corrupción.

La creación de oficinas encargadas de investigar la corrupción judicial es otra medida institucional mencionada en la literatura. Aunque ha demostrado ser efectiva en países como Costa Rica, la evidencia empírica global sugiere que no tiene efectos significativos en la reducción de la corrupción judicial.

Finalmente, se sugiere que el diseño institucional que premia a los jueces por su conducta ética puede ayudar a reducir la corrupción judicial. Factores como las limitaciones que se imponen a que jueces realicen otras actividades también han sido identificados como relevantes en estudios sobre corrupción judicial, aunque aún no se ha establecido un vínculo causal claro.

#### **Aspectos políticos:**

Un último aspecto que consideramos necesario mencionar es el relacionado a la transición política en esta problemática, ya que

---

<sup>35</sup> Aguirre Rivera, «el delito de corrupción de funcionarios públicos y su impacto social, en el juzgado de investigación preparatoria del distrito judicial de Huánuco 2016».

cuando el poder político está más fragmentado, es más probable que se presenten diversos intereses en los niveles que engloban los poderes del Estado, lo que facilita el control mutuo y el escrutinio de sus actividades, y desincentiva la aparición de conductas corruptas.<sup>36</sup>

A pesar de que algunos estudios, han encontrado validez en esta hipótesis, al menos para el caso de Guatemala, otros análisis, en 63 países, arrojan resultados menos significativos.

Este tipo de investigaciones sugiere que la relación entre la dispersión del poder político y la corrupción judicial puede no ser tan directa como se podría suponer inicialmente.<sup>37</sup>

#### **4.1. Comportamientos corruptos en el sistema judicial**

La corrupción en el proceso judicial se manifiesta de diversas maneras, y su origen puede atribuirse tanto a infractores

Es crucial profundizar en este tema y considerar las dinámicas políticas específicas de cada país para comprender mejor cómo la dispersión del poder político puede influir en la corrupción judicial.

Por ejemplo, en algunos contextos, una mayor dispersión del poder puede fomentar la eficacia, mientras que en otros, podría conducir a la parálisis institucional y la falta de responsabilidad.

Explorar estos aspectos en detalle podría proporcionar una visión más completa y precisa de la relación entre la dispersión del poder político y la corrupción judicial en diferentes contextos nacionales y regionales.

individuales como a estructuras sistémicas o institucionales que facilitan este comportamiento poco ético. A menudo, estas prácticas

---

<sup>36</sup> «Explicando la corrupción judicial en las cortes intermedias e inferiores de Chile, Perú y Ecuador».

<sup>37</sup> Ibid.

corruptas encuentran su origen en las distorsiones de los incentivos dentro del sistema judicial.

Las particularidades y características sistémicas del sector judicial, que a menudo carece de una supervisión independiente, contribuyen significativamente a la corrupción. Además, la rendición de cuentas puede ser problemática debido a disposiciones diseñadas para garantizar una separación efectiva de poderes, lo que puede dificultar la identificación y el castigo de actos corruptos.

No obstante, es crucial reconocer que la integridad judicial requiere tanto un sistema judicial independiente y responsable como profesionales individuales que actúen con independencia y responsabilidad. Sin embargo, en muchos casos, las condiciones institucionales y sistémicas no favorecen la promoción de estas cualidades.

Al examinar las formas de comportamiento corrupto en los

sistemas judiciales, se pueden identificar varias prácticas que afectan a todas las profesiones judiciales en diferentes grados y etapas del proceso judicial. Estas prácticas incluyen:

**Soborno:** La aceptación de sobornos por parte de jueces, abogados u otros funcionarios judiciales a cambio de influir en el resultado de un caso o tomar decisiones favorables a una de las partes involucradas.

**Influencia política indebida o interferencia:** La intervención de actores políticos en el proceso judicial con el fin de influir en el resultado de un caso o manipular el curso la justicia en función de intereses personales.

**Extorsión:** La coerción o amenaza por parte de profesionales de la justicia para obtener beneficios personales o favores, así como la extorsión a víctimas o testigos para obtener información o testimonios favorables.

Malversación de fondos y recursos públicos: La apropiación indebida de fondos o recursos destinados al sistema judicial para

beneficio personal, así como el uso indebido de recursos públicos para fines privados.

#### **4.2. Debate sobre la relación entre la corrupción judicial y otros fenómenos sociales, como la desigualdad, la falta de acceso a la justicia y la inseguridad jurídica.**

La relación entre la corrupción judicial y otros fenómenos sociales es un tema de profunda importancia en la comprensión del funcionamiento de un Estado de Derecho y su impacto en la sociedad.

La corrupción judicial, que refleja la desviación de la normativa legal por parte de los actores del sistema judicial en beneficio propio o de terceros, no solo corroe los cimientos de la justicia, sino que también tiene repercusiones significativas en otros aspectos de la vida social y política de un país.<sup>38</sup>

Por una parte, es menester mencionar que la intersección entre la corrupción judicial y las

desigualdades que se presentan en la sociedad, es un fenómeno que merece una atención detallada y reflexiva debido a sus profundas implicaciones en la estructura y el funcionamiento de una sociedad.

Cuando el sistema judicial de un país se ve afectado por prácticas corruptas, se produce un deterioro en la aplicación equitativa de la ley, lo que tiene consecuencias directas en la distribución de la justicia y, por ende, en la perpetuación de las disparidades sociales.

La desigualdad social, entendida como la disparidad en el acceso a recursos, oportunidades y derechos entre diferentes grupos de la

---

<sup>38</sup> Seña y F, «Pobreza, corrupción, (in)seguridad jurídica».



población, se ve exacerbada por la corrupción judicial de varias maneras.

En primer lugar, aquellos con mayores recursos económicos o influencia política tienen la capacidad de manipular el sistema judicial a su favor, obteniendo resultados favorables en litigios legales a través de sobornos, influencias indebidas o manipulación de pruebas.

Esta capacidad para influir en el resultado de los casos judiciales crea un sistema de "justicia a la carta" en el que la igualdad ante la ley es solo un ideal inalcanzable para aquellos que no tienen los medios para comprarla.

Como resultado, las personas con menos recursos enfrentan obstáculos adicionales para acceder a una justicia imparcial y efectiva.

Por ejemplo, pueden encontrarse con barreras financieras para contratar representación legal competente o para pagar los costos asociados con el proceso judicial,

como tarifas de presentación de documentos o gastos de investigación. Además, pueden enfrentar discriminación por parte de funcionarios judiciales corruptos que priorizan los intereses de los poderosos sobre los de los más vulnerables.

La falta de acceso a una justicia imparcial y efectiva perpetúa un ciclo de desigualdad en el que aquellos con menos recursos se ven atrapados en un sistema que está diseñado para favorecer a los privilegiados.

Las personas de bajos ingresos, las minorías étnicas, los pueblos indígenas y otros grupos marginados son especialmente vulnerables a la injusticia y la discriminación en un sistema judicial corrupto.

Esto puede tener consecuencias devastadoras no solo para los individuos afectados, sino también para sus comunidades y para la cohesión social en general.

Por lo tanto, es crucial abordar la corrupción judicial como un factor

clave en la lucha contra la desigualdad social, ya que su impacto en la falta de acceso a la justicia requiere un análisis detallado para comprender su complejidad y sus consecuencias en la sociedad.

La falta de acceso a la justicia es un fenómeno multifacético que va más allá de la mera disponibilidad de tribunales y abogados. Implica también la percepción de que el sistema judicial es justo, transparente y capaz de resolver disputas de manera imparcial.

Sin embargo, cuando los ciudadanos perciben que el sistema está viciado por la corrupción, pierden la confianza en su capacidad para administrar justicia de manera justa y eficaz. Como resultado, pueden optar por buscar soluciones alternativas para resolver sus disputas, como la autodefensa o la resolución extrajudicial de conflictos.

Cuando los ciudadanos perciben que el sistema legal no puede garantizar la justicia de manera equitativa, es más probable que

recurran a la violencia, la intimidación o la manipulación para resolver sus problemas, en lugar de confiar en los mecanismos formales de justicia. Esto crea un ciclo de desconfianza y alienación que perpetúa las deficiencias en la justicia y debilita la cohesión social.

Además, la corrupción judicial también puede tener un impacto directo en la capacidad de las personas para acceder a mecanismos formales de justicia.

Por ejemplo, el soborno o la extorsión por parte de funcionarios judiciales pueden crear barreras económicas para acceder al sistema judicial, especialmente para aquellos con recursos limitados.

Del mismo modo, la manipulación de casos judiciales por parte de actores corruptos puede obstaculizar el acceso a un juicio justo y equitativo para aquellos que son víctimas de injusticias o abusos.

Para abordar este problema, es fundamental implementar medidas efectivas para su prevención en el

sistema judicial. Solo a través de esfuerzos concertados y sostenidos se puede garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso igualitario a la justicia y que el Estado de Derecho prevalezca en la sociedad.

Otro fenómeno social que se ve afectado por la corrupción judicial es la inseguridad jurídica. Este aspecto complejo surge cuando las decisiones judiciales se ven influenciadas por consideraciones corruptas en lugar de criterios legales objetivos.

La corrupción judicial mina la certeza jurídica y debilita la predictibilidad del sistema legal, lo que tiene repercusiones significativas en los diferentes aspectos que conforman la estructura social de una nación.<sup>39</sup>

Cuando las decisiones judiciales son el resultado de prácticas corruptas, en lugar de basarse en el imperio de la ley y en la aplicación

imparcial de los principios legales, se debilita la confianza en la integridad del sistema judicial y la certeza jurídica. La incertidumbre sobre si las decisiones judiciales se tomarán en función de la ley o de intereses corruptos crea un clima de inseguridad y desconfianza que afecta tanto a los ciudadanos como a las empresas.

Uno de los impactos más significativos de la inseguridad jurídica es su efecto en la inversión, tanto nacional como extranjera. Los inversores, ya sean nacionales o extranjeros, buscan entornos jurídicos estables y predecibles para realizar sus inversiones.

Sin embargo, cuando existe la percepción de que el sistema judicial está sujeto a influencias corruptas, los inversores pueden sentirse reacios a comprometer sus recursos en un entorno donde los derechos de propiedad y los contratos pueden no

---

<sup>39</sup> Aguirre Rivera, «EL DELITO DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y SU IMPACTO SOCIAL, EN EL JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE HUÁNUCO 2016».

ser respetados de manera consistente.

Esto puede tener consecuencias negativas para la economía y demás aspectos relacionados, ya que la falta de inversión puede obstaculizar el crecimiento y la competitividad de la economía.

También, la inseguridad jurídica tiene grandes repercusiones. Cuando las personas perciben que el sistema judicial no es capaz de garantizar la aplicación imparcial de la ley, pueden perder la fe en el Estado de Derecho y recurrir a formas alternativas de resolución de disputas, como la autodefensa o la justicia por mano propia.

Esto puede erosionar la cohesión social y debilitar la legitimidad del gobierno, lo que a su vez puede generar tensiones sociales y políticas.

Desde estas perspectivas, destacamos que la corrupción judicial y la inseguridad jurídica son fenómenos interrelacionados que tienen una incidencia profunda en el desarrollo socio económico de un país.

Para enfrentar este problema, es fundamental fortalecer la independencia y la integridad del sistema judicial, promover la transparencia y la rendición de cuentas en el poder judicial, y fomentar una cultura de legalidad y ética en todos los niveles de la sociedad.

Solo a través de esfuerzos concertados y sostenidos se puede garantizar un sistema judicial justo, imparcial y predecible que promueva la igualdad, la justicia y la democracia.

## ***La relación entre la corrupción judicial, la falta de acceso a la justicia y la inseguridad jurídica***

Este debate es variado y refleja las complejidades inherentes a estos fenómenos. Algunos de los aspectos más destacados incluyen:

### **1. Independencia judicial vs. rendición de cuentas:**

Esta relación es un tema central en los debates sobre el funcionamiento y la legitimidad de los sistemas judiciales en todo el mundo. Si bien ambos conceptos son fundamentales para la garantía de un poder judicial imparcial y efectivo, el equilibrio entre ellos ha sido objeto de intensos debates y controversias.<sup>40</sup>

Por un lado, se sostiene que la autonomía de los jueces es crucial para un sistema judicial democrático y funcional. Esta autonomía significa que los jueces deben tener la libertad de emitir fallos sin interferencias indebidas de otras ramas del

gobierno o de entidades externas, como grupos de presión o intereses políticos.

La capacidad de actuar sin temor a represalias o influencias externas es esencial para asegurar que las decisiones judiciales se basen en la aplicación justa e imparcial de la ley. La independencia de los jueces es vista como un requisito fundamental para el Estado de Derecho y para la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Sin un poder judicial autónomo, hay un riesgo de que el sistema judicial se convierta en una herramienta de represión política o que las decisiones sean condicionadas por intereses políticos o económicos en lugar de seguir la ley de manera imparcial. Por ello, muchos abogan por proteger y fortalecer la independencia judicial

---

<sup>40</sup> «Explicando la corrupción judicial en las cortes intermedias e inferiores de Chile, Perú y Ecuador».

para asegurar la integridad y la legitimidad del sistema de justicia.

Por otro lado, la rendición de cuentas es un principio igualmente importante en cualquier sistema democrático. La rendición de cuentas implica que los funcionarios públicos, incluidos los jueces, deben ser responsables ante la ley y estar sujetos a mecanismos efectivos de supervisión y control para prevenir y sancionar la mala conducta o el abuso de poder. Sin una rendición de cuentas adecuada, existe el riesgo de que los funcionarios judiciales actúen con impunidad y desigualdad.

Por lo tanto, el debate surge en torno a cómo equilibrar la necesidad de garantizar la independencia del poder judicial con la importancia de establecer mecanismos efectivos de rendición de cuentas.

Algunos sostienen que una judicatura independiente es esencial para garantizar la imparcialidad y la integridad del sistema judicial, ya que los jueces deben poder tomar

decisiones libres de interferencias externas.

Sin embargo, otros argumentan que la falta de supervisión y control puede propiciar la impunidad y el abuso de poder, y que es necesario establecer mecanismos efectivos de rendición de cuentas para prevenir y sancionar la corrupción judicial.

En muchos países, se ha implementado una variedad de mecanismos para equilibrar la independencia judicial con la rendición de cuentas. Estos pueden incluir sistemas de nombramiento y remoción de jueces basados en criterios transparentes y objetivos, la creación de órganos de control independientes.

Sin embargo, encontrar este equilibrio se ha convertido en un desafío para muchos países. Por un lado, una excesiva interferencia política o institucional puede desgastar la independencia judicial y erosionar la confianza.

Por otro lado, la falta de supervisión y control puede permitir

que la corrupción y el abuso de poder se propaguen sin control.

### **Transparencia vs privacidad:**

El debate sobre la transparencia versus la privacidad en el funcionamiento del sistema judicial es un tema complejo que plantea importantes consideraciones éticas, legales y prácticas.<sup>41</sup>

Por un lado, la transparencia en el sistema judicial se considera crucial. Por otro lado, la protección de la privacidad de los individuos involucrados en los procedimientos judiciales es esencial para garantizar el respeto de los derechos fundamentales y evitar posibles repercusiones negativas para las partes afectadas.

La claridad en las operaciones del sistema judicial es esencial para asegurar que los responsables rindan cuentas y para fomentar la confianza del público en la integridad del sistema judicial. La apertura y accesibilidad de los procedimientos

legales permiten a los ciudadanos vigilar el comportamiento de jueces, abogados y otros participantes en el sistema, así como identificar posibles prácticas inapropiadas o abusos de autoridad. Además, la transparencia ayuda a prevenir la corrupción al revelar casos de favoritismo, nepotismo o influencias indebidas en el proceso judicial.

Además, esta transparencia puede mejorar la calidad de las decisiones judiciales al permitir un escrutinio público de los argumentos presentados y las pruebas presentadas en el tribunal. Esto puede facilitar que las decisiones judiciales se basen en criterios legales objetivos y en la aplicación imparcial de la ley, en lugar de en consideraciones políticas o personales.

Sin embargo, la promoción de la transparencia en el sistema judicial también plantea desafíos en términos de protección de la privacidad de los individuos

---

<sup>41</sup> Asís, «La corrupción judicial».

involucrados en los procedimientos judiciales. La divulgación pública de información sobre casos judiciales puede exponer detalles confidenciales sobre la vida privada de las partes involucradas, como información médica, financiera o personal. Esto puede tener consecuencias negativas para la reputación y la seguridad de las personas afectadas, especialmente en casos sensibles como delitos sexuales, violencia doméstica o casos de menores de edad.

Seguidamente, la falta de protección de la privacidad puede disuadir a las personas de participar en procesos judiciales o de presentar denuncias legítimas por temor a la exposición pública o a represalias. Esto puede afectar negativamente la capacidad del sistema judicial para garantizar la justicia y el acceso igualitario a la ley para todos los ciudadanos, independientemente de su estatus social, económico o personal.

Por lo tanto, el desafío radica en encontrar equilibrio adecuado entre

la transparencia y la protección de la privacidad en el funcionamiento del sistema judicial. Esto puede implicar la implementación de medidas para garantizar que la información sensible se maneje de manera confidencial y se proteja de la divulgación no autorizada, al tiempo que se promueve la transparencia en los procesos judiciales de manera que sea compatible con el respeto de los derechos fundamentales de las partes involucradas.

## **2. Reforma institucional vs. cambio cultural:**

El debate entre reforma institucional y cambio cultural en el contexto de abordar la corrupción judicial es un tema crucial que plantea preguntas fundamentales sobre la efectividad de las estrategias para optimizar el funcionamiento del sistema judicial.

Desde una perspectiva, los defensores de la reforma institucional argumentan que las medidas prácticas y estructurales son necesarias para abordar la



corrupción judicial y mejorar el acceso a la justicia. Estas reformas pueden incluir la creación de órganos de control independientes, como agencias anticorrupción o comisiones de ética judicial, encargados de investigar y sancionar la mala conducta judicial. También pueden implicar la implementación de mecanismos de transparencia, como la publicación de decisiones judiciales y la divulgación de información sobre el desempeño de los jueces y tribunales.

La reforma institucional también puede incluir cambios en la estructura y el funcionamiento del sistema judicial, como la implementación de procedimientos de nombramiento y ascenso basados en criterios transparentes y objetivos, la mejora de la infraestructura judicial y la modernización de los sistemas de gestión de casos. Estas medidas tienen como objetivo fortalecer la integridad y la eficacia del sistema judicial, así como mejorar el acceso

de los ciudadanos a una justicia imparcial y efectiva.

Por otro lado, algunos argumentan que abordar la corrupción judicial y promover el acceso a la justicia requiere un cambio cultural más amplio que promueva la ética y la integridad en el sistema judicial y en la sociedad en general. Esto implica no solo reformas institucionales, sino también la promoción de una cultura de legalidad y respeto por el Estado de Derecho en todos los niveles de la sociedad.

El cambio cultural puede implicar la promoción de valores éticos y profesionales entre los jueces, abogados y funcionarios judiciales, así como la sensibilización sobre los derechos legales y los recursos disponibles para acceder a la justicia. También puede implicar la participación de la sociedad civil, los medios de comunicación y otros actores en la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas en el sistema judicial.

De la misma manera, el cambio cultural puede requerir la reforma de las actitudes y percepciones en la sociedad en general sobre la corrupción y el acceso a la justicia. Esto puede incluir la educación sobre los principios del Estado de Derecho y los derechos legales, así como la promoción de la participación ciudadana en la vigilancia y el control del sistema judicial.

### **3. Rol de la sociedad civil y los medios de comunicación:**

El análisis sobre el papel de la sociedad civil y los medios de comunicación en la denuncia y prevención de la corrupción judicial suscita debates sustanciales que trascienden las esferas académicas y políticas.<sup>42</sup>

Existen posturas que enfatizan la vitalidad de la participación ciudadana y la existencia de una prensa independiente y vigilante como pilares para exponer casos de corrupción y catalizar reformas en el

sistema judicial. Paralelamente, se plantean preocupaciones acerca de los posibles riesgos de instrumentalización política y de la inclinación hacia el sensacionalismo que pueden surgir en el contexto de la cobertura mediática.

La participación activa de la sociedad civil se destaca como un factor determinante en la lucha contra la corrupción judicial. Los grupos y organizaciones civiles desempeñan un papel fundamental al ejercer presión sobre las autoridades para que investiguen y sancionen los casos de corrupción.

Igualmente, actúan como guardianes de la integridad del sistema judicial al proporcionar información, movilizar a la opinión pública y promover la transparencia y la rendición de cuentas en las instituciones judiciales. La sociedad civil, mediante la promoción de valores éticos y la defensa de los derechos ciudadanos, contribuye a

---

<sup>42</sup> «Justicia Abierta: un desafío para la gobernanza democrática | Comunidades Cepal».

fortalecer la legitimidad y la confianza en el sistema judicial.

En este contexto, los medios de comunicación juegan un papel crucial como cuarto poder en la sociedad. La prensa libre y vigilante tiene la capacidad de exponer casos de corrupción judicial, investigar irregularidades y desafiar el abuso de poder por parte de las autoridades. La cobertura mediática puede servir como un mecanismo de control social al informar a la ciudadanía sobre los acontecimientos en el ámbito judicial y generar presión para implementar reformas.

No obstante, esta función de vigilancia de los medios también puede estar sujeta a riesgos y desafíos, como la manipulación política de la información o la tendencia al sensacionalismo en busca de mayores audiencias.

Asimismo, se generan preocupaciones legítimas sobre la instrumentalización política de la sociedad civil y los medios de

comunicación en la denuncia de la corrupción judicial.

En algunos casos, los intereses partidistas pueden influir en las agendas de los grupos civiles o en la cobertura mediática. Esta politización puede generar desconfianza en la veracidad de las denuncias de corrupción y obstaculizar los esfuerzos genuinos por promover la transparencia y la rendición de cuentas en el sistema judicial.

Igualmente, el sensacionalismo en la cobertura mediática puede distorsionar la percepción pública de la corrupción judicial y desviar la atención de los problemas estructurales subyacentes.

La búsqueda de titulares impactantes y la dramatización de los casos pueden trivializar la gravedad de la corrupción y promover una narrativa simplista que no aborde adecuadamente las causas y consecuencias del fenómeno.

#### **4. Cooperación internacional vs. soberanía nacional:**

Dentro del contexto de la lucha contra la corrupción judicial y la promoción del Estado de Derecho, se plantea un tema crucial que involucra la cooperación internacional y los mecanismos de supervisión y asistencia técnica.

A pesar de que la cooperación internacional puede ser un componente fundamental para enfrentar la corrupción transnacional y fomentar estándares internacionales de justicia, existen preocupaciones legítimas sobre la soberanía nacional y la preservación de la autonomía de los sistemas judiciales nacionales.

Estos aspectos delinean un escenario complejo en el que se entrelazan intereses globales y nacionales, desafiando a los actores involucrados a encontrar un equilibrio entre la necesidad de cooperación internacional y el respeto a la soberanía y autonomía de cada país.

La cooperación internacional, en particular en el ámbito judicial, ha demostrado ser una herramienta efectiva para abordar la corrupción que trasciende las fronteras nacionales.

Los acuerdos de cooperación y los mecanismos de asistencia técnica permiten a los países compartir información, recursos y experiencias en la lucha contra la corrupción judicial.

Esto es especialmente relevante en casos de corrupción que involucran redes transnacionales o que tienen un impacto más allá de las fronteras de un país en particular. La cooperación internacional también puede facilitar el fortalecimiento de capacidades institucionales y la implementación de reformas judiciales que promuevan la transparencia y la rendición de cuentas.

A pesar de los beneficios evidentes de la cooperación internacional, se presentan preocupaciones legítimas sobre su

impacto en la soberanía nacional y la autonomía de los sistemas judiciales nacionales. En muchos casos, los acuerdos de cooperación pueden implicar la intervención de actores externos en asuntos internos de un país, lo que plantea cuestiones sobre la independencia y la imparcialidad del sistema judicial.

De la misma manera, la implementación de estándares internacionales de justicia puede entrar en conflicto con las tradiciones y normas legales de un país.

Es importante tener en cuenta que la cooperación internacional no debe ser percibida como una imposición externa, sino más bien como un proceso colaborativo basado en el respeto mutuo y la reciprocidad entre los países. Los mecanismos de cooperación deben ser diseñados de manera que respeten la soberanía y la autonomía de cada país, al tiempo que promueven los principios universales de justicia y estado de derecho.

Esto implica una consulta y participación activa de los actores locales en la elaboración y aplicación de programas de cooperación, así como el reconocimiento de la diversidad de enfoques y contextos jurídicos en todo el mundo.

Además, es fundamental abordar las desigualdades de poder que a menudo caracterizan las relaciones internacionales, especialmente en el contexto de la cooperación judicial.

Los países más poderosos y económicamente desarrollados pueden ejercer una influencia desproporcionada en la formulación de políticas y agendas de cooperación, lo que puede llevar a la marginalización de las voces y necesidades de los países en desarrollo.

Por lo tanto, es necesario promover un enfoque más equitativo y solidario en la cooperación internacional, que tenga en cuenta las necesidades y perspectivas de todos los países involucrados.

# Capítulo 5

## **Impacto de la Corrupción Judicial en la Sociedad y el Estado de Derecho**

# Capítulo 5

## Impacto de la Corrupción Judicial en la Sociedad y el Estado de Derecho

**E**l presente capítulo aborda un tema de vital importancia en el ámbito jurídico y social: el impacto de la corrupción judicial en la sociedad y el Estado de Derecho. La corrupción judicial plantea desafíos significativos que van más allá del ámbito jurídico.

Se discutirán las repercusiones de la corrupción judicial en la confianza de los ciudadanos en el sistema de justicia y en la legitimidad de las instituciones democráticas. La falta de imparcialidad y transparencia en los procesos judiciales puede erosionar la confianza pública en la capacidad del sistema judicial para administrar justicia de manera justa e imparcial, lo que a su vez mina la legitimidad de las instituciones democráticas y el Estado de Derecho.

Seguidamente, se analizará cómo la corrupción judicial puede obstaculizar el desarrollo económico, afectar los derechos humanos y fomentar la criminalidad organizada.

La corrupción en el sistema judicial puede tener efectos devastadores en la economía, desincentivando la inversión extranjera y nacional, y minando la confianza en el cumplimiento de los contratos y la protección de los derechos de propiedad.

Esta puede conducir a violaciones de los derechos humanos, ya que las decisiones judiciales basadas en consideraciones corruptas pueden negar el acceso a la justicia y a un juicio justo. Asimismo, la corrupción judicial puede facilitar la actividad criminal al permitir la impunidad de los delincuentes y debilitar la

capacidad del Estado para combatir la criminalidad organizada.

Por último, se abrirá un debate sobre los desafíos que plantea la corrupción judicial para la consolidación del Estado de Derecho y la protección de los derechos fundamentales.

Además, la corrupción judicial pone en peligro la protección de los derechos fundamentales, incidiendo en la efectividad de los mecanismos judiciales para garantizar la justicia y la equidad para todos los ciudadanos.

### **5.1. Discusión sobre las repercusiones de la corrupción judicial en la percepción que tienen los ciudadanos del sistema de justicia y en la legitimidad de las instituciones democráticas.**

La corrupción judicial, al igual que otras formas de corrupción, no se limita únicamente al ámbito legal, sino que tiene un impacto profundo y extendido en la sociedad y en el funcionamiento de los organismos estatales.

Este fenómeno, que implica la manipulación indebida de procesos judiciales en beneficio propio o de terceros, penetra en el tejido social y político de una nación, erosionando la confianza y la legitimidad de las instituciones democráticas.

Desde una perspectiva amplia, es crucial comprender las diversas dimensiones de este problema, considerando tanto sus causas y consecuencias como las posibles medidas para abordarlo de manera efectiva.

Cuando los ciudadanos perciben que los tribunales están influenciados por intereses políticos, económicos o personales en lugar de actuar de manera independiente



y objetiva, se sienten desilusionados y desconfiados.<sup>43</sup>

Este problema sin duda alguno, deteriora la legitimidad de las instituciones democráticas al poner en entredicho los argumentos del gobierno para garantizar los derechos y un sistema legal justo y equitativo.

En una democracia, el sistema judicial es crucial para salvaguardar los derechos individuales y garantizar la igualdad ante la ley. No obstante, cuando este sistema se ve afectado por la corrupción, se pone en duda la capacidad del gobierno para cumplir con sus deberes fundamentales relacionados con la justicia.

Esta puede alimentar la percepción de que el gobierno está más interesado en proteger sus propios intereses o los de ciertos

grupos poderosos que en servir al bien común, lo que puede llevar a una creciente desafección política y una pérdida de confianza en el sistema democrático en su conjunto.

Además de sus efectos en la confianza ciudadana y la legitimidad de las instituciones democráticas, la corrupción judicial también tiene graves consecuencias sociales y económicas.<sup>44</sup>

Al fomentar la impunidad, los individuos y grupos marginados pueden enfrentar discriminación y falta de acceso a la justicia, perpetuando la desigualdad y la injusticia en la sociedad.

Asimismo, puede obstaculizar el desarrollo económico al desalentar la inversión extranjera y nacional, afectando la confianza en las instituciones.

---

<sup>43</sup> «Nuevo informe global sobre corrupción».

<sup>44</sup> Claudio Nash Rojas y Marie Fuchs, «Corrupción, Estado de derecho y derechos humanos».

## **5.2. Debate sobre los desafíos que plantea la corrupción judicial para la consolidación del Estado de Derecho**

En las últimas décadas, se ha destacado la importancia de los derechos humanos como un consenso ético y legal fundamental. Se acepta que estos derechos constituyen un acuerdo fundamental, tanto en términos morales como legales, sobre cómo el Estado debe tratar a las personas bajo su jurisdicción.<sup>45</sup>

Este compromiso no se limita únicamente a la soberanía nacional, sino que también implica una responsabilidad hacia la comunidad internacional. Con el fin de ejercer un control efectivo sobre el poder soberano del Estado, se han desarrollado códigos de derechos y libertades, así como parámetros generales de conducta.<sup>46</sup>

Asimismo, se han establecido sistemas internacionales complejos para supervisar y salvaguardar estos

derechos, lo que complementa la protección a nivel nacional y establece restricciones a la soberanía estatal.

A partir de esta base, se ha formado una relación directa entre los derechos humanos, los acuerdos políticos y la estructura del poder estatal. En consecuencia, cualquier cambio en uno de estos componentes influye en los demás, ya que están estrechamente interrelacionados.

Dado que los derechos humanos son esenciales para la democracia y el Estado de derecho organiza el poder público, cualquier afectación a los derechos humanos, a la democracia o al Estado de derecho plantea serios problemas éticos y jurídicos dentro del contexto de la ética política democrática. En una perspectiva sustantiva de la

---

<sup>45</sup> Claudio Nash Rojas y Marie Fuchs.

<sup>46</sup> Platonova, «Corrupción, derechos humanos, independencia judicial».

democracia, la relación entre corrupción y derechos humanos se enmarca dentro de la ética política democrática.

La corrupción, al menoscabar la convivencia democrática basada en el respeto a los derechos humanos y al principio de igualdad ante la ley, debilita los fundamentos de una sociedad democrática.

Por ello, en una democracia, es crucial prevenir y combatir la corrupción, tanto a nivel personal como institucional, que afecta la

igualdad, el imperio de la ley y la protección de los derechos humanos, todos elementos esenciales en un sistema democrático. Además, la corrupción tiene un efecto directo en la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas. Al observar cómo las autoridades utilizan el Estado en beneficio propio, desviándose de sus funciones y en muchos casos sin ser sancionadas, se genera un mensaje negativo en la sociedad.

### ***La corrupción y su impacto en el estado de derecho***

En una sociedad democrática, el fundamento de las decisiones de las autoridades descansa en la búsqueda del bien común y en el tratamiento igualitario de los individuos. Los actos que desvían estas decisiones hacia beneficios privados erosionan los pilares de la convivencia democrática al generar privilegios en el acceso a la toma de decisiones basados en actos de corrupción. Esto afecta directamente

al Estado de derecho, el cual se sostiene en un sistema de reglas comunes donde el poder está regulado por instituciones establecidas legalmente.

Un ejemplo claro de este impacto negativo de la corrupción en el Estado de derecho es el de la corrupción judicial, que impide que las autoridades judiciales traten a los individuos bajo su jurisdicción en

igualdad de condiciones, un requisito fundamental para un proceso justo.

La corrupción en el sistema judicial no solo conlleva a sentencias injustas, sino también a demoras injustificadas, pérdida de documentos y tratos desiguales, entre otras prácticas que violan los derechos de las partes involucradas.

La falta de confianza en las instituciones tiene serias implicaciones para la democracia. Los ciudadanos pueden buscar

justicia por otros medios, a menudo de manera ilegal y violenta.

Asimismo, la corrupción incide en la igualdad sustantiva, ya que puede influir en las políticas públicas que buscan abordar la desigualdad y la exclusión social. En sociedades marcadas por la desigualdad, como muchas en América Latina, la intervención de intereses privados en el Estado, impide la implementación de políticas redistributivas y correctivas del status quo.

### ***Formas criminales que agravan las consecuencias de la corrupción en el sistema judicial***

La corrupción en el sistema judicial también tiene un impacto significativo en los derechos humanos, especialmente cuando se manifiesta en formas criminales. La responsabilidad por estos ilícitos internacionales se ve agravada dependiendo de la naturaleza de la corrupción y la respuesta del Estado ante estas prácticas. Este aspecto es crucial al analizar el contexto, las

obligaciones de prevención y protección, así como la necesidad de una respuesta sancionatoria más contundente y reparaciones adecuadas.

Una de las manifestaciones más graves de la corrupción es la llamada macrocorrupción, que puede adoptar la forma de cooptación institucional. Este fenómeno implica la captura de

una institución estatal, mediante actos lícitos e ilícitos, para servir a intereses no legítimos, desviando así su función original. Ejemplos incluyen la captura de sistemas aduaneros, de seguridad social o de obras públicas, lo que resulta en malversación de fondos y la parálisis de dichas instituciones. Por otro lado, existen casos en los que bandas delincuenciales capturan todo el aparato estatal, como se vio en dictaduras como la de Pinochet en Chile o el régimen de Fujimori en Perú. Estas situaciones implican la corrupción a gran escala que corroe el tejido del Estado y desvía sus recursos hacia intereses ilegítimos.<sup>47</sup>

El crimen organizado, como entidad que opera al margen de la ley y con el objetivo primordial de obtener beneficios a través de actividades ilegales, representa una amenaza sustancial para la estabilidad y el funcionamiento adecuado de las sociedades. En su búsqueda de poder e influencia, el

crimen organizado no duda en infiltrar y corromper a agentes estatales, lo que afecta gravemente el Estado de derecho y compromete la protección de los derechos humanos.

La corrupción en el ámbito estatal es una herramienta fundamental para el crimen organizado. Al sobornar a funcionarios públicos, estos pueden asegurarse de que sus operaciones ilegales pasen desapercibidas o reciban tratamiento favorable por parte de las autoridades. La corrupción también facilita la impunidad al obstaculizar investigaciones y procesos judiciales contra las actividades delictivas del crimen organizado. Esta relación simbiótica entre agentes estatales corruptos y grupos criminales contribuye a la perpetuación de la violencia y la inseguridad en muchas regiones del mundo.

Una de las manifestaciones más preocupantes de esta colaboración entre el crimen organizado y el

---

<sup>4747</sup> «Explicando la corrupción judicial en las cortes intermedias e inferiores de Chile, Perú y Ecuador».

aparato estatal es la captura de instituciones estatales completas. En casos extremos, el crimen organizado puede ejercer una influencia tan extensa que logra infiltrar y controlar toda una rama del gobierno o incluso múltiples instituciones estatales. Este fenómeno distorsiona por completo el funcionamiento del Estado y sus instituciones, dejando a la población desamparada y vulnerando gravemente sus derechos fundamentales.

Cuando el sistema judicial es cooptado por intereses criminales, se debilita la capacidad del Estado para cumplir con su obligación de proteger y garantizar los derechos fundamentales de sus ciudadanos.

La lucha contra la corrupción y el crimen organizado es un desafío multifacético que requiere una respuesta integral por parte de los Estados y la comunidad internacional. Es crucial fortalecer las instituciones estatales y los sistemas de justicia para prevenir la infiltración y el control por parte del

crimen organizado. Esto implica medidas para mejorar la transparencia, la rendición de cuentas y la independencia judicial, así como para fortalecer los mecanismos de supervisión y control.

Asimismo, es fundamental abordar las causas subyacentes de la corrupción y el crimen organizado, incluida la desigualdad socioeconómica, la exclusión social y la falta de oportunidades económicas. Esto requiere políticas integrales que promuevan el desarrollo inclusivo, la justicia social y la participación ciudadana, así como la cooperación internacional para abordar el crimen organizado de manera coordinada y efectiva en todos los niveles.

De esta forma, la colaboración entre el crimen organizado y el Estado representa una grave amenaza para los derechos humanos y el Estado de derecho en todo el mundo. La corrupción y la impunidad que caracterizan esta relación afectan la confianza en las

instituciones democráticas y perpetúan la violencia y la injusticia.

Es imperativo que los Estados y la comunidad internacional intensifiquen sus esfuerzos para combatir la corrupción y el crimen organizado, fortalecer las instituciones democráticas y garantizar la protección efectiva de los derechos humanos para todos.

A modo de ejemplo, queremos hacer referencia sobre esta problemática que ha tomado grandes dimensiones dentro de los países latinoamericanos, donde la penetración de organizaciones criminales en los sistemas judiciales representa un desafío significativo para el Estado de derecho, la democracia y la protección de los derechos humanos en la región.

Esta situación, que ha sido objeto de creciente preocupación y atención por parte de gobiernos, sociedad civil y organismos internacionales, refleja la compleja interacción entre el crimen organizado y las instituciones

estatales, así como las debilidades estructurales y sistémicas que permiten esta infiltración.

La presencia de organizaciones criminales en los sistemas judiciales latinoamericanos se manifiesta de diversas formas y niveles, desde la corrupción de funcionarios de bajo rango hasta la captura de instituciones judiciales enteras.

Este proceso de infiltración se ha visto facilitado por una serie de factores, entre los que se incluyen la debilidad institucional, la falta de recursos y capacidades, la impunidad y la connivencia entre políticos, empresarios y criminales.

Una de las principales formas en que las organizaciones criminales se infiltran en los sistemas judiciales es a través de la corrupción de funcionarios públicos. Esto puede implicar sobornos a jueces, fiscales, abogados y otros actores del sistema judicial para influir en decisiones judiciales, obstruir investigaciones o garantizar impunidad para sus actividades ilícitas.

La corrupción judicial deteriora la imparcialidad, la independencia y la integridad del sistema de justicia, minando así la confianza pública en el Estado de derecho y la capacidad del Estado para proteger los derechos fundamentales de sus ciudadanos.

Otra forma en que las organizaciones criminales se introducen es a través de la intimidación y la violencia. Los jueces, fiscales y otros funcionarios judiciales pueden ser objeto de amenazas, extorsiones y ataques físicos por parte de grupos criminales que buscan coaccionar o influir en sus decisiones.

Esta violencia y amenaza constante crea un clima de miedo e inseguridad que puede llevar a la autocensura y la inacción por parte de los actores judiciales, debilitando así la capacidad del sistema de justicia para cumplir con su mandato de proteger los derechos humanos y garantizar la rendición de cuentas.

Otra de las formas en que la corrupción y la violencia, las organizaciones criminales, se infiltran en estos sistemas, es mediante la captura institucional.

Esto implica la infiltración y el control de instituciones judiciales enteras, desde tribunales locales hasta cortes superiores, mediante la colocación de funcionarios leales al crimen organizado en posiciones clave de poder y toma de decisiones.

La captura institucional debilita la independencia y la imparcialidad del sistema judicial, convirtiéndolo en un instrumento al servicio de los intereses criminales en lugar de la justicia y el Estado de derecho.

Esto también se facilita por la falta de recursos y capacidades de las instituciones estatales. La escasez de personal calificado, la falta de financiamiento adecuado y la obsolescencia de la infraestructura y la tecnología hacen que las instituciones judiciales sean vulnerables a la influencia y el control externo por parte de grupos



criminales que pueden ofrecer recursos y apoyo logístico a cambio de impunidad y favoritismos.

Todo esto genera que la impunidad generalizada y la falta de rendición de cuentas en muchos países latinoamericanos permiten que la infiltración del crimen organizado en los sistemas judiciales prospere sin consecuencias significativas para los responsables.

La falta de investigaciones efectivas, procesos judiciales transparentes y sanciones adecuadas crea un ambiente propicio para la corrupción y la impunidad.

La connivencia entre políticos, empresarios y criminales también juega un papel importante en la infiltración de organizaciones criminales en los sistemas judiciales de Latinoamérica.

La corrupción política y empresarial puede facilitar la protección y el encubrimiento de actividades ilícitas, así como la influencia indebida sobre el proceso judicial y las decisiones judiciales.

Esta complicidad entre sectores del poder político, económico y criminal crea un entorno favorable para la impunidad y la perpetuación del crimen organizado en la región.

De acuerdo al reciente informe sobre el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2023, emitido por Transparencia Internacional<sup>48</sup>:

**La falta de autonomía en el poder judicial representa uno de los mayores desafíos en la lucha contra la corrupción en América Latina. En la mayoría de los países de la región, con excepción de tres, las puntuaciones en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional son inferiores a 50 sobre 100. Los países latinoamericanos que son percibidos como "menos corruptos" por sus ciudadanos son Uruguay, Chile y Costa Rica, con puntuaciones de 73, 66 y 55 puntos, respectivamente, siendo los únicos tres que superan los 50 puntos en este índice. En contraste, en el continente, Canadá tiene una puntuación de 76 puntos, mientras que Estados Unidos y Barbados obtienen 69 puntos cada uno.**

**En el extremo opuesto, los países con las puntuaciones más bajas son Venezuela, con 13 puntos, y Nicaragua, con 17 puntos, ambos caracterizados por un contexto de impunidad generalizada y una completa falta de independencia judicial. También se encuentran en las posiciones más bajas Honduras y Guatemala.**

**En una posición intermedia, aunque aún por debajo del umbral de aprobación, se encuentran países como Cuba (42), Colombia (40), Argentina (37), Brasil (36), República Dominicana y Panamá (35), Ecuador (34), Perú (33), El Salvador y México (31), Bolivia (29) y Paraguay (28). En este contexto, es fundamental abordar este problema para combatir la corrupción de manera efectiva y asegurar el funcionamiento adecuado del sistema de pesos y contrapesos. En la región de las Américas, que incluye 32 países, el promedio se mantiene en 43, según la ONG con sede en Berlín.**

**En cuanto a Venezuela y Nicaragua, que continúan obteniendo las puntuaciones más bajas, se les califica como "dictaduras", donde no existe una separación efectiva de poderes, predomina la opacidad y las fronteras entre lo legal y lo ilegal son "extremadamente difusas**

Fuente: Nuevo informe global sobre corrupción (2023).

---

<sup>48</sup> «Nuevo informe global sobre corrupción».

## IPC 2023 PARA LAS AMÉRICAS: La falta de independencia judicial frena el combate a la corrupción

- En América Latina y el Caribe, la falta de independencia y transparencia del Poder Judicial facilita la corrupción y la influencia indebida por parte de élites políticas y económicas.
- Muchos sistemas judiciales de la región no son capaces de aplicar la ley de manera eficaz e imparcial o de ejercer su función de contrapeso sobre otros poderes del Estado



Fuente: Transparency Internacional (2023)<sup>49</sup>

En respuesta a esta grave amenaza para el Estado de derecho y los derechos humanos, es fundamental fortalecer los sistemas judiciales de Latinoamérica mediante la implementación de medidas efectivas de prevención, detección y combate de la infiltración del crimen organizado.

Esto incluye la adopción de reformas institucionales y legales para mejorar la transparencia, la rendición de cuentas y la

independencia judicial, así como el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión y control para prevenir y sancionar la corrupción y la captura institucional.

Es necesario mejorar la capacidad operativa y los recursos de las instituciones judiciales para garantizar su eficacia y eficiencia en la protección de los derechos humanos y el combate contra el crimen organizado.

<sup>49</sup> Transparency Internacional, «ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN 2023: EL DEBILITAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE JUSTICIA DEJA A LA CORRUPCIÓN SIN CONTROLES».

Esto incluye la capacitación del personal judicial en materia de prevención y detección de la corrupción, así como el fortalecimiento de la cooperación internacional y la coordinación entre países para abordar de manera integral y efectiva este problema transnacional.

Del mismo modo, es crucial impulsar una cultura de integridad, ética y responsabilidad en el sector judicial, así como promover la participación de los ciudadanos y el acceso equitativo a la justicia para reforzar la legitimidad y la confianza en el sistema judicial.

Esto demanda la participación activa y el compromiso de todos los actores clave, incluidos los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado y la comunidad internacional, en la promoción y defensa del Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina.

El enfoque asumido a través de esta revisión nos permite identificar elementos claves sobre la incidencia de la corrupción sobre el sistema judicial, tal y como se observa en la siguiente tabla:

**Tabla 1.** Aspectos generales del impacto de la corrupción en el Sistema Judicial

<b>Aspecto</b>	<b>Descripción</b>
Relación entre casos de corrupción y la intervención política del poder judicial	Hay una clara conexión entre el incremento de casos de corrupción, particularmente aquellos que afectan a altos funcionarios, y el creciente protagonismo de los poderes judiciales en el ámbito político. Este fenómeno emerge en un entorno donde la distinción entre causa y efecto se vuelve difusa, y se evidencia un aumento sin precedentes del papel de los poderes judiciales en el sistema político en las últimas décadas.

Activismo judicial y coyunturas políticas	El aumento del activismo judicial a menudo precede la judicialización de la política, un fenómeno en el que los tribunales tienen un impacto considerable en temas políticos. Esta tendencia se vuelve particularmente notable cuando los jueces se involucran en casos de gran repercusión política o que afectan a políticos de alto nivel.
Relación entre activismo judicial y situaciones de incertidumbre política	Suele estar vinculado a situaciones de incertidumbre política o a una fragmentación del poder. En estos contextos, el poder judicial puede asumir un papel crucial al regular e intervenir en asuntos de considerable relevancia política.
Instrumentalización de la justicia ante la corrupción.	Cuando surgen casos de corrupción que afectan a políticos o involucran grandes redes políticas, el poder judicial suele intervenir, lo que resulta en una alta visibilidad pública y cobertura mediática. Sin embargo, esta intervención conlleva el riesgo de que la justicia sea utilizada de manera estratégica, dado que puede influir en el ámbito político de manera que beneficie o perjudique a diferentes actores.
Corrupción como instrumento político	No solo revelan cómo se entiende lo público y las debilidades de las democracias, sino que también pueden ser usados como herramientas en el juego político por diversos actores. Este uso puede ocurrir con o sin la implicación de los poderes judiciales, dependiendo de su grado de independencia o su politización

Fuente: Los autores (2024)



The background of the page is a high-angle, blurred photograph of several people walking on a light-colored tiled floor. The figures are out of focus, creating a sense of movement and a busy environment. The overall color palette is light and neutral, with the text in a dark blue color.

**PARTE III.**  
**EL SISTEMA JUDICIAL COMO**  
**BASTIÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN**

## Parte III



# El Sistema Judicial como bastión contra la corrupción

### Introducción

Luego de indagar sobre la importancia del sistema judicial y del fenómeno de corrupción que se presenta dentro de esta institución, hemos querido plasmar el otro lado de la moneda.

Este análisis se enfoca en el papel vital que desempeña el sistema judicial como un bastión contra la corrupción. Exploraremos cómo los defensores de la legalidad y la integridad, la protección de los derechos individuales y la igualdad ante la ley, así como la cooperación

internacional, son pilares esenciales en esta lucha sin fronteras.

Los defensores de la legalidad y la integridad, como jueces, fiscales y abogados, también velan por el cumplimiento imparcial de la ley. Su compromiso con la imparcialidad y la ética es crucial para prevenir y combatir la corrupción en todas sus formas. La independencia judicial es un principio fundamental que garantiza que las decisiones se tomen con base en la ley y no a influencias externas, asegurando así la integridad del sistema judicial.

La protección de los derechos personales y la garantía de igualdad ante la ley son esenciales para el ejercicio justo de la justicia. Los tribunales tienen el deber de asegurar que todos los ciudadanos sean tratados de manera justa, sin distinción de su nivel social o económico. La igualdad ante la ley significa que todas las personas deben cumplir con las mismas leyes y procedimientos, sin que exista discriminación ni favoritismos.

En cuanto a la colaboración internacional, resulta crucial para combatir la corrupción que atraviesa fronteras. Dado que la corrupción no

conoce límites territoriales, es fundamental que los países trabajen juntos para investigar y procesar casos que afectan a más de una nación. Los tratados internacionales y los sistemas para compartir información son herramientas vitales en esta lucha global contra la corrupción.



# Capítulo 6

## Guardianes de la Legalidad y la Integridad

# Capítulo 6

## Guardianes de la Legalidad y la Integridad

**E**l Capítulo 6 de nuestro estudio se sumerge en el papel vital que desempeña el sistema judicial como guardián de la legalidad y la integridad institucional.

En este análisis, abordaremos de manera exhaustiva cómo la autonomía del poder judicial y la imparcialidad son esenciales para combatir la corrupción. También estudiaremos el papel vital que desempeña el sistema judicial en la promoción de una cultura de honestidad y ética dentro de la sociedad, mediante la aplicación consistente de las leyes y la administración equitativa de justicia.

El sistema judicial es un pilar fundamental de cualquier sociedad democrática, encargado de salvaguardar el estado de derecho y garantizar que se cumplan las normas establecidas para el

funcionamiento ordenado y justo de la comunidad. Como tal, se erige como un bastión contra la corrupción, actuando como un baluarte de la legalidad y la integridad institucional.

La independencia judicial es un principio esencial que sustenta la efectividad del sistema judicial en su lucha contra la corrupción. Se refiere a la capacidad del poder judicial para actuar con autonomía e imparcialidad, libre de influencias externas, ya sean políticas, económicas o sociales. Esta independencia asegura que los jueces y magistrados puedan tomar decisiones basadas únicamente en la ley y en la evidencia presentada ante ellos, sin temor a represalias o interferencias indebidas.

La imparcialidad es otro componente crucial del sistema

judicial en su combate contra la corrupción. Los jueces y magistrados deben ser imparciales en el ejercicio de sus funciones, tratando a todas las partes ante la ley de manera equitativa y justa, sin prejuicios ni favoritismos. Esta imparcialidad garantiza que todas las personas sean juzgadas con igualdad de condiciones y que se respeten sus derechos fundamentales durante el proceso judicial.

De tal forma que, en su papel como garante de la legalidad y la imparcialidad, el sistema judicial desempeña un papel activo en la promoción de una cultura de integridad y ética en la sociedad. La

coherente aplicación de las leyes y la impartición imparcial de justicia envían un mensaje claro de que la corrupción no será tolerada y que aquellos que la practiquen serán llevados ante la justicia.

El sistema judicial, a través de sus decisiones y sentencias, establece precedentes importantes que contribuyen a la formación de una sociedad más ética y responsable. Al castigar los actos de corrupción y proteger los derechos de los ciudadanos, el sistema judicial fomenta la confianza en las instituciones democráticas y fortalece el tejido social.

## **6.1. Explorando el papel del sistema judicial como guardián de la legalidad y la integridad institucional.**

En el entramado institucional de cualquier sociedad democrática, el sistema judicial actúa como una columna vertebral que sostiene los cimientos del Estado de Derecho y vela por la preservación de la legalidad y la integridad institucional.

Su papel como garante de estos principios fundamentales se despliega en una serie de funciones y responsabilidades, cuya correcta ejecución es vital para asegurar la estabilidad y el funcionamiento adecuado de la sociedad. En este

análisis, profundizaremos en la manera en que el sistema judicial actúa como guardián de la legalidad y la integridad institucional, explorando los mecanismos y principios que lo sustentan.

El sistema judicial cumple su función de guardián de la legalidad principalmente a través de la interpretación imparcial y la aplicación de las leyes. Los tribunales tienen la responsabilidad de resolver conflictos legales y determinar la conformidad de las acciones de los individuos y del gobierno con la legislación vigente. Esta labor se lleva a cabo mediante un proceso judicial justo y transparente, en el cual se respetan los principios del debido proceso y se garantiza el derecho a la defensa.<sup>50</sup>

La interpretación de las leyes por parte del sistema judicial es un proceso esencial para garantizar la coherencia y la uniformidad en la aplicación del derecho. Los jueces y magistrados deben analizar

detenidamente las disposiciones legales y los precedentes judiciales relevantes para determinar el alcance y el significado de las normas en cuestión. Esta labor interpretativa no solo implica una comprensión técnica del derecho, sino también un compromiso con los principios de justicia y equidad.

La aplicación de las leyes es igualmente importante para asegurar el respeto a la legalidad en la sociedad. Los tribunales tienen la facultad de hacer cumplir las normas legales y de imponer sanciones en caso de violación de las mismas. Esta función coercitiva del sistema judicial contribuye a mantener el orden público y a prevenir conductas ilícitas.

Otro aspecto crucial del papel del sistema judicial como guardián de la legalidad es la protección de los derechos fundamentales de los individuos. Los tribunales tienen la función de garantizar que todas las personas sean tratadas con igualdad

---

<sup>50</sup> Binder, «Corrupción y sistemas judiciales».

ante la ley y que sus derechos individuales sean respetados y protegidos. Esto implica la defensa de derechos tales como la libertad de expresión, el derecho a un juicio justo, la protección contra la violencia y la discriminación, entre otros.<sup>51</sup>

La protección de los derechos fundamentales por parte del sistema judicial es esencial para salvaguardar la dignidad y la autonomía de los individuos en la sociedad. Los tribunales deben actuar como escudos protectores frente a posibles abusos de poder por parte del gobierno u otros actores poderosos. Esta función garantiza que el Estado de Derecho prevalezca sobre cualquier forma de autoritarismo o arbitrariedad en el ejercicio del poder.

El sistema judicial también ejerce un papel de control sobre los actos del poder público. Los tribunales tienen la facultad de revisar la constitucionalidad y legalidad de las

acciones de los poderes ejecutivo y legislativo, asegurando que estas se ajusten a los límites establecidos por la ley y la Constitución. Este control constitucional contribuye a prevenir abusos de poder y a mantener el equilibrio entre los diferentes poderes del Estado.

El control de los actos del poder público por parte del sistema judicial se realiza a través de mecanismos como el recurso de amparo, el control de constitucionalidad y la revisión judicial de actos administrativos. Estos mecanismos permiten a los ciudadanos y a las instituciones impugnar las decisiones gubernamentales que vulneren sus derechos o excedan los límites legales establecidos. De esta manera, el sistema judicial actúa como un contrapeso frente al poder político y garantiza que el ejercicio del mismo se realice dentro de los márgenes legales y constitucionales.

También desempeña un papel crucial en la promoción de la

---

<sup>51</sup> Platonova, «Corrupción, derechos humanos, independencia judicial».

integridad institucional. Esto implica promover la transparencia, la rendición de cuentas y la ética en el ejercicio del poder judicial. Los tribunales deben actuar con imparcialidad y objetividad en sus decisiones, sin verse influenciados por intereses políticos o económicos.

La promoción de la integridad institucional por parte del sistema judicial es esencial para mantener la confianza de la sociedad en las

instituciones democráticas. Los tribunales deben ejercer su autoridad de manera transparente y responsable, garantizando que todas sus actuaciones estén guiadas por principios éticos y profesionales. Esto incluye la adopción de medidas para prevenir y sancionar la corrupción dentro del sistema judicial, así como para garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos los ciudadanos.

## **6.2. ¿Cómo la falta de transparencia, la impunidad y la debilidad de los mecanismos de rendición de cuentas contribuyen a la corrupción judicial?**

La corrupción judicial es una preocupación global que crece aceleradamente. Para comprender cómo las debilidades del sistema de justicia contribuyen a este fenómeno, es necesario analizar en profundidad cada uno de estos aspectos y cómo interactúan entre sí para crear un entorno propicio para la corrupción en el ámbito judicial.<sup>52</sup>

La falta de transparencia en el sistema judicial es un fenómeno preocupante. Cuando las decisiones judiciales se toman a puerta cerrada, sin la debida supervisión pública y sin acceso a la información relevante, se crea un ambiente propicio para la corrupción y el abuso de poder.

---

<sup>52</sup> Carvajal Martínez et al., «La corrupción y la corrupción judicial».

La opacidad en el sistema judicial permite que los jueces y otros funcionarios judiciales actúen sin rendir cuentas ante la sociedad. En ausencia de un escrutinio público adecuado, los magistrados pueden verse tentados a tomar decisiones basadas en consideraciones personales o intereses particulares, en lugar de hacerlo en base a la ley y la evidencia presentada ante ellos. Esta falta de transparencia facilita la discrecionalidad judicial y abre la puerta a la arbitrariedad, lo que mina la confianza pública en la imparcialidad del sistema de justicia.

La falta de transparencia en el sistema judicial crea un entorno propicio para la corrupción y el favoritismo. Cuando las decisiones judiciales se toman en secreto y sin la debida supervisión, existe un mayor riesgo de que los jueces sean susceptibles a influencias indebidas, como sobornos o presiones externas. Los actores externos con intereses particulares pueden aprovecharse de esta falta de transparencia para manipular el

resultado de los casos judiciales en su propio beneficio.

También dificulta la identificación actos de corrupción. Sin acceso a los datos sobre los procedimientos judiciales y las decisiones judiciales, es difícil para el público y para las autoridades de control detectar e investigar posibles casos de corrupción. Esto puede llevar a que los actos de corrupción queden impunes y a que los responsables no sean llevados ante la justicia.

Para abordar eficazmente esta deficiencia, es fundamental impulsar la apertura en todos los niveles del poder judicial. Esto incluye garantizar que los procedimientos judiciales sean transparentes y accesibles al público, que se establezcan mecanismos efectivos para supervisar la conducta de los jueces y otros funcionarios judiciales, y que se promueva una cultura de transparencia y responsabilidad.

La debilidad de los mecanismos de rendición de cuentas en el sistema judicial es un factor crítico

que alimenta la corrupción y debilita la integridad del sistema de justicia. Cuando no existen mecanismos efectivos enfrentar la corrupción en el ámbito judicial, los funcionarios judiciales pueden actuar con impunidad y sin temor a ser responsabilizados por sus acciones. Esta falta de rendición de cuentas permite que los actos de corrupción queden impunes y debilita el estado de derecho en la sociedad.

La rendición de permite que los funcionarios públicos sean responsables ante la sociedad y que respondan por sus acciones. En el contexto del sistema judicial, la rendición de cuentas implica que los jueces y otros funcionarios judiciales sean responsables por sus decisiones y conducta, y que estén sujetos a mecanismos efectivos de supervisión y control.

Cuando el proceso de rendición de cuentas es inexistente o débil, se crea un ambiente en el que los actos de corrupción pueden florecer sin

consecuencias. Los funcionarios judiciales pueden sentirse libres de actuar de manera corrupta o indebida, sabiendo que es poco probable que sean investigados o sancionados por sus acciones.<sup>53</sup>

La debilidad de los mecanismos de rendición de cuentas en el sistema judicial es un factor crítico que alimenta la corrupción e impulsan la imparcialidad y la integridad del sistema de justicia.

Cuando no existen mecanismos efectivos para investigar y sancionar los actos de corrupción en el ámbito judicial, los funcionarios judiciales pueden actuar con impunidad y sin temor a ser responsabilizados por sus acciones. Esta falta de rendición de cuentas permite que los actos de corrupción queden impunes y debilita el estado de derecho en la sociedad.

Además, la falta de independencia de los órganos encargados de

---

<sup>53</sup> «Justicia Abierta: un desafío para la gobernanza democrática | Comunidades Cepal».



investigar los casos de corrupción judicial puede obstaculizar los esfuerzos por combatir este problema de manera efectiva. Cuando los órganos de control están sujetos a influencias políticas o económicas, existe un riesgo de que se obstaculice o se manipule la investigación de actos de corrupción.

Para abordar la debilidad de los mecanismos de rendición de cuentas en el sistema judicial, es fundamental fortalecer la transparencia y la independencia de los órganos de control y promover una cultura de responsabilidad y rendición de cuentas en el poder judicial. Esto incluye garantizar que las investigaciones sobre la conducta de los funcionarios

judiciales sean transparentes y estén sujetas a una supervisión efectiva, así como promover la independencia y la imparcialidad de los órganos encargados de llevar a cabo estas investigaciones.

Es importante establecer mecanismos de protección para los denunciantes de actos de corrupción en el sistema judicial y promover una cultura de transparencia y apertura en todas las instancias del poder judicial. Solo mediante un enfoque integral y basado en el fortalecimiento de los mecanismos de rendición de cuentas se puede combatir de manera efectiva la corrupción judicial y restaurar la confianza del público en la integridad del sistema de justicia.

### **6.3. El sistema judicial en la promoción de la integridad en la sociedad a través de la aplicación coherente de las leyes y la impartición imparcial de justicia.**

Para muchos, hablar del sistema judicial en la promoción de la cultura de integridad y ética, es hacer referencia al paradigma del buen

juez, y que, desde nuestra postura, aún persisten principios y normas que son respetados por gran parte de este sistema.

A partir de esta premisa, destacamos ese rol esencial que también cumple el sistema judicial como custodio de la legalidad y la integridad institucional en cualquier sociedad democrática. Su labor principal radica en la interpretación objetiva y la aplicación imparcial de las leyes, así como en la defensa de los derechos fundamentales de los individuos. A su vez, ejerce un control sobre las acciones del poder público y fomenta la integridad institucional mediante la adhesión a principios éticos y profesionales.

Los jueces y magistrados deben analizar detenidamente las disposiciones legales y los precedentes judiciales para dar una efectiva interpretación normativa. Este proceso interpretativo requiere no solo conocimiento técnico del derecho, sino también un compromiso con la justicia y la equidad.

Otro aspecto relevante del sistema judicial como guardián de la legalidad es su capacidad para controlar las acciones del poder

público. Los tribunales tienen la facultad de revisar la constitucionalidad y legalidad de las imposiciones establecidas, asegurando que estas se ajusten a las disposiciones establecidas en la ley y la Constitución. Este control constitucional es esencial para prevenir abusos de poder y mantener el equilibrio entre los diferentes poderes del Estado.

Por consiguiente, también promueve la integridad institucional mediante la adhesión a principios éticos y profesionales. Los tribunales deben actuar con imparcialidad y objetividad en sus decisiones, sin verse influenciados por intereses políticos o económicos. Esta promoción de la integridad institucional es vital para mantener la confianza de la sociedad en las instituciones democráticas y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos los ciudadanos.

Al hilo de estos planteamientos, el rol fundamental del juez en un Estado democrático de derecho, donde la confianza de los

ciudadanos en la Justicia es crucial, ha elevado el estándar ético exigido a los jueces en comparación con otros miembros de la sociedad.

Esta exigencia ética no se limita simplemente al comportamiento real del juez, sino que también se extiende a la percepción pública de su conducta. Esta idea se refleja en la exposición de motivos del mencionado Código Modelo, que destaca cómo el ejercicio del poder por parte de un juez conlleva ciertas responsabilidades que serían inapropiadas para un ciudadano común que no ostenta funciones judiciales.

Aceptar un cargo judicial conlleva tanto beneficios como responsabilidades significativas. Desde la perspectiva de la sociedad que otorga este mandato, se entiende que el juez debe preocuparse no solo por actuar de acuerdo con la dignidad inherente a su autoridad, sino también por mantener una conducta que no genere dudas legítimas en la

comunidad sobre cómo ejerce su función judicial.

Por estas razones, el juez está obligado a ejercer su función con total libertad interior, sujeto únicamente a lo que dicta el Derecho. Su independencia se ve comprometida cuando se ve afectado por influencias externas, como presiones políticas, económicas, de opinión pública, entre otras.

Esto queda claramente establecido en el Código Bangalore (1.1), que enfatiza la importancia de que el juez ejecute su labor judicial de manera independiente, basándose en su propia valoración de los hechos según lo establecido en la ley, sin estar condicionado por ninguna influencia externa, ya sea directa o indirecta, independientemente de su origen o motivo.

Para lograr esto, es imperativo que el juez actúe con libertad interior, de manera que nunca se vea presionado o determinado por fuerzas externas, como

consideraciones políticas o económicas. En muchos casos, estas presiones provienen de individuos con intereses económicos o delincuentes involucrados en actividades ilegales, como el narcotráfico. Esto exige a los jueces una actitud heroica, ya que no solo deben resistir la tentación de aceptar sobornos, sino que en ocasiones también deben enfrentarse al miedo de recibir amenazas, tanto para ellos como para sus seres queridos.

Esta situación es especialmente grave en países donde el Estado de Derecho no está plenamente establecido, y la valentía de los jueces resulta crucial para fortalecerlo.

El respeto al imperio de la Ley, que también es un deber moral, es fundamental para evitar que la independencia judicial se confunda con la arbitrariedad.

Esto puede ocurrir cuando se toman decisiones de manera caprichosa, basadas en una visión subjetiva o apresurada de lo que parece ser mejor en cada caso.

La integridad de este sistema depende en gran medida de la capacidad de los jueces para resistir estas presiones y tomar decisiones imparciales y objetivas basadas únicamente en la ley y los hechos presentados ante ellos.

# Capítulo 7

## **Cooperación Internacional y Lucha contra la Corrupción Transnacional**

# Capítulo 7

## Cooperación Internacional y Lucha contra la Corrupción Transnacional

**E**n el escenario cada vez más interconectado de la corrupción, las fronteras nacionales se desdibujan ante la complejidad de las redes delictivas que trascienden los límites geográficos. Ante este desafío, la cooperación internacional emerge como un eje crucial en la lucha contra este fenómeno. En el séptimo capítulo de nuestro análisis, nos adentramos en el fascinante mundo de la cooperación entre sistemas judiciales de diferentes países para investigar y enjuiciar casos de corrupción transnacional.

Exploraremos cómo esta colaboración entre jurisdicciones nacionales se convierte en un instrumento esencial para enfrentar la corrupción en su forma más sofisticada y globalizada. Desde la identificación de esquemas de

lavado de dinero hasta el rastreo de activos ilícitos en múltiples jurisdicciones, examinaremos cómo los sistemas judiciales de distintos países se unen en un esfuerzo conjunto para dismantelar las estructuras corruptas que operan a escala internacional.

Se mencionarán ejemplos concretos de tratados y acuerdos internacionales diseñados para fortalecer la cooperación judicial en la lucha contra la corrupción a nivel global. Desde la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) hasta acuerdos bilaterales y multilaterales, analizaremos cómo estas herramientas legales buscan cerrar las brechas que permiten a los corruptos eludir la justicia al cruzar fronteras.

Además, examinaremos los desafíos inherentes a esta forma de cooperación, como las diferencias en los sistemas legales y culturales, los obstáculos políticos y diplomáticos, y la complejidad logística de coordinar investigaciones transnacionales. Sin embargo, también destacaremos las oportunidades que ofrece esta colaboración, como el intercambio de mejores prácticas, la construcción de capacidades institucionales y la creación de alianzas estratégicas entre países para enfrentar de manera efectiva la corrupción en todas sus manifestaciones.

En última instancia, este capítulo nos invita a reflexionar sobre el papel crucial que desempeña la cooperación internacional en la construcción de un frente común contra la corrupción a nivel global. En un mundo cada vez más interdependiente, la colaboración entre países se presenta como un imperativo moral y pragmático para combatir este flagelo que amenaza la estabilidad, la prosperidad y la legitimidad de nuestra sociedad.

## **7.1. Colaboración entre sistemas judiciales de diferentes países para enfrentar la corrupción que trascienden las fronteras nacionales.**

En los últimos años, la comunidad internacional ha intensificado sus esfuerzos para combatir la corrupción y la impunidad en casos específicos. Se ha comprendido que la corrupción está estrechamente vinculada al desarrollo y a la calidad de la democracia, representando un obstáculo significativo para ambos.

Por lo tanto, para fomentar el desarrollo y consolidar la democracia, es crucial enfrentar y eliminar las prácticas corruptas. Como resultado, diversos organismos y donantes han dado prioridad a este asunto en sus acciones, centrando sus esfuerzos tanto en la lucha contra la corrupción como en la promoción del buen gobierno.

La Agenda 2030, con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), incluye la lucha contra la corrupción, reconociendo su importancia para construir

instituciones democráticas fuertes. El ODS 16 destaca la necesidad de reducir la corrupción y el soborno, fortalecer instituciones transparentes y asegurar el acceso público a la información.

Estos objetivos subrayan la conexión entre la corrupción y la creación de sociedades pacíficas, justas e inclusivas. Además, el éxito de los 17 ODS depende en gran medida del cumplimiento de las metas del ODS 16, que abordan la corrupción, el fortalecimiento institucional y el acceso a la información.

La comunidad internacional ha apoyado financieramente la creación de instituciones para combatir la corrupción, como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH). Estas instituciones, inspiradas en el



modelo de la CICIG, aunque con sus propias particularidades, surgieron como respuesta a crisis de corrupción y protestas ciudadanas en sus respectivos países.

La CICIG, establecida en 2006, se centró en dismantelar redes de corrupción e impunidad, particularmente aquellas vinculadas a estructuras clandestinas de seguridad y paramilitares heredadas del conflicto armado en Guatemala. La MACCIH, por su parte, fue creada por la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Honduras para mejorar la calidad del sistema judicial y combatir la corrupción.<sup>54</sup>

Sin embargo, tanto la CICIG como la MACCIH han enfrentado desafíos significativos en su funcionamiento. La CICIG se vio amenazada por la expulsión del país del comisionado Iván Velázquez debido a investigaciones que involucraban al presidente guatemalteco. Esta decisión provocó tensiones

internacionales y una crisis política en Guatemala.

Por otro lado, la MACCIH enfrentó obstáculos internos y externos, incluida la falta de apoyo de la élite política hondureña y del secretario general de la OEA. Las investigaciones de la MACCIH revelaron una trama de corrupción que involucraba a numerosos políticos, lo que generó resistencia y debilitó la institución.<sup>55</sup>

La inclusión establecida por la Agenda 2030 y la creación de instituciones para abordar este problema con el respaldo de la comunidad internacional, son indicadores clave de su importancia en la agenda del desarrollo. Sin embargo, es importante señalar que esta preocupación ha estado presente desde hace décadas, aunque inicialmente dentro del contenido de la Agenda del Buen Gobierno.

---

<sup>54</sup> Ramos Rollón, Marisa y Álvarez García, Francisco.

<sup>55</sup> Binder, «Corrupción y sistemas judiciales».

Desde la década de 1990, los bancos de desarrollo han integrado la lucha contra la corrupción como un pilar fundamental de sus políticas económicas, logrando avances significativos en las últimas décadas. El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han desempeñado roles cruciales en esta evolución, promoviendo políticas de buen gobierno para aumentar la eficacia de la ayuda internacional en los países en desarrollo.

Desde finales de los años 80, el Banco Mundial ha sido un actor clave en la promoción del buen gobierno y la lucha contra la corrupción. A través de políticas estructurales, ha buscado fortalecer el Estado de derecho y la creación de instituciones sólidas, siguiendo el modelo de la Nueva Gestión Pública. Aunque inicialmente la lucha contra la corrupción no era un objetivo directo, las reformas implementadas han ayudado indirectamente a reducir este problema. En años recientes, el Banco Mundial ha

vinculado la transparencia con el desarrollo, reconociendo que la corrupción es un obstáculo importante. En este campo, la contribución de Kaufmann ha sido notable.

En la práctica, esto se traduce en apoyar programas de buen gobierno que buscan construir instituciones transparentes y eficientes, mejorando así la provisión de servicios públicos y fortaleciendo la confianza de la ciudadanía.

De manera similar, el BID ha desarrollado progresivamente su agenda para combatir la corrupción, respondiendo a la creciente demanda y complejidad del tema. Este proceso ha implicado definir un enfoque operativo, mejorar su posicionamiento estratégico con los países y ofrecer soluciones más eficaces para abordar las demandas en esta área.

El Banco Interamericano de Desarrollo ha jugado un papel fundamental en la promoción de la transparencia y el fortalecimiento de

la integridad pública. Su agenda se ha enfocado en tres aspectos estratégicos: la creciente demanda de los países, la importancia renovada de los estándares internacionales y el rápido impacto de las innovaciones tecnológicas. El BID ha apoyado iniciativas clave como la Alianza por un Gobierno Abierto (AGA), la Iniciativa de Transparencia para las Industrias Extractivas (EITI) y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que establecen estándares y marcos regulatorios para promover la integridad y la transparencia. Además, el BID ha respaldado reformas para fortalecer la prevención y el control de la corrupción a través del Fondo de Transparencia, con el apoyo de donantes como Noruega y Canadá.

En el ámbito de las Naciones Unidas, tanto el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) han integrado la lucha contra la corrupción en sus

agendas, enfocándose en fortalecer las instituciones y los sistemas anticorrupción. El PNUD ha apoyado la implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) y ha promovido acciones conjuntas entre gobiernos, sociedad civil y sector privado en esta área. Sin embargo, hasta ahora, las acciones del PNUD han sido dispersas y limitadas, sin contar con un programa específico en la materia.

Por su parte, la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha hecho de la lucha contra la corrupción una de sus prioridades, enfocando su trabajo en mejorar la gestión pública en áreas como la transparencia, el acceso a la información, el combate a la corrupción y la educación en valores democráticos. La OEA ha creado el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) y ha establecido la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).

Este compromiso con la lucha contra la corrupción se reflejó en la Cumbre de las Américas de Lima en abril de 2018.

En cuanto a la Unión Europea (UE), aunque ya en 2005 se mencionaba la lucha contra la corrupción en el Consenso Europeo de Desarrollo, fue a partir de 2011, con el Programa para el Cambio, cuando se estableció como una prioridad específica. Posteriormente, en el Nuevo Consenso Europeo de Desarrollo (2017), la lucha contra la corrupción se situó en un lugar central en la agenda de cooperación de la UE y sus Estados miembros, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Este compromiso se traduce en acciones para promover una fiscalidad progresiva, medidas contra la corrupción y políticas redistributivas, con el objetivo de asegurar el acceso a servicios básicos de calidad para todos.

En América Latina, la UE ha llevado a cabo acciones importantes en la lucha contra la corrupción a

través de programas regionales. Por ejemplo, EUROsociAL II ha establecido una línea específica dedicada a combatir la corrupción, haciendo hincapié en la coordinación interinstitucional para abordar este problema. Además, se han implementado acciones de apoyo a la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) y de fomento de la transparencia en el sector público.

La UE también ha lanzado programas específicos para combatir la corrupción, como el programa ACTUE en Colombia. Actualmente, la lucha contra la corrupción sigue siendo una prioridad en EUROsociAL+, y este tema también aparece como un eje prioritario en otros programas, como El PacCTO.

España, como país donante, ha desarrollado su propia estrategia centrada en el sector del buen gobierno, incluso antes de que otros donantes, representados por el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD), hicieran de este tema un eje central de intervención. Sin

embargo, la prioridad otorgada a la gobernabilidad por parte de España ha estado orientada solo tangencialmente a combatir la corrupción en sus diversas formas. La mayor parte del apoyo de la cooperación española ha sido dirigida al sector de la justicia, respaldando reformas que promuevan una mayor independencia de los poderes

judiciales. A partir de 2005, se ampliaron los subsectores e instituciones con los que trabajar, incluyendo el apoyo a redes regionales de fiscales o Ministerios de Justicia con objetivos relacionados con la lucha contra la corrupción.

## **7.2. Ejemplos de tratados y acuerdos internacionales diseñados para incentivar la lucha contra la corrupción a nivel global**

En este espacio se revela que muchos de los casos más destacados de corrupción, también conocidos como de gran corrupción, están vinculados a situaciones complejas que a menudo tienen conexiones transnacionales. Esto se debe a la naturaleza global de las conexiones comerciales y empresariales, así como a la dispersión de beneficios en diferentes países, lo que facilita la internacionalización de las prácticas corruptas y, en consecuencia, su

control. La corrupción está estrechamente vinculada a las organizaciones delictivas transnacionales de diversas maneras, lo que hace necesaria una colaboración y coordinación efectivas entre países.

Por lo tanto, la cooperación institucional representa una herramienta de gran importancia para enfrentar la corrupción, lo que ha llevado al desarrollo de varios instrumentos internacionales para facilitar la acción conjunta entre

todas las naciones involucradas en la lucha contra estas redes.

Destacan dos convenios internacionales en este ámbito: la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos (OEA), ratificada en 1997, y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), aprobada en 2003.

La primera tiene como objetivo prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción mediante mecanismos tanto nacionales como internacionales, mientras que la segunda, firmada por 186 países, tiene un mandato amplio en la lucha contra la corrupción. Ambas convenciones han sido fundamentales para establecer una base jurídica sólida a nivel global.

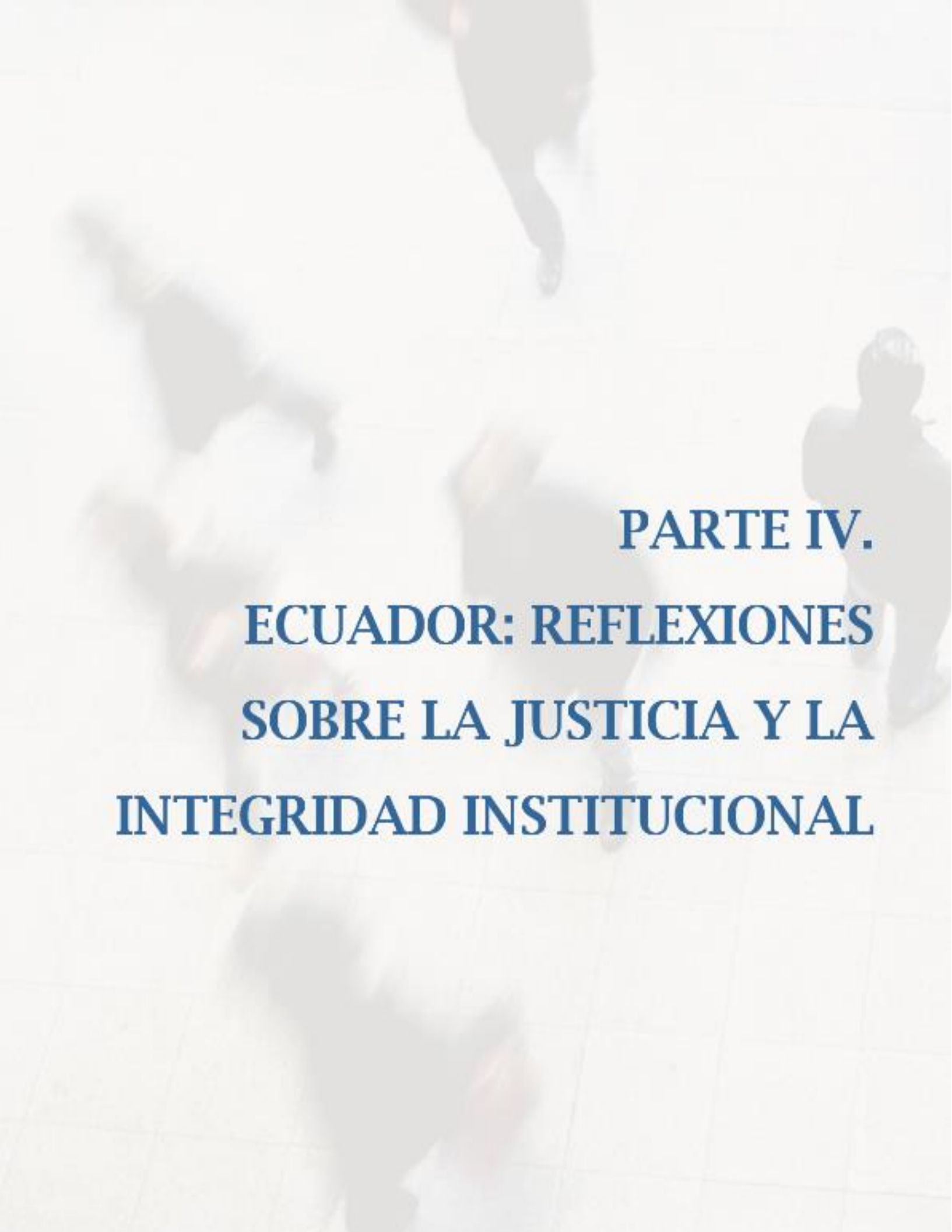
Asimismo, se han realizado esfuerzos importantes en el marco del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), creado en 1989 para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Este

grupo ha promovido la creación de organizaciones regionales, como GAFILAT en América Latina, que persiguen los mismos objetivos que el GAFI. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) también ha sido clave en la cooperación internacional contra la corrupción, especialmente a través de su Convención para Combatir el Cohecho en Transacciones Comerciales Internacionales.

En el contexto iberoamericano, se han fomentado acciones de cooperación internacional contra la corrupción a través de diversas redes institucionales, como la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB) e IberRed. Estas redes han implementado acciones específicas para combatir la corrupción, incluyendo la armonización de la legislación penal y la promoción de convenios para equipos conjuntos de investigación.

La Unión Europea (UE) y América Latina comparten el objetivo de combatir la corrupción en sus relaciones bilaterales, como se evidencia en las Cumbres UE-CELAC. En estas cumbres, se ha destacado el compromiso con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, situando esta cuestión como un elemento central en la agenda de cooperación internacional al desarrollo de la UE con América Latina.



The background of the page features a high-angle, blurred photograph of several people walking on a light-colored tiled floor. The figures are out of focus, creating a sense of movement and a busy, public environment. The overall color palette is light and neutral, with the text in a dark blue color.

**PARTE IV.**  
**ECUADOR: REFLEXIONES**  
**SOBRE LA JUSTICIA Y LA**  
**INTEGRIDAD INSTITUCIONAL**



## Parte IV



# Ecuador: reflexiones sobre la justicia y la integridad institucional

### Introducción

**L**a justicia y la integridad institucional son pilares fundamentales en cualquier sociedad que aspira a un Estado de derecho sólido y una convivencia democrática estable. En el contexto ecuatoriano, estas cuestiones adquieren una relevancia aún mayor debido a la complejidad de su historia política, social y económica.

En esta Parte IV profundizamos sobre temas cruciales, reconociendo su importancia como uno de los aspectos más significativos de nuestra obra.

El contenido de esta sección se basa en una serie de temas fundamentales que han moldeado el carácter de la justicia en Ecuador y han impactado en su integridad institucional a lo largo del tiempo. Entre los elementos que exploraremos se encuentran los hitos históricos que han dejado una huella indeleble en el sistema judicial ecuatoriano, así como la evolución de la percepción pública de la justicia y su influencia en la integridad de las instituciones.

Examinaremos los hitos que han forjado el carácter de la justicia en Ecuador, desde su independencia hasta la actualidad. Estos momentos clave no solo han definido la estructura y el funcionamiento del sistema judicial, sino que también han dejado una marca en la conciencia colectiva del pueblo ecuatoriano, afectando su confianza en las instituciones y en la administración de justicia.

Reflexionaremos sobre la percepción pública de la justicia a lo largo del tiempo y su impacto en la integridad institucional. Desde los periodos de estabilidad hasta las crisis políticas y sociales, analizaremos cómo la percepción de la justicia ha fluctuado y ha sido moldeada por eventos históricos, casos emblemáticos y la actuación de los actores políticos y sociales.

También llevaremos a cabo un análisis detallado de los desafíos contemporáneos que enfrenta el sistema judicial en Ecuador. Desde la corrupción hasta la eficiencia y la independencia del poder judicial,

exploraremos los obstáculos y las oportunidades que enfrenta este sistema en su misión de garantizar la igualdad ante la ley y proteger los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.

Estudiaremos los casos de crimen organizado y corrupción que han afectado al sistema judicial ecuatoriano, destacando la complejidad de estos fenómenos y su impacto en la integridad institucional. Asimismo, examinaremos las amenazas que enfrentan los actores de la justicia en Ecuador por parte del crimen organizado y el estigma hacia los operadores de justicia desde otras ramas del Estado. Estos desafíos adicionales plantean preguntas sobre la capacidad del sistema judicial para asegurar la imparcialidad y la transparencia en un entorno cada vez más complejo y polarizado.

# Capítulo 8

**El juicio de la justicia:  
desafíos y batallas actuales**

## Capítulo 8

### El juicio de la justicia: desafíos y batallas actuales

**E**l principal objetivo del sistema de justicia ecuatoriano es salvaguardar los derechos fundamentales y las garantías que poseen los ciudadanos para su bienestar tanto a nivel individual como colectivo. El Estado tiene el deber de asegurar el respeto al estado de derecho mediante el sistema judicial, organizándolo conforme a lo dispuesto en la Constitución de la República del Ecuador de 2008 y las leyes promulgadas para garantizar la observancia de la normativa suprema del país.

De acuerdo con el Título II de la Constitución de la República del Ecuador (2008), bajo el encabezado "Los derechos", y en el primer capítulo, "Principios de aplicación de los derechos", se establece que los derechos y garantías que la Constitución y los tratados

internacionales de derechos humanos reconocen deben ser aplicados de manera directa e inmediata por todos los servidores públicos, tanto administrativos como judiciales, ya sea de oficio o por solicitud.

Además, se indica que para el ejercicio de estos derechos y garantías no se pueden imponer condiciones o requisitos adicionales a los establecidos en la Constitución o en la ley, y que estos derechos deben ser plenamente exigibles ante la justicia, sin que se acepte la falta de una norma jurídica como justificación para su violación o desconocimiento.

El artículo mencionado subraya que es responsabilidad del Estado preservar los derechos y garantías constitucionales a través del sistema judicial, en alineación con los principios constitucionales que

fundamentan la Carta Magna. Se recalca que el propósito de la justicia es el bienestar de los ciudadanos, y no deben aceptarse excusas jurídicas para negar el disfrute de los derechos y garantías definidas en la Constitución.

Además, en el Título IV, titulado "Participación y organización del poder", el Capítulo cuarto, "La función judicial y justicia indígena", establece los principios de la administración de justicia. El artículo 167 señala que la autoridad para administrar justicia emana del pueblo y se ejerce a través de los órganos de la Función Judicial y otros órganos establecidos por la Constitución.

Este artículo enfatiza que la base del sistema de justicia es el ciudadano, quien ostenta la soberanía y la ejerce a través de los órganos correspondientes, como el sistema judicial, cuyos órganos judiciales tienen la autoridad para administrar justicia.

El artículo 168 de la Constitución define los principios que deben guiar la administración de justicia en el país. Primero, se asegura la independencia interna y externa de los órganos de la Función Judicial, estableciendo que cualquier violación a este principio conllevará responsabilidades administrativas, civiles y penales. Segundo, se requiere que la Función Judicial goce de autonomía administrativa, económica y financiera. Finalmente, se establece el principio de unidad jurisdiccional, que prohíbe a las demás autoridades del Estado realizar funciones de administración de justicia ordinaria, salvo las potestades jurisdiccionales que la Constitución les reconozca.

Este artículo constitucional contribuye a la justicia social en Ecuador al definir los criterios para el funcionamiento adecuado del sistema judicial, especificando la estructura del poder judicial y los órganos que lo integran, así como el régimen de funcionamiento y control al que estarán sometidos.

Así, el Estado, en su función de administrador del sistema judicial, establece los criterios para el acceso al poder judicial, garantizando los derechos y garantías consagrados en la Constitución, y subraya el rol del ciudadano como titular del poder originario del Estado. También se definen los objetivos de la justicia y los derechos laborales de los miembros del sistema judicial una vez que se integran en él.

En la siguiente sección de este capítulo, se reconoce la justicia indígena como una parte esencial del sistema judicial de la República del Ecuador. El artículo 171 establece que las autoridades de comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales basadas en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio dentro de su territorio, asegurando la participación y decisión de las mujeres.

Igualmente, estas autoridades aplicarán sus normas y procedimientos para resolver conflictos internos, siempre y cuando

no contravengan la Constitución y los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales. El Estado garantiza que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por las instituciones y autoridades públicas, las cuales estarán sujetas al control de constitucionalidad. La ley definirá los mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria.

En la tercera sección de este capítulo, se detallan los principios de la Función Judicial, desde el artículo 172 hasta el 176. El artículo 172 aborda la función de los jueces en la administración de justicia, el artículo 173 trata sobre las impugnaciones a las actuaciones de las autoridades estatales, y el artículo 174 establece la dedicación exclusiva requerida para los funcionarios del sistema de justicia, prohibiendo el ejercicio libre de su profesión.

## **8.1. Hitos que han forjado el carácter de la justicia en el país.**

Para comprender los hitos que han forjado el carácter de la justicia en Ecuador, es esencial remontarse a los momentos clave de su historia, aquellos que han dejado una marca indeleble en la evolución del sistema judicial y en la percepción de la sociedad respecto a la administración de justicia en el país. Estos hitos no solo reflejan los cambios institucionales y legales, sino también los desafíos sociales, políticos y culturales que han moldeado el panorama jurídico ecuatoriano a lo largo del tiempo.<sup>56</sup>

El primer momento crucial en la historia del Ecuador se remonta a los inicios de la República, con la adopción de su primera Constitución en 1830. Este documento estableció las bases para la estructura del Estado y delineó los principios fundamentales sobre los cuales se sustentaría la justicia en el país. No obstante, el desarrollo de un sistema

judicial autónomo y eficiente demoró en lograrse debido a las frecuentes crisis políticas y sociales que marcaron el siglo XIX en Ecuador.

A lo largo del siglo XX, Ecuador atravesó numerosos cambios políticos y constitucionales que afectaron directamente la administración de justicia. Un evento clave en este período fue la creación de la Corte Suprema de Justicia en 1938, la cual se convirtió en el máximo tribunal del país y asumió la responsabilidad de asegurar la aplicación uniforme de las leyes en todo el territorio ecuatoriano. Sin embargo, la independencia y eficacia de esta institución a menudo se vieron socavadas por la intervención política y la corrupción que permeaban el sistema judicial.

En la década de 1970, otro momento significativo ocurrió con la promulgación de la Constitución de 1979, que trajo consigo importantes

---

<sup>56</sup> Alcívar Trejom Carlos y Murillo Mena, Ámbar, «LA JUSTICIA EN LA CONFORMACIÓN DEL ESTADO DE DERECHO ECUATORIANO».

reformas en el sistema judicial ecuatoriano. Esta Constitución instituyó la separación de poderes y otorgó mayor autonomía e independencia al Poder Judicial, estableciendo las bases para la modernización del sistema judicial y la protección de los derechos fundamentales. Sin embargo, los deseos de reforma y cambio se vieron obstaculizados por la inestabilidad política y la falta de compromiso para implementar las reformas necesarias.

Un hito relevante se dio a principios del siglo XXI con la aprobación de la Constitución de 2008, la cual marcó un cambio significativo en la historia jurídica del Ecuador. Esta Constitución introdujo importantes avances en derechos humanos, justicia social y participación ciudadana, estableciendo las bases para la construcción de un Estado plurinacional e intercultural. Además, se crearon mecanismos para el control y la rendición de cuentas, con el objetivo de asegurar la

transparencia y la integridad en la administración de justicia.

Aparte de los hitos mencionados, existen otros eventos y procesos históricos que han dejado una huella significativa en la evolución del sistema judicial ecuatoriano. Estos momentos han contribuido de manera importante a la configuración del carácter de la justicia en Ecuador y deben ser considerados en cualquier análisis sobre el tema.

**1. Movimientos sociales y luchas por los derechos civiles:** A lo largo de la historia de Ecuador, diversos movimientos sociales y luchas por los derechos civiles han influido en la percepción y la práctica de la justicia en el país. Desde las luchas por la abolición de la esclavitud hasta las protestas por la igualdad de género y los derechos de los pueblos indígenas, estos movimientos han contribuido a ampliar el acceso a la justicia y a promover la igualdad ante la ley.

**2. Reformas legislativas y constitucionales:** A lo largo del



tiempo, Ecuador ha experimentado una serie de reformas legislativas y constitucionales que han tenido un impacto significativo en el sistema judicial. Estas reformas han abordado temas como la organización del Poder Judicial, la protección de los derechos humanos, la autonomía judicial y la lucha contra la corrupción. Cada una de estas reformas ha contribuido a fortalecer el estado de derecho y a mejorar la administración de justicia en el país.

**3. Casos emblemáticos y precedentes judiciales:** A lo largo de la historia judicial de Ecuador, ha habido casos emblemáticos que han generado un impacto duradero en la interpretación y la aplicación de la ley. Estos casos han sentado importantes precedentes y han contribuido a moldear la jurisprudencia ecuatoriana en áreas como los derechos humanos, la protección del medio ambiente, la responsabilidad penal y la igualdad de género.

**4. Cooperación internacional y tratados internacionales:** La cooperación internacional y la adhesión a tratados internacionales han tenido un papel importante en la configuración del sistema judicial ecuatoriano. La participación en organismos internacionales y la ratificación de tratados sobre derechos humanos, por ejemplo, han influido en la adopción de estándares internacionales en materia de justicia y han promovido la armonización de la legislación nacional con el derecho internacional.

**5. Avances tecnológicos y modernización del sistema judicial:** En las últimas décadas, los avances tecnológicos y la modernización del sistema judicial han transformado la forma en que se administra la justicia en Ecuador. La implementación de sistemas electrónicos de gestión judicial, la digitalización de expedientes y la creación de portales de acceso a la información judicial han mejorado la eficiencia y la transparencia del sistema judicial, aunque también han

planteado nuevos desafíos en términos de ciberseguridad y protección de datos.

**6. Movimientos de reforma judicial y lucha contra la corrupción:** En las últimas décadas, Ecuador ha experimentado varios esfuerzos de reforma judicial y lucha contra la corrupción que han dejado una huella importante en su sistema judicial. Estos esfuerzos surgieron como respuesta a la percepción de corrupción y falta de transparencia en el sistema, y han tenido como objetivo fortalecer las instituciones, mejorar la rendición de cuentas y asegurar la independencia del poder judicial. Entre estos esfuerzos se destacan la creación de comisiones para el control y la fiscalización, la implementación de sistemas de monitoreo y evaluación, y la promulgación de leyes y normativas diseñadas para prevenir y combatir la corrupción en el ámbito judicial.

**7. Conflictos políticos y tensiones institucionales:** Los conflictos políticos y las tensiones institucionales también han dejado

su marca en la historia de la justicia en Ecuador. A lo largo de los años, el sistema judicial ha sido objeto de disputas y enfrentamientos entre diferentes poderes del Estado, así como entre actores políticos y sociales. Estos conflictos han tenido un impacto negativo en la independencia judicial, la imparcialidad de los tribunales y la eficacia del sistema de justicia. Han generado desafíos continuos en cuanto a la estabilidad institucional y el estado de derecho, afectando la capacidad del sistema para operar de manera justa y eficiente.

**8. Avances en derechos humanos y protección de minorías:** La protección de los derechos humanos y de las minorías ha sido otro hito importante en la evolución del sistema judicial ecuatoriano. Se han logrado avances significativos en protección de los derechos fundamentales, incluyendo los derechos de las mujeres, los pueblos indígenas, las personas LGBTIQ+ y otros grupos históricamente marginados. Estos avances han sido

el resultado de la lucha de movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos, así como de la labor de instituciones judiciales y organismos de protección de derechos.

Se puede vislumbrar, que los hitos que han forjado el carácter de la justicia en Ecuador son diversos y multifacéticos, abarcando desde la promulgación de importantes leyes y reformas constitucionales hasta la intervención social en la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción.

## **8.2. Reflexionando sobre la percepción pública de la justicia a través del tiempo y su impacto en la integridad institucional.**

La percepción pública de la justicia en Ecuador ha sido un tema de constante debate y análisis a lo largo de su historia. Esta percepción no solo refleja la confianza de la sociedad en la imparcialidad y eficacia del sistema judicial, sino que también puede influir en la integridad institucional del país. Para comprender mejor este fenómeno,

Estos reflejan los desafíos y las transformaciones que ha experimentado el sistema judicial ecuatoriano a lo largo de su historia, así como los avances y retrocesos en la consolidación del estado de derecho y la protección de los derechos fundamentales. A pesar de los obstáculos y las dificultades, estos hechos también evidencian la capacidad de la sociedad ecuatoriana para generar cambios significativos en busca de una justicia más transparente, imparcial y efectiva.

es necesario explorar cómo ha evolucionado la percepción pública de la justicia en Ecuador a lo largo del tiempo y cómo ha impactado en la integridad de las instituciones judiciales.

En el Ecuador colonial, la justicia estaba fuertemente influenciada por el sistema legal español y la Iglesia

Católica. La administración de justicia estaba en manos de los funcionarios coloniales, quienes ejercían un poder autoritario y a menudo arbitrario sobre la población. Esta falta de transparencia y la percepción de favoritismo hacia los intereses de la corona española y los terratenientes locales minaron la confianza del pueblo en el sistema judicial.

Con la independencia de Ecuador en 1830, se esperaba un cambio en la administración de justicia. Sin embargo, los primeros años de la república estuvieron marcados por la inestabilidad política y la falta de instituciones judiciales sólidas. La justicia estaba fuertemente politizada y sujeta a la influencia de los líderes políticos y militares de turno. Esta situación contribuyó a una creciente desconfianza en el sistema judicial y alimentó la percepción de que la justicia solo servía a los intereses de la élite gobernante.<sup>57</sup>

Durante el siglo XX, Ecuador experimentó una serie de reformas judiciales destinadas a mejorar la administración de justicia y restaurar la confianza del público en el sistema judicial. Sin embargo, estas reformas fueron en gran medida superficiales y no lograron abordar los problemas subyacentes de corrupción, nepotismo y falta de independencia judicial. La percepción pública de la justicia continuó siendo negativa, ya que los ciudadanos percibían que el sistema judicial estaba plagado de favoritismos y que las sentencias eran influenciadas por consideraciones políticas y económicas.

La situación comenzó a cambiar en la década de 1990 con la adopción de una serie de reformas legales y constitucionales destinadas a fortalecer el estado de derecho y garantizar la independencia judicial. Se crearon instituciones como el Consejo de la Judicatura y se implementaron acciones para

---

<sup>57</sup> Observatorio Judicial, «LA JUSTICIA EN ECUADOR ¿Cuenta la Función Judicial con suficientes recursos para cumplir con su labor?»

mejorar la transparencia y la rendición de cuentas. Estas reformas contribuyeron a una mayor confianza en la justicia y a una percepción más positiva de su funcionamiento.

Sin embargo, a pesar de estos avances, la percepción pública de la justicia en Ecuador sigue siendo mixta. Si bien se han realizado

esfuerzos significativos para mejorar la transparencia y la eficacia del sistema judicial, persisten desafíos importantes, como la corrupción, la impunidad y la politización de la justicia. Los ciudadanos todavía perciben que el acceso a la justicia está sesgado por consideraciones de clase, género y estatus socioeconómico.

### **8.3. Radiografía de los desafíos contemporáneos del sistema judicial ecuatoriano.**

Los desafíos contemporáneos del sistema judicial ecuatoriano reflejan una serie de problemas estructurales y culturales que afectan su funcionamiento y la percepción pública de su eficacia e imparcialidad. Algunos de estos desafíos incluyen:

<b>Aspecto</b>	<b>Descripción</b>
<b>Corrupción y falta de integridad</b>	Estos representan uno de los desafíos más graves y persistentes del país. Estas problemáticas pueden manifestarse de diversas maneras y tener un impacto perjudicial tanto en la administración de justicia como en la sociedad en general. <b>Sobornos y coimas:</b> Los sobornos y las coimas son prácticas corruptas comunes en el sistema judicial ecuatoriano, donde los

	<p>funcionarios judiciales pueden aceptar pagos ilegales a cambio de influir en el resultado de un caso. Estas prácticas afectan la imparcialidad del sistema y distorsionan el curso de la justicia, permitiendo que los culpables evadan responsabilidades y que los inocentes sean condenados injustamente.</p> <p><b>1. Influencia política y presiones externas:</b> La influencia política y las presiones externas pueden afectar la toma de decisiones judiciales, especialmente en casos sensibles que involucran a figuras políticas, empresariales o de poder. Los funcionarios judiciales pueden ser presionados para tomar decisiones que favorezcan ciertos intereses políticos o económicos, en lugar de aplicar la ley de manera imparcial y objetiva.</p> <p><b>2. Venta de fallos judiciales:</b> En algunos casos, se ha documentado la venta de fallos judiciales en Ecuador, donde los veredictos son manipulados o negociados a cambio de dinero u otros beneficios. Esta práctica no solo influye en la credibilidad del sistema judicial, sino que también perpetúa la impunidad y la injusticia, al permitir que los infractores compren su libertad o eviten ser condenados por sus delitos.</p> <p><b>3. Nepotismo y favoritismo:</b> El nepotismo y el favoritismo son problemas adicionales. En ocasiones, los cargos judiciales pueden ser</p>
--	--

	<p>otorgados no en función del mérito y la capacidad, sino más bien por conexiones políticas o relaciones personales. Esto puede llevar a la designación de funcionarios judiciales incompetentes o parcializados, comprometiendo así la calidad y la imparcialidad de la administración de justicia.</p> <p><b>4. Falta de supervisión y control interno:</b> La falta de supervisión y control interno en el sistema judicial ecuatoriano crea un ambiente propicio para la corrupción. La inexistencia de acciones efectivas de control y rendición de cuentas impulsa la impunidad, sin temor a ser investigados o sancionados por sus acciones corruptas.</p> <p><b>5. Impacto en la justicia la democracia:</b> La corrupción tiene graves consecuencias para la justicia y el Estado de derecho en el país. Además, la corrupción puede erosionar la legitimidad de las instituciones democráticas y fomentar la impunidad, creando un entorno propicio para el crimen organizado y la violencia.</p> <p>Abordar este problema n el sistema judicial ecuatoriano requerirá un enfoque integral que incluya reformas legales, medidas de transparencia y rendición de cuentas, así como una cultura de ética y profesionalismo en el ejercicio de la justicia.</p>
--	--

	<p>Es esencial reforzar los mecanismos de supervisión y control interno, y fomentar una cultura de denuncia y tolerancia cero hacia la corrupción en todas sus formas.</p>
<b>Politización y falta de independencia judicial</b>	<p>La politización del sistema judicial en Ecuador es un problema arraigado que continúa representando un desafío significativo para la integridad y la eficacia del sistema judicial. Esta politización puede manifestarse de varias maneras y puede tener consecuencias graves para la imparcialidad y la legitimidad del sistema. Aquí hay una ampliación de este problema:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Nombramientos y ascensos influenciados por intereses políticos:</b> En ocasiones, los nombramientos y ascensos de jueces y funcionarios judiciales pueden estar influenciados por consideraciones políticas en lugar de basarse en el mérito y la idoneidad. Esta práctica afecta la independencia del poder judicial al comprometer la imparcialidad de los jueces y afectar su capacidad para tomar decisiones objetivas y justas.</li><li>• <b>Presiones externas sobre el proceso judicial:</b> Los actores políticos y otros poderes externos pueden ejercer presiones indebidas sobre el sistema judicial para influir en el resultado de casos específicos o para proteger a personas afines políticamente. Esto puede incluir</li></ul>



	<p>intimidaciones, amenazas o incluso represalias contra jueces y fiscales que se resisten a seguir una línea política predefinida.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Polarización y partidismo en la justicia: La polarización política en Ecuador puede infiltrarse en el sistema judicial, dando lugar a decisiones judiciales que reflejan lealtades partidistas en lugar de una aplicación imparcial de la ley.</li> <li>• Desconfianza en la imparcialidad del sistema: La politización del sistema judicial alimenta la desconfianza del público en la imparcialidad del sistema y en la capacidad del Estado para garantizar un juicio justo y equitativo para todos los ciudadanos. Esta desconfianza puede erosionar la legitimidad del sistema judicial y afectar la estabilidad y la cohesión social en el país.</li> </ul> <p>Abordar la politización del sistema judicial en Ecuador requerirá un compromiso firme con la independencia judicial, así como reformas estructurales destinadas a fortalecer las garantías de imparcialidad y proteger al sistema judicial de la influencia indebida de los intereses políticos. Esto puede incluir el diseño y desarrollo de estrategias efectivas de selección y nombramiento de jueces.</p>
<p><b>Capacitación y recursos insuficientes</b></p>	<p>La falta de capacitación adecuada y la escasez de recursos materiales y financieros</p>

	<p>representan desafíos significativos para el sistema judicial ecuatoriano, ya que impactan negativamente en la calidad, la eficiencia y la confianza del público. Aquí se detallan algunas de las implicaciones y consecuencias de estos problemas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Calidad deficiente de las decisiones judiciales:</b> La falta de capacitación adecuada puede resultar en jueces y fiscales que carecen de los conocimientos técnicos necesarios para aplicar correctamente la ley y tomar decisiones judiciales fundamentadas. Esto puede conducir a decisiones judiciales deficientes que no reflejan adecuadamente los principios de justicia, equidad y legalidad.</li><li>• <b>Percepción de injusticia y arbitrariedad:</b> Cuando los ciudadanos perciben que las decisiones judiciales se toman sin la debida capacitación o análisis, pueden experimentar una sensación de injusticia y arbitrariedad en el sistema judicial. Esto puede erosionar la confianza del público en la imparcialidad y la equidad del sistema, y generar descontento y desconfianza hacia las instituciones judiciales.</li><li>• <b>Retrasos y congestión judicial:</b> La escasez de recursos materiales y financieros puede contribuir a la congestión de los tribunales y los retrasos en la resolución de casos. La falta de personal, infraestructura y tecnología</li></ul>
--	--

	<p>adecuados puede dificultar la gestión eficiente de los procesos judiciales, lo que resulta en tiempos de espera prolongados para obtener una resolución judicial.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inequidad en el acceso a la justicia: Las deficiencias en el sistema pueden afectar desproporcionadamente a ciertos grupos de la población, especialmente a aquellos que enfrentan barreras económicas, geográficas o culturales para acceder al sistema judicial.</li> <li>• Debilidad en la protección de derechos humanos: La insuficiencia de capacitación y recursos puede limitar la capacidad del sistema judicial para salvaguardar eficazmente los derechos humanos de los ciudadanos. La falta de formación adecuada para jueces y fiscales en casos relacionados con derechos humanos puede conducir a violaciones de derechos o a decisiones judiciales injustas. Esta situación puede socavar la confianza del público en el sistema judicial y suscitar inquietudes sobre el respeto a los derechos fundamentales en el país.</li> </ul>
<p><b>Falta de transparencia y rendición de cuentas</b></p>	<p>La opacidad en los procesos judiciales y la falta de mecanismos efectivos de rendición de cuentas son problemas sistémicos que minan la confianza del público en la integridad y la imparcialidad del sistema judicial ecuatoriano. Esta falta de transparencia puede dar lugar a</p>

	<p>percepciones de corrupción y nepotismo. Aquí se detallan algunas de las formas en que la opacidad y la falta de rendición de cuentas contribuyen a estos problemas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Falta de transparencia en la selección y ascenso de jueces: La falta de transparencia en los procesos de selección y ascenso de jueces puede alimentar la percepción de favoritismo y nepotismo en el sistema judicial. Cuando los criterios de selección no se hacen públicos o no se aplican de manera consistente, existe el riesgo de que los nombramientos se basen en consideraciones políticas o personales en lugar de en el mérito y la idoneidad. Esto puede llevar a la designación de jueces que no están adecuadamente calificados o que tienen conexiones políticas.</li><li>• Opacidad en la asignación de recursos: La falta de transparencia en la asignación de recursos financieros y materiales dentro del sistema judicial puede dar lugar a percepciones de corrupción y malversación de fondos. Cuando no hay claridad sobre cómo se asignan y utilizan los recursos, existe el riesgo de que se desperdicien o se desvíen para beneficiar a ciertos individuos o grupos. Esto puede erosionar la confianza del público en la gestión eficiente y equitativa de los recursos judiciales,</li></ul>
--	--

	<p>así como en la imparcialidad del sistema en su conjunto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas: La falta de mecanismos efectivos de rendición de cuentas dentro del sistema judicial permite que los funcionarios judiciales operen con impunidad y sin supervisión adecuada. Cuando no hay consecuencias claras para la mala conducta o la corrupción, los funcionarios judiciales pueden sentirse libres de actuar en su propio interés o en interés de otros, en lugar de en beneficio del público y el estado de derecho.</li> <li>• Percepción de arbitrariedad y falta de imparcialidad: La opacidad en los procesos judiciales puede alimentar la percepción de que las decisiones judiciales se toman de manera arbitraria o influenciada por intereses externos. Cuando los ciudadanos no tienen acceso a información clara sobre cómo se toman las decisiones judiciales o cómo se asignan los recursos judiciales, es natural que surjan dudas sobre la imparcialidad y la equidad del sistema. Esto puede generar desconfianza y escepticismo hacia las instituciones judiciales.</li> </ul>
<p><b>Infraestructura obsoleta y tecnología insuficiente</b></p>	<p>Los problemas de infraestructura obsoleta y la falta de tecnología adecuada representan desafíos significativos para el funcionamiento eficiente del sistema judicial ecuatoriano. Estas</p>

	<p>deficiencias pueden tener diversas repercusiones negativas en la administración de justicia y en la confianza del público en el sistema judicial. Aquí se detallan algunas de las implicaciones y consecuencias de estos problemas:</p> <p><b>1. Dificultades en la gestión de casos:</b> La falta de infraestructura adecuada puede dificultar la gestión eficiente de casos en los tribunales ecuatorianos. Los juzgados y tribunales con instalaciones obsoletas pueden carecer de espacio suficiente para llevar a cabo audiencias y procedimientos judiciales de manera adecuada. Esto puede conducir a retrasos y congestión en los tribunales, lo que afecta la prontitud y la eficiencia en la resolución de casos.</p> <p><b>2. Ineficiencia en el manejo de registros y documentación:</b> La ausencia de tecnología adecuada, como sistemas de gestión de casos y registros electrónicos, puede dificultar el manejo eficiente de la documentación judicial. La dependencia de registros en papel y métodos manuales de seguimiento de casos puede llevar a errores, pérdida de información y dificultades para acceder a registros judiciales importantes. Esto puede contribuir a retrasos en los procedimientos judiciales y a</p>
--	---

	<p>una mayor carga de trabajo para el personal judicial.</p> <p><b>3. Limitaciones en el acceso a la justicia:</b> La falta de tecnología adecuada puede limitar el acceso de los ciudadanos a la justicia, especialmente en áreas rurales o remotas donde la infraestructura judicial puede ser aún más deficiente. La falta de acceso a herramientas y recursos tecnológicos puede dificultar que los ciudadanos presenten demandas o accedan a información relevante sobre sus casos. Esto puede perpetuar la exclusión y la desigualdad en el acceso a la justicia, especialmente para aquellos que no tienen los medios para viajar a los tribunales o contratar representación legal.</p> <p><b>4. Mayor riesgo de errores y malentendidos:</b> La falta de tecnología adecuada en el sistema judicial aumenta el riesgo de errores y malentendidos en los procedimientos judiciales. Los registros judiciales incorrectos o incompletos pueden llevar a decisiones judiciales erróneas o injustas. Además, la falta de comunicación eficiente entre los tribunales, las partes y los abogados puede generar confusiones y retrasos en los procedimientos judiciales.</p> <p><b>5. Necesidad de modernización y actualización:</b> Para abordar estos desafíos, es</p>
--	--

	<p>crucial invertir en la modernización y actualización de la infraestructura y la tecnología judicial en Ecuador. Esto puede implicar la implementación de sistemas de gestión de casos y registros electrónicos en todos los tribunales, así como la provisión de capacitación adecuada para el personal judicial en el uso de tecnología legal.</p>
<p><b>Presión sobre el sistema debido a la criminalidad organizada y la violencia</b></p>	<p>La situación de seguridad en Ecuador presenta desafíos significativos, incluyendo la presencia de grupos delictivos organizados, el aumento de la criminalidad y altos índices de violencia. Estos factores ejercen una presión adicional sobre el sistema judicial, que se ve desbordado por el volumen de casos relacionados con delitos graves, lo que afecta su capacidad para garantizar un juicio justo y oportuno. Aquí se exponen algunas de las complejidades y consecuencias de esta situación:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sobrecarga del sistema judicial: El aumento de la criminalidad y la presencia de grupos delictivos organizados generan una mayor cantidad de casos que deben ser procesados por el sistema judicial. Esta sobrecarga puede saturar los tribunales, provocar retrasos en los procedimientos y dificultar la capacidad del sistema para garantizar juicios justos y oportunos. Los recursos limitados y la</li></ul>



	<p>infraestructura obsoleta del sistema judicial también contribuyen a esta situación.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Riesgo de impunidad:</b> La saturación del sistema judicial puede resultar en una demora en la resolución de casos, lo que aumenta el riesgo de impunidad para los delincuentes. Los retrasos prolongados pueden permitir que los acusados evadan la justicia o incluso que continúen cometiendo delitos mientras esperan juicio.</li><li>• <b>Presión sobre los recursos judiciales:</b> La necesidad de asignar recursos y personal judicial para abordar casos relacionados con delitos graves puede desviar recursos de otros sectores del sistema judicial, como la resolución de disputas civiles o la protección de derechos humanos. Esto puede llevar a una distribución desigual de recursos y a una menor capacidad para abordar otros problemas legales importantes que afectan a la sociedad.</li><li>• <b>Desafíos en la aplicación de la ley:</b> La lucha contra la delincuencia organizada y la violencia requiere una cooperación efectiva entre las fuerzas del orden, el sistema judicial y otras instituciones pertinentes. Sin embargo, los recursos limitados y la sobrecarga del sistema judicial pueden obstaculizar la capacidad del sistema legal para responder de manera eficaz a estos desafíos. La falta de coordinación y</li></ul>
--	---

	<p>cooperación entre las agencias encargadas de hacer cumplir la ley también puede ser un obstáculo.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Necesidad de medidas integrales: Abordar los desafíos de seguridad en Ecuador requiere un enfoque integral que combine medidas de prevención del delito, aplicación de la ley, rehabilitación de infractores y fortalecimiento del sistema judicial. Esto incluye la implementación de políticas que aborden las causas subyacentes de la criminalidad, así como la mejora de la capacidad y los recursos del sistema judicial para garantizar una respuesta efectiva y justa ante los delitos.</li></ul>
--	--

Fuente: Los autores (2024)

Abordar estos desafíos requerirá un enfoque integral que incluya reformas legales, medidas de transparencia y rendición de cuentas, así como un compromiso firme con la independencia judicial y el fortalecimiento de las instituciones judiciales. Además, será importante involucrar a la sociedad civil y a otras partes interesadas en el proceso de reforma para garantizar que refleje las necesidades y preocupaciones de la población ecuatoriana.

# Capítulo 9

## **Entre Luces y Sombras: Corrupción Judicial en Ecuador desde Perspectivas contrastantes**

## Capítulo 9

### Entre Luces y Sombras: Corrupción Judicial en Ecuador desde Perspectivas contrastantes

La administración de justicia en cualquier país es un pilar fundamental para el funcionamiento democrático y el respeto de los derechos humanos. Sin embargo, en Ecuador, este sistema se ha visto envuelto en una serie de nudos críticos que han erosionado su legitimidad y eficacia. En el Capítulo 9 de "Entre Luces y Sombras: Corrupción Judicial en Ecuador desde Perspectivas Contrastantes", se aborda de manera exhaustiva esta problemática, explorando desde diferentes ángulos las complejas dinámicas que caracterizan al sistema judicial ecuatoriano.

El capítulo comienza por examinar los nudos críticos de la administración de justicia en Ecuador, destacando los principales desafíos que enfrenta el sistema,

desde la falta de independencia judicial hasta la corrupción endémica. Este análisis detallado sienta las bases para comprender las dinámicas subyacentes que perpetúan la crisis en el ámbito judicial del país.

Una de las facetas más preocupantes de esta crisis es la forma en que se manifiesta en casos de crimen organizado y corrupción. A través de un examen detallado de casos emblemáticos como "Metástasis" y "Purga", se revela la complejidad de estos fenómenos y su impacto corrosivo en la sociedad ecuatoriana. Estos casos no solo ponen de manifiesto la fragilidad de las instituciones encargadas de administrar justicia, sino también la necesidad urgente de abordar estas

amenazas de manera integral y efectiva.

Este contenido también presenta el debate sobre si las deficiencias en la integridad institucional del sistema judicial ecuatoriano son el resultado de ataques deliberados contra el poder judicial o simplemente reflejan problemas estructurales arraigados en su funcionamiento. Desde diversas perspectivas, se analizan las causas subyacentes de estas deficiencias, explorando tanto factores internos como externos que contribuyen a la erosión de la confianza en el sistema judicial.

Otro aspecto crucial que se aborda en este capítulo es la amenaza que representa el crimen organizado para los actores de la justicia en Ecuador. La penetración del narcotráfico y otras formas de delincuencia organizada en el ámbito judicial plantea desafíos significativos para la aplicación imparcial de la ley y la protección de los derechos fundamentales. Este análisis arroja luz sobre las complejas interacciones entre el poder judicial y los grupos criminales, así como sobre las estrategias necesarias para contrarrestar estas amenazas de manera efectiva.

### **9.1. La corrupción en el sistema judicial ecuatoriano.**

La corrupción en Ecuador es un problema extendido y en constante aumento, evidenciado por la conducta de funcionarios públicos, jueces y fiscales que supuestamente aceptan sobornos a cambio de impunidad. La propagación de la corrupción en el ámbito judicial ecuatoriano ha sido alimentada por

diversos factores, destacando la influencia política y económica que persiste como una preocupante constante. La injerencia ejercida por grupos influyentes y la manipulación de decisiones judiciales en favor de intereses personales o partidistas que intervienen en la independencia

de los jueces y la integridad de sus fallos.

Existen múltiples motivaciones que impulsan la corrupción entre los funcionarios judiciales en Ecuador, variando según las circunstancias de cada caso. Estas incluyen la búsqueda de ganancias personales o grupales, la presión ejercida por actores internos o externos, la falta de controles efectivos y la adopción de prácticas corruptas como parte de la cultura organizacional o social. Por otro lado, la lentitud y falta de transparencia en los procesos judiciales han creado un ambiente propicio para la corrupción. La demora en el manejo de casos y la toma de decisiones ha alimentado la percepción de que las resoluciones se obtienen mediante influencias indebidas.

Consciente de la gravedad de esta situación, Ecuador ha establecido instituciones clave, como la Fiscalía General del Estado y la Defensoría del Pueblo, para combatir la

corrupción en todas las esferas gubernamentales, incluyendo el sistema judicial. Mediante la Resolución No. 190-2021 la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial, difundida en el Suplemento del Registro Oficial No. 345 el 8 de diciembre de 2020 (artículo 45), se estableció la formación de jueces y juezas especializados con el propósito de enjuiciar los delitos asociados con la corrupción y la actividad criminal organizada<sup>58</sup>. La Corte Nacional de Justicia creó la Unidad Judicial y el Tribunal de Garantías Penales Especializados, dedicados a abordar delitos relacionados con la corrupción y el crimen organizado. Estos tribunales especializados tienen jurisdicción a nivel nacional y están ubicados en la ciudad de Quito.

Por su parte, el Consejo de la Judicatura ha implementado programas de formación y ética dirigidos a jueces, fiscales y otros

---

<sup>58</sup> Observatorio Judicial.

actores judiciales para promover la integridad en sus decisiones. Se han establecido mecanismos internos de control y supervisión para prevenir la corrupción y garantizar la responsabilidad de los funcionarios judiciales. Asimismo, se ha incentivado la participación activa de la sociedad civil en la supervisión del sistema judicial, con el objetivo de identificar y denunciar casos de corrupción.<sup>59</sup>

### **Marco legal y normativo para la lucha contra la corrupción en el sistema judicial del Ecuador**

El marco legal y normativo en Ecuador, en lo que respecta a la lucha contra la corrupción en el sistema judicial, se sustenta en diversos instrumentos jurídicos, incluyendo la Constitución de la República del Ecuador. La Constitución es el documento fundamental que establece los principios, derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos,

así como la estructura y funcionamiento del Estado ecuatoriano.

La Constitución ecuatoriana de 2008, en su Artículo 190, establece la creación del Consejo de la Judicatura como un organismo autónomo encargado de garantizar la independencia, transparencia, eficacia y eficiencia de la función judicial. Este Consejo, cuya composición y atribuciones están detalladas en la propia Constitución y en la ley orgánica respectiva, desempeña un papel crucial en la promoción de la integridad y la lucha contra la corrupción en el sistema judicial.

Además, la Constitución de 2008 establece los principios fundamentales que rigen la administración de justicia en Ecuador, como la independencia judicial, la imparcialidad, la transparencia, la eficiencia y la participación ciudadana. Estos principios son fundamentales para

---

<sup>59</sup> Carvajal Martínez et al., «La corrupción y la corrupción judicial».

garantizar un sistema judicial justo, equitativo y libre de corrupción.

En este sentido, la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial, promulgada en el marco de la Constitución de 2008, se enmarca dentro de los principios y valores establecidos en la Carta Magna. Esta ley, además de establecer disposiciones específicas para fortalecer la integridad y la transparencia en el ejercicio de la función judicial, busca garantizar el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos y promover la participación activa de la sociedad en el control y vigilancia del sistema judicial.

Entre las disposiciones más relevantes de la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial se encuentran las siguientes:

Creación de mecanismos de control interno: La ley establece la creación de instancias de control interno dentro del sistema judicial, encargadas de supervisar el

cumplimiento de las normas éticas y disciplinarias por parte de los jueces, fiscales y demás funcionarios judiciales. Estos mecanismos de control tienen la función de prevenir y detectar posibles casos de corrupción, así como de investigar y sancionar a los responsables en caso de que se cometan infracciones.

Fortalecimiento de la independencia judicial: La ley busca garantizar la independencia y la imparcialidad de los jueces en el ejercicio de sus funciones. Para ello, establece disposiciones destinadas a proteger a los jueces de cualquier tipo de presión o interferencia externa que pueda afectar su capacidad para administrar justicia de manera objetiva y equitativa. Asimismo, se prevén mecanismos de protección para los jueces que sean objeto de amenazas o intimidaciones debido a su labor.

Transparencia y rendición de cuentas: La ley promueve la transparencia en el funcionamiento del sistema judicial, estableciendo la



obligación de los jueces y demás funcionarios judiciales de rendir cuentas sobre su gestión y sus decisiones. Se establecen mecanismos de publicidad de la información relacionada con los procesos judiciales, así como de acceso a la justicia por parte de la ciudadanía. Además, se prevén sanciones para aquellos funcionarios que incurran en actos de corrupción o violen las normas éticas y disciplinarias establecidas.

Capacitación y formación ética: La ley contempla la implementación de programas de capacitación y formación ética dirigidos a los jueces, fiscales y demás funcionarios judiciales. Estos programas tienen como objetivo sensibilizar a los profesionales del derecho sobre la importancia de mantener altos estándares éticos en el ejercicio de su labor, así como de actualizar sus conocimientos en materia jurídica y normativa.

De esta forma, el marco legal y normativo en Ecuador, se complementa con los principios y

valores establecidos en la Constitución de la República, constituye un instrumento clave en la lucha contra la corrupción en el sistema judicial. La Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial, en consonancia con la Constitución, establece disposiciones específicas para fortalecer la integridad, la transparencia y la eficiencia en el ejercicio de la función judicial, así como para garantizar el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Sin embargo, su efectividad dependerá en gran medida de su aplicación efectiva y de la voluntad política para combatir la corrupción en todas sus formas.

### **Instituciones que intervienen en la lucha contra la corrupción en el sistema judicial del Ecuador**

El combate a la corrupción en el sistema judicial ecuatoriano es una tarea compleja y multifacética que requiere la participación activa de diversas instituciones y la implementación de mecanismos efectivos de control y supervisión. En

este sentido, Ecuador ha establecido instituciones clave con la responsabilidad de investigar, prevenir y sancionar los actos de corrupción en todas las esferas gubernamentales, incluyendo el poder judicial. Entre estas instituciones se destacan la Fiscalía General del Estado, la Defensoría del Pueblo y el Consejo de la Judicatura.

La Fiscalía General del Estado juega un papel fundamental en la lucha contra la corrupción al ser la encargada de dirigir y coordinar las investigaciones penales en el país. Esta institución cuenta con fiscales especializados en delitos de corrupción que se encargan de investigar y procesar los casos relacionados con la malversación de fondos públicos, el cohecho, la extorsión y otros actos corruptos. Además, la Fiscalía cuenta con unidades especializadas en el análisis financiero y la recolección de pruebas, lo que le permite llevar a cabo investigaciones complejas y profundas.

Por otro lado, la Defensoría del Pueblo tiene como función principal la protección de los derechos humanos y la defensa de los intereses de la ciudadanía. En el contexto de la lucha contra la corrupción, esta institución actúa como un órgano de control externo que vela por el cumplimiento de la legalidad y la transparencia en la administración pública. La Defensoría del Pueblo puede recibir denuncias y quejas de ciudadanos sobre posibles actos de corrupción en el sistema judicial, y tiene la facultad de investigar y emitir informes sobre estas irregularidades.

Por su parte, el Consejo de la Judicatura es el órgano encargado de la administración y el gobierno del sistema judicial en Ecuador. Este organismo tiene la responsabilidad de velar por la independencia, transparencia y eficiencia del poder judicial, así como de garantizar el acceso a la justicia y la protección de los derechos de los ciudadanos. En el contexto de la lucha contra la corrupción, el Consejo de la

Judicatura tiene la facultad de investigar y sancionar a los jueces y demás funcionarios judiciales que incurran en actos de corrupción o violen las normas éticas y disciplinarias establecidas.

Además de estas instituciones clave, se han implementado mecanismos de control interno y externo para supervisar el desempeño ético y transparente de los funcionarios judiciales. Estos mecanismos incluyen la creación de unidades de control interno dentro de las instituciones judiciales, así como la realización de auditorías externas y evaluaciones periódicas del desempeño de los jueces y fiscales.

Asimismo, se han desarrollado programas de formación y capacitación en ética judicial dirigidos a jueces, fiscales y otros actores judiciales. Estos programas tienen como objetivo sensibilizar a los profesionales del derecho sobre la importancia de mantener altos estándares de conducta y evitar la corrupción en el ejercicio de sus

funciones. Se imparten cursos y talleres sobre temas como la ética profesional, la imparcialidad judicial, el combate a la corrupción y la protección de los derechos humanos, con el fin de fortalecer la integridad y la transparencia en el sistema judicial.

Lo anterior nos muestra que Ecuador ha implementado un conjunto de medidas y acciones destinadas a combatir la corrupción en el sistema judicial. La creación de instituciones clave como la Fiscalía General del Estado, la Defensoría del Pueblo y el Consejo de la Judicatura, así como la implementación de mecanismos de control interno y externo y programas de formación en ética judicial, son pasos importantes en esta dirección. Sin embargo, aún queda mucho por hacer para fortalecer la integridad y la transparencia en el sistema judicial y garantizar la justicia y el Estado de Derecho en el país.

## **9.2. Crimen Organizado y corrupción en el sistema judicial del Ecuador.**

En las últimas décadas, la criminalidad en América Latina y el Caribe ha experimentado un notable aumento, en gran parte debido a la marcada desigualdad que caracteriza a la región y a la falta de enfoque social por parte de las respuestas estatales. Sin embargo, es esencial distinguir entre el "delito común", como el robo de una cartera en un espacio público, y el "crimen organizado", que implica una estructura con amplio poder económico, logística sofisticada y capacidades superiores para la planificación y ejecución de actividades ilícitas, como el narcotráfico. Estos últimos delitos han superado la capacidad de respuesta estatal y representan una amenaza directa para la gobernabilidad.<sup>60</sup>

Los desafíos que enfrentan los Estados para combatir el crimen organizado se vuelven aún más complejos cuando estos delitos adquieren dimensiones internacionales, lo que lleva a cuestionar conceptos tradicionales como soberanía y seguridad nacional. En este contexto, las fronteras y la cooperación internacional adquieren un papel crucial. Además, la adaptabilidad del crimen organizado transnacional es un factor a considerar, ya que opera en un contexto de globalización, aprovechando nuevas tecnologías y permeando actividades económicas legítimas.<sup>61</sup>

El crimen organizado transnacional (COT) es una categoría amplia, compleja y dinámica debido a la multiplicidad de

---

<sup>60</sup> Peñafiel Valencia, Diego y Aguirre Avilés, Johana, «Crimen organizado y corrupción en Ecuador: desafíos para la formación continua de las y los jueces especializados nuevos jueces especializados».

<sup>61</sup> Observatorio Judicial, «LA JUSTICIA EN ECUADOR ¿Cuenta la Función Judicial con suficientes recursos para cumplir con su labor?»

formas que adopta y a los diversos actores involucrados. No se limita únicamente a grupos delictivos y empresas, sino que también implica la participación del propio Estado, a menudo vinculado a la criminalidad a través de la corrupción.

Aunque el tráfico de drogas es la actividad más visible y lucrativa del COT, su diversificación incluye delitos como el tráfico de armas, la trata y tráfico de personas, el comercio ilegal de flora y fauna, el lavado de activos, los delitos cibernéticos y los delitos contra la administración pública, entre otros.

Los carteles de la droga colombianos y mexicanos han surgido como las organizaciones criminales transnacionales más prominentes, extendiendo su influencia a prácticamente todos los países de la región. A estas organizaciones se añaden las pandillas centroamericanas, como la Mara Salvatrucha, cuyas actividades delictivas también han adquirido un alcance transnacional.

La Resolución 58/4 de la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención contra la corrupción el 31 de octubre de 2003. En este documento se reconoce la seria amenaza que representa la corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades, ya que afectan las instituciones y valores fundamentales de la democracia, la ética y la justicia, y compromete el desarrollo sostenible y el imperio de la ley. Se destaca la conexión entre la corrupción y otras formas de delincuencia, especialmente la delincuencia organizada y la delincuencia económica, calificándola como un fenómeno transnacional que amenaza la estabilidad política y el desarrollo sostenible de los Estados. Además, se señala que el enriquecimiento personal ilícito puede tener efectos especialmente perjudiciales para las instituciones democráticas, las economías nacionales y el imperio de la ley.

En el caso de Ecuador, su ubicación geográfica desempeña un papel crucial en el panorama del narcotráfico, ya que se encuentra situado entre dos de los mayores productores de cocaína del mundo: Colombia y Perú. Además, su extensa frontera marítima en el océano Pacífico proporciona rutas estratégicas para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa. En este sentido, los estudios contemporáneos ya no consideran a Ecuador simplemente como un país de tránsito, sino como un actor fundamental en la cadena de valor del narcotráfico.

Durante la última década, ha sido evidente un aumento en la presencia de organizaciones criminales transnacionales en Ecuador, con un énfasis particular en los carteles mexicanos. Estos grupos, asociados con organizaciones delictivas

En Ecuador, la interacción entre el crimen organizado y la corrupción en

locales, compiten por el control de territorios y rutas destinadas al tráfico de drogas. Los trágicos eventos de las masacres carcelarias ocurridas en 2021 y 2022, así como el alarmante incremento de muertes violentas a nivel nacional, están directamente vinculados a este fenómeno. Además, la corrupción en la administración pública, el sistema penitenciario y el sistema judicial también juega un papel crucial en la facilitación de las actividades delictivas de estas organizaciones.<sup>62</sup>

Ahora bien, el crimen organizado y la corrupción representan dos de los desafíos más graves y entrelazados que enfrenta el sistema judicial ecuatoriano. Estas dos fuerzas, aunque distintas en su naturaleza, están profundamente interconectadas y han permeado cada vez más las estructuras gubernamentales y legales del país.

el sistema judicial ha alcanzado niveles preocupantes que erosionan

---

<sup>62</sup> Organización de las Naciones Unidas, «CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN.»

la confianza en las instituciones democráticas. La presencia y la influencia de los carteles de la droga, así como otras organizaciones criminales, han permeado profundamente las estructuras gubernamentales y legales del país, creando un entorno propicio para la corrupción y la impunidad.

Los carteles de la droga, tanto colombianos como mexicanos, han establecido operaciones en Ecuador debido a su ubicación geográfica estratégica y su infraestructura logística favorable para el narcotráfico.

La cercanía con los principales países productores de cocaína, como Colombia y Perú, ha convertido a Ecuador en un corredor crucial para el transporte de drogas hacia los mercados internacionales, especialmente hacia Estados Unidos y Europa. Esta situación ha generado una demanda constante de complicidad y apoyo por parte de funcionarios públicos corruptos dentro del sistema judicial ecuatoriano.

Estas organizaciones criminales han utilizado la corrupción como una herramienta para asegurar su impunidad y proteger sus operaciones ilícitas. Sobornos, amenazas y extorsiones son solo algunas de las tácticas empleadas para cooptar a jueces, fiscales, abogados y otros funcionarios judiciales. A través de estas prácticas corruptas, los criminales buscan garantizar veredictos favorables, obtener información privilegiada sobre investigaciones en curso y evitar la aplicación efectiva de la ley en su contra.

Este fenómeno de corrupción en el sistema judicial ecuatoriano ha creado un peligroso ciclo vicioso en el que la corrupción facilita el crimen organizado, y a su vez, el crimen organizado corrompe aún más el sistema judicial.

Por consiguiente, la corrupción en el sistema judicial no solo beneficia al crimen organizado, sino que también perjudica a la sociedad en su conjunto. La falta de imparcialidad y transparencia en los procesos

judiciales debilita la protección de los derechos humanos y fomenta la impunidad, lo que a su vez alimenta la violencia y la inseguridad ciudadana.

Por lo tanto, la lucha contra el crimen organizado y la corrupción en el sistema judicial ecuatoriano requiere un compromiso firme por parte del gobierno, la sociedad civil y la comunidad internacional. Solo a través de un esfuerzo colectivo y sostenido se podrá restaurar la integridad y la eficacia del sistema judicial, garantizando la protección de los derechos humanos y la justicia para todos los ciudadanos ecuatorianos.

De acuerdo a datos recientes, Ecuador ocupa el tercer lugar en América Latina en términos de índices de criminalidad debido a la creciente influencia del crimen organizado. En un lapso de tres años, el país ha sido testigo de una escalada de violencia, marcada por

atentados terroristas, atrocidades como cuerpos mutilados exhibidos en puentes, extorsiones, secuestros y ataques dirigidos a instituciones públicas. Sin embargo, para que el crimen organizado alcance tal poder, se requiere más que simples armas; se necesita la connivencia de un Estado que permita su proliferación.<sup>63</sup>

Las evidencias de esta connivencia son variadas: un sistema judicial que deja impunes miles de delitos, detenciones de policías y militares en posesión de armas y drogas, y un sistema penitenciario donde se descubren armamento y dinero ocultos en los techos de las oficinas. Además, hay territorios donde la presencia estatal es prácticamente nula, cediendo el control a grupos criminales que imponen su propia ley.

Los integrantes de estas organizaciones criminales no muestran escrúpulos al adaptarse a

---

<sup>63</sup> Austin, Anastasia, «Cómo las élites criminales manipulan las leyes para eludir la justicia en Ecuador».



cualquier herramienta, garantía o figura legal disponible para su beneficio. Han logrado infiltrarse profundamente en el sistema judicial, asegurándose jueces "a la carta" para obtener favores mediante la distorsión del sistema de justicia.

Cuando el crimen organizado logra infiltrarse de tal manera en el sistema judicial, ya sea mediante amenazas o corrupción, el resultado es la creación de un sistema de justicia paralelo. Esto implica que mientras existen leyes que rigen a todos los ciudadanos, también existe un sistema judicial paralelo controlado por criminales, donde ciertos jueces aplican la ley de manera sesgada, manipulando su interpretación y aplicación para favorecer los intereses del crimen organizado. Aunque estas leyes son las mismas, su uso distorsionado por parte del crimen organizado está completamente fuera del marco legal establecido.

La situación descrita es alarmante y establece una serie de desafíos significativos para el país. La

realidad de un sistema de justicia paralelo, donde los intereses del crimen organizado se antepone a la justicia y al Estado de derecho, es una clara manifestación de la debilidad institucional y la corrupción sistémica que prevalecen en la sociedad.

Esta realidad plantea interrogantes sobre la efectividad y la legitimidad del sistema judicial ecuatoriano. ¿Cómo puede un sistema de justicia operar de manera equitativa y proteger los derechos de los ciudadanos cuando está infiltrado por intereses corruptos y criminales? ¿Qué medidas pueden tomarse para restaurar la confianza en las instituciones judiciales y garantizar que la ley se aplique de manera justa y transparente para todos los ciudadanos?

Todo esto ha traído un conjunto de consecuencias devastadoras para la sociedad ecuatoriana:

### **Impunidad:**

La infiltración del crimen organizado en el sistema judicial

resulta en la impunidad generalizada para los delincuentes, lo que significa que muchos crímenes quedan sin castigo.

En Ecuador, la infiltración del crimen organizado en el sistema judicial ha resultado en una impunidad generalizada para los delincuentes vinculados a actividades ilícitas. Esta impunidad se manifiesta de diversas formas:

**Falta de enjuiciamiento:** Muchos casos de crimen organizado, como el narcotráfico, la extorsión y el lavado de dinero, no son enjuiciados de manera efectiva. Esto se debe a la corrupción dentro del sistema judicial, que permite que los perpetradores eviten el escrutinio legal y las consecuencias de sus acciones.

**Manipulación de procesos legales:** Los criminales organizados a menudo tienen la capacidad de manipular el sistema judicial a su favor, ya sea mediante sobornos a funcionarios, intimidación de testigos o influencia sobre jueces y fiscales.

Esto resulta en la distorsión de los procesos legales y en la protección de los delincuentes.

**Falta de recursos y capacitación:** El sistema judicial en Ecuador enfrenta limitaciones significativas en términos de recursos humanos, financieros y tecnológicos. Esto dificulta la investigación y enjuiciamiento efectivo de casos de crimen organizado, lo que puede resultar en la liberación de sospechosos debido a la falta de pruebas o procedimientos legales deficientes.

**Ineficiencia y retrasos procesales:** Los casos relacionados con el crimen organizado a menudo experimentan retrasos procesales prolongados debido a la falta de capacidad del sistema judicial para manejarlos de manera oportuna. Esto puede llevar a la prescripción de delitos y a la liberación de sospechosos antes de que se pueda hacer justicia.

## **Debilitamiento del Estado de Derecho:**

La corrupción en el sistema judicial debilita el estado de derecho al permitir que el crimen organizado opere fuera de los límites legales y subvierta la autoridad del Estado. Esto crea un ambiente de inseguridad jurídica y erosionan la confianza en las instituciones democráticas.

En Ecuador este debilitamiento se manifiesta en varios aspectos:

**Falta de aplicación de la ley:** La corrupción dentro del sistema judicial permite que los criminales organizados eludan la aplicación efectiva de la ley. Esto significa que pueden llevar a cabo actividades ilícitas sin temor a ser sancionados, lo que deteriora la autoridad del Estado para hacer cumplir la ley y mantener el orden público.

**Inseguridad jurídica:** La presencia de corrupción en el sistema judicial crea un clima de inseguridad jurídica, ya que las leyes y regulaciones pueden ser aplicadas de manera

arbitraria o sesgada. Esto genera incertidumbre entre los ciudadanos y las empresas, lo que dificulta la planificación a largo plazo y la inversión en el país.

**Erosión de la confianza pública:** La corrupción en el sistema judicial mina la confianza de la población en las instituciones democráticas y en el Estado de Derecho en su conjunto. Cuando los ciudadanos perciben que el sistema judicial no es imparcial ni independiente, pueden perder la fe en la capacidad del gobierno para proteger sus derechos y garantizar la justicia para todos.

**Subversión de la autoridad estatal:** La corrupción en el sistema judicial permite que el crimen organizado ejerza una influencia indebida sobre las instituciones del Estado. Esto puede llevar a una pérdida de control sobre el territorio y a la creación de "zonas de no derecho" donde las leyes del Estado no se aplican de manera efectiva.

### **Violencia y desestabilización:**

El crimen organizado está asociado con altos niveles de violencia, que van desde asesinatos y secuestros hasta extorsiones y amenazas. Esta violencia tiene un impacto devastador en la sociedad, generando miedo y desestabilizando comunidades enteras.

En el contexto ecuatoriano el crimen organizado está estrechamente asociado con altos niveles de violencia que abarcan una variedad de delitos, incluidos asesinatos, secuestros, extorsiones y amenazas. Esta violencia tiene un impacto devastador en la sociedad, generando un clima de miedo y desestabilizando comunidades enteras de varias maneras:

**Aumento de los índices de homicidios:** La presencia del crimen organizado suele ir acompañada de un aumento en los índices de homicidios. Las disputas territoriales entre bandas rivales, así como las represalias contra aquellos que se resisten a su influencia, pueden

desencadenar ciclos de violencia que afectan a toda la población.

**Secuestros y extorsiones:** Los grupos criminales organizados a menudo recurren al secuestro y la extorsión como tácticas para ejercer control sobre la población y obtener ganancias financieras. Estos delitos no solo causan un sufrimiento inmenso a las víctimas y sus familias, sino que también generan un clima de temor generalizado en la sociedad.

**Amenazas e intimidación:** La violencia física no es la única forma en que el crimen organizado ejerce su poder. Las amenazas y la intimidación son herramientas comunes utilizadas para silenciar a aquellos que se oponen a sus actividades criminales o que intentan denunciar sus acciones ante las autoridades.

**Desplazamiento forzado y fragmentación comunitaria:** La violencia generada por el crimen organizado puede llevar al desplazamiento forzado de

comunidades enteras, que se ven obligadas a abandonar sus hogares en busca de seguridad. Esto puede dar lugar a una fragmentación comunitaria y a la pérdida de cohesión social, lo que debilita aún más el tejido social de la sociedad.

### **Desconfianza en las instituciones:**

Esto se manifiesta en Ecuador de la siguiente manera:

**Pérdida de fe en la justicia:** Cuando los ciudadanos perciben que el sistema judicial está corrupto y que los criminales organizados operan con impunidad, pierden la confianza en la capacidad del Estado para garantizar la justicia y proteger sus derechos. Esto puede llevar a una pérdida de fe en las instituciones judiciales y a una creencia generalizada de que el sistema está sesgado a favor de los poderosos y los criminales.

**Desconfianza en el gobierno:** La corrupción en el sistema judicial y la falta de acción efectiva contra el crimen organizado pueden minar la

confianza en el gobierno en su conjunto. Los ciudadanos pueden percibir que las autoridades no están haciendo lo suficiente para abordar estos problemas y que pueden estar involucradas en ellos de alguna manera. Esto puede llevar a una creciente desconfianza en las instituciones gubernamentales y en los líderes políticos.

**Alienación de la sociedad civil:** La percepción de que las instituciones del Estado no están cumpliendo con su deber de proteger y servir a la población puede llevar a una mayor alienación de la sociedad civil. Los ciudadanos pueden sentirse desilusionados y desconectados de las instituciones democráticas y pueden ser menos propensos a participar en la vida política y cívica del país.

Todo esto ha traído consecuencias negativas para la estabilidad y la gobernabilidad del país, ya que se ha alimentado la desafección y el descontento entre la población y dificultar la construcción de una sociedad justa y democrática.

### **9.3. Justicia Ecuatoriana: Una mirada a los casos de crimen organizado y de corrupción "Metástasis" y "Purga".**

En este apartado hemos querido mostrar como en muchas ocasiones la corrupción contamina nuestro sistema judicial, generando grandes consecuencias para la sociedad ecuatoriana.

Los informes y estudios realizados sobre el tema han arrojado luz sobre la gravedad de la situación. Por ejemplo, el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos en 2018 resaltó la debilidad del poder judicial ecuatoriano y la falta de capacidad de las agencias gubernamentales de control para investigar y sancionar los actos de corrupción.<sup>64</sup> Esta situación ha contribuido a la existencia de un ambiente de impunidad y corrupción en el sistema judicial del país.

Otras investigaciones académicas han profundizado en la complejidad del fenómeno de la corrupción judicial en Ecuador, identificando diversas causas y manifestaciones, así como proponiendo recomendaciones para combatirla. Entre estas recomendaciones se encuentran el fortalecimiento de la independencia judicial, la mejora de la transparencia y la rendición de cuentas, la promoción de la participación ciudadana en la supervisión del sistema judicial y la implementación de mecanismos efectivos de sanción para los actos de corrupción.<sup>65</sup>

En respuesta a esta problemática, el gobierno ecuatoriano ha tomado medidas para enfrentar la corrupción en el sistema judicial. Por ejemplo, se han establecido instituciones

---

<sup>64</sup> Villacrés et al., «Luces y sombras en la justicia ecuatoriana. Explorando la corrupción en la actualidad».

<sup>65</sup> Macías y Bermúdez, «LA CORRUPCIÓN EN EL SISTEMA JUDICIAL. SITUACIONES DEL CONTEXTO ECUATORIANO».

clave como la Fiscalía General del Estado y la Defensoría del Pueblo, encargadas de investigar y sancionar los actos de corrupción en todas las esferas gubernamentales, incluyendo el poder judicial. Asimismo, se han implementado reformas legales, como la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial, que buscan fortalecer la capacidad del sistema judicial para investigar y enjuiciar los delitos de corrupción y crimen organizado.<sup>66</sup>

Otro aspecto importante ha sido el fortalecimiento de los mecanismos de control interno y la promoción de la ética y la integridad entre los funcionarios judiciales. Programas de formación y capacitación en ética judicial se han implementado para sensibilizar a los jueces, fiscales y otros actores judiciales sobre la importancia de mantener altos

estándares de conducta y evitar la corrupción.<sup>67</sup>

A pesar de estos esfuerzos, la lucha contra la corrupción en el sistema judicial ecuatoriano sigue siendo un desafío considerable. La persistencia de casos de corrupción y la percepción de impunidad entre la población reflejan la necesidad de continuar fortaleciendo las medidas de prevención, detección y sanción de los actos de corrupción en el ámbito judicial.

### **Caso Metástasis**

Hacemos mención a uno de los casos resientes donde el crimen organizado se infiltró dentro de la justicia del Ecuador.

Uno de estos renombrados casos ha sido el “Metástasis”, un hecho que se ha configurado como un hito en la historia judicial de Ecuador, evidenciando una compleja red de corrupción y vínculos con el

---

<sup>66</sup> Villacrés et al., «Luces y sombras en la justicia ecuatoriana. Explorando la corrupción en la actualidad».

<sup>67</sup> «Delitos contra la eficiencia de la administración pública ecuatoriana. Caso de estudio: Morona Santiago | Apuntes Contables».

narcotráfico que han permeado las instituciones del país. La operación, liderada por la Fiscalía General del Estado y desarrollada en diciembre de 2023, resultó en la detención de numerosos funcionarios públicos y operadores de justicia sospechosos de participar en actividades ilícitas.<sup>68</sup>

El origen del caso se remonta a la muerte de un narcotraficante en octubre de 2022, cuyas investigaciones revelaron conexiones corruptas con diversas figuras del ámbito público y judicial. El análisis de la información obtenida de los dispositivos electrónicos del narcotraficante proporcionó pruebas contundentes de la corrupción que había infiltrado las instituciones del país, lo que llevó a la Fiscalía a iniciar una investigación a gran escala.

La acción de la Fiscalía recibió el respaldo tanto de la ciudadanía como de la Asamblea Nacional, destacando la necesidad de abordar

la corrupción y el crimen organizado en Ecuador. La vinculación entre el crimen organizado y altos funcionarios públicos subraya la urgencia de fortalecer las instituciones judiciales y combatir la impunidad en todas sus formas.

El caso Metástasis también resalta la importancia de la cooperación entre diferentes entidades del Estado para hacer frente al crimen organizado y la corrupción. Es esencial establecer mecanismos de coordinación efectivos entre la Fiscalía, la Policía Nacional y otras instituciones encargadas de hacer cumplir la ley para garantizar el éxito de las investigaciones y el enjuiciamiento de los responsables.

Además, el caso subraya la necesidad de una mayor transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del poder público. Los ciudadanos ecuatorianos deben poder confiar en la imparcialidad y

---

<sup>68</sup> «Casos Encuentro, Metástasis y Purga: ¿afectarán electoralmente a CREO, Revolución Ciudadana y PSC? | Política | Noticias | El Universo».



objetividad de las instituciones judiciales, sin influencias corruptas o criminales. Esto requiere una vigilancia constante por parte de la sociedad civil y los medios de comunicación, así como la implementación de medidas efectivas para prevenir y sancionar la corrupción en todas sus formas.

Por lo que podemos argumentar, que estos acontecimientos representan un desafío importante no solo para las autoridades judiciales, sino también para el presidente de la República y todas las instituciones del Estado ecuatoriano. El fortalecimiento de la Fiscalía y la Policía Nacional es crucial para abordar eficazmente la infiltración del crimen organizado en las estructuras gubernamentales y judiciales.

Es fundamental que la ciudadanía comprenda que el crimen organizado no se limita a una sola persona o grupo, sino que involucra redes complejas y sofisticadas. La investigación llevada a cabo por la Fiscalía es solo el primer paso para

desentrañar todas las conexiones y actividades ilícitas que subyacen en este entramado criminal. Es necesario brindar un respaldo sólido a las autoridades para que puedan continuar con sus indagaciones y enfrentar cualquier eventualidad que pueda surgir, incluida una posible escalada de violencia.

El reconocimiento público de la infiltración del crimen organizado en las instituciones públicas es esencial para implementar estrategias efectivas de combate. La transparencia y la rendición de cuentas deben ser promovidas en todos los niveles del gobierno, con la colaboración de organismos de control como la Contraloría General del Estado. Se deben establecer mecanismos para que los ciudadanos puedan denunciar conductas sospechosas sin temor a represalias, lo que contribuirá a fortalecer la integridad y la

legitimidad de las instituciones democráticas.<sup>69</sup>

La investigación de la Fiscalía también ha revelado posibles vínculos entre el narcotráfico y gobernantes locales, lo que subraya la importancia de la colaboración entre los diferentes niveles de gobierno en la lucha contra el crimen organizado. En caso de que se determinen responsabilidades, es fundamental que se aplique la ley de manera rigurosa y se respeten los procesos establecidos en el marco legal.

Por otro lado, este caso debe servir como una llamada de atención para la ciudadanía en la elección de sus representantes y líderes. Es necesario realizar una selección prudente y exhaustiva de aquellos que ocuparán cargos relevantes en el gobierno y la administración pública. La integridad y la idoneidad de los funcionarios son fundamentales para garantizar la

legitimidad y eficacia de las instituciones democráticas.

Ante tales hechos, podemos inferir que el caso Metástasis es un ejemplo contundente de los desafíos que enfrenta Ecuador en su lucha contra la corrupción, especialmente en el ámbito de las instituciones públicas y el sistema judicial. La corrupción no solo compromete la integridad y la transparencia del sistema judicial, sino que también erosiona la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas y en el estado de derecho. En este análisis, exploraremos cómo este caso revela la naturaleza sistémica de la corrupción y la importancia de combatirla para preservar la igualdad ante la ley y la efectividad de la administración de justicia.

La corrupción en el sistema judicial es una preocupación grave en cualquier sociedad. Cuando los funcionarios públicos, incluidos jueces, fiscales y abogados, están involucrados en actividades

---

<sup>69</sup> «El caso Metástasis destapa el cáncer de la corrupción en Ecuador».

corruptas, se compromete la imparcialidad y la objetividad del sistema judicial. La corrupción puede manifestarse de diversas formas, como sobornos, manipulación de casos, tráfico de influencias y nepotismo. En el caso de Metástasis, se revela cómo estas prácticas corruptas han permeado las más altas esferas del poder judicial y han minado su capacidad para administrar justicia de manera imparcial y equitativa.

Uno de los aspectos más preocupantes del caso Metástasis es la implicación de altos funcionarios judiciales, como jueces y secretarios de diferentes provincias, en actividades relacionadas con el narcotráfico. Estos individuos, cuya responsabilidad es garantizar la aplicación imparcial de la ley, están siendo acusados de colaborar con organizaciones criminales para obtener beneficios personales. Esta flagrante violación de la ética judicial no solo compromete la integridad del sistema judicial, sino que también pone en peligro la seguridad y el

bienestar de la sociedad en su conjunto.

La corrupción en el sistema judicial también tiene un impacto directo en la confianza pública en las instituciones democráticas. Cuando los ciudadanos perciben que el sistema judicial está sesgado o es injusto, es probable que pierdan la fe en la capacidad del gobierno para proteger sus derechos y garantizar la igualdad ante la ley. Esta falta de confianza puede afectar la legitimidad del sistema político en su conjunto y alimentar la desafección y el descontento social.

El combate contra la corrupción en el sistema judicial es fundamental para preservar la igualdad ante la ley y la efectividad de la administración de justicia. Sin embargo, este esfuerzo enfrenta numerosos obstáculos, incluida la resistencia de aquellos que se benefician del status quo corrupto y la falta de recursos y capacidades para investigar y procesar casos de corrupción de manera efectiva. Además, la corrupción en el sistema judicial

puede estar arraigada en prácticas y normas culturales que normalizan la impunidad y el favoritismo.

Para abordar de manera efectiva la corrupción en el sistema judicial, es necesario implementar una serie de medidas integrales. En primer lugar, se deben fortalecer los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas para garantizar que los funcionarios judiciales sean responsables de sus acciones. Esto puede incluir la creación de órganos independientes de control y la implementación de sistemas de monitoreo y evaluación transparentes.

Se deben establecer estrictas normas de conducta ética y profesional para los funcionarios judiciales, junto con programas de capacitación y sensibilización sobre la importancia de la integridad y la imparcialidad en el ejercicio de la justicia. Es fundamental promover una cultura de transparencia y responsabilidad en el sistema judicial, donde la corrupción sea

rechazada y castigada en todas sus formas.

Asimismo, es necesario fortalecer la cooperación internacional en la lucha contra la corrupción, especialmente en casos que involucran actividades transnacionales como el narcotráfico. La colaboración entre países en el intercambio de información y la extradición de sospechosos es esencial para llevar ante la justicia a los responsables de actos de corrupción y crimen organizado.

Es así como el combate contra la corrupción en el sistema judicial requiere un compromiso político firme y una voluntad colectiva de todos los actores involucrados, incluidos el gobierno, la sociedad civil y el sector privado. Solo a través de una acción coordinada y decidida se podrá erradicar la corrupción y restaurar la confianza en las instituciones democráticas y el estado de derecho. El caso Metástasis es un recordatorio poderoso de la urgente necesidad de

abordar este problema de manera integral y determinada.

En este contexto, es esencial considerar cómo la corrupción en el sistema judicial no solo afecta la integridad del poder judicial, sino que también tiene ramificaciones significativas en la sociedad en su conjunto. La corrupción debilita la confianza de los ciudadanos en el estado de derecho y en la capacidad del sistema judicial para proteger sus derechos y garantizar la justicia. Además, deteriora los esfuerzos para combatir la criminalidad y promover el desarrollo económico y social.

En el caso específico de Metástasis, la presunta complicidad de funcionarios judiciales con el narcotráfico plantea preocupaciones adicionales sobre la efectividad de la lucha contra el crimen organizado. Si los propios agentes encargados de administrar justicia están colaborando con organizaciones criminales, se debilita seriamente la capacidad del Estado para enfrentar este tipo de delitos. Esto no solo

pone en riesgo la seguridad pública, sino que también erosiona la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de protegerla.

Otro aspecto importante a considerar es el impacto económico de la corrupción en el sistema judicial. La corrupción puede obstaculizar la inversión y el desarrollo económico al crear un entorno empresarial poco transparente y poco confiable. Cuando las empresas no confían en la imparcialidad del sistema judicial, es menos probable que inviertan en el país y creen empleo. Además, la corrupción puede distorsionar la competencia en el mercado al favorecer a empresas que están dispuestas a pagar sobornos o influir en decisiones judiciales.

La presunta participación de funcionarios judiciales en actividades corruptas vinculadas al narcotráfico también plantea interrogantes sobre la integridad del proceso judicial. Si estos funcionarios están siendo sobornados o influenciados por

organizaciones criminales, es posible que se manipulen los resultados de los juicios o se den fallos injustos. Esto no solo influye en la confianza en el sistema judicial, sino que también afecta los derechos fundamentales de los ciudadanos a un juicio justo y equitativo.

En resumen, el caso Metástasis destaca la urgente necesidad de abordar la corrupción en el sistema judicial para preservar la integridad del estado de derecho y garantizar la igualdad ante la ley. La corrupción no solo compromete la imparcialidad y la eficacia del sistema judicial, sino que también tiene consecuencias devastadoras para la sociedad en su conjunto. Solo a través de un compromiso decidido y una acción colectiva se podrá erradicar este flagelo y promover una justicia verdaderamente equitativa y transparente.

### **El caso Purga:**

El caso Purga representa otro paso más en la lucha contra la

corrupción en Ecuador, especialmente en el sistema judicial y su intersección con la política y el narcotráfico. A través de este análisis, examinaremos detalladamente los elementos clave del caso, su impacto en la sociedad y las implicaciones legales y éticas que plantea.<sup>70</sup>

El surgimiento del caso Purga, que se desprende del caso Metástasis, revela una red compleja de corrupción que operaba desde las altas esferas de la política y la justicia en la provincia de Guayas. La fiscalía general ha destacado la naturaleza sistémica de esta corrupción, que habría permitido la impunidad de actividades delictivas, incluido el narcotráfico. Este reconocimiento subraya la gravedad del problema y la necesidad de abordarlo de manera integral.

El proceso judicial asociado al caso Purga ha sido caracterizado por una serie de eventos significativos que han captado la atención pública

---

<sup>70</sup> «Caso Purga: cómo un contrato de obras en Quito terminó enredado en la Corte de Guayas».

y generado un intenso escrutinio sobre el sistema judicial. La fase de instrucción fiscal, ha resultado en la emisión de órdenes de prisión preventiva para varios involucrados, incluidos funcionarios judiciales prominentes. Estas medidas destacan la seriedad con la que se está abordando el caso y la determinación de las autoridades para combatir la corrupción en todos los niveles.

Uno de los aspectos más controvertidos del caso Purga ha sido la negativa del juez a conceder prisión preventiva a ciertos implicados, quienes alegaron problemas de salud para evitar la detención. A pesar de presentar certificados médicos que respaldaban sus afirmaciones, la decisión del juez desestimó estos argumentos, lo que generó críticas y cuestionamientos sobre la imparcialidad del sistema judicial.

La audiencia de formulación de cargos y las decisiones judiciales

subsiguientes han sido momentos clave en el desarrollo de todo este proceso.

Se han debido tomar decisiones difíciles sobre la imposición de medidas cautelares, considerando la gravedad de las acusaciones y los derechos de los acusados. Estas decisiones han sido objeto de escrutinio público y han subrayado la importancia de garantizar un proceso judicial justo y transparente.<sup>71</sup>

El impacto del caso Purga se extiende más allá del ámbito judicial, afectando también a otras instituciones del Estado. El Consejo de la Judicatura ha tomado medidas para abordar la crisis en la Corte de Guayas, incluyendo el nombramiento de nuevos jueces y la retención de salarios para los magistrados detenidos. Estas acciones reflejan la gravedad del problema y la necesidad de reformas institucionales para restaurar la confianza en el sistema judicial.

---

<sup>71</sup> «Fiscalía General del Estado | Caso Purga».

Este análisis sugiere que la corrupción en el sistema judicial no es un fenómeno aislado, sino que está intrínsecamente relacionado con la influencia política y los intereses particulares. La percepción de que el poder político ha pervertido el curso de la justicia para proteger a ciertos individuos o grupos criminales afecta la confianza en las instituciones democráticas y en el estado de derecho.

### ***Reflexiones jurídicas de los casos de corrupción en el sistema judicial ecuatoriano***

Al reflexionar sobre los casos Metástasis y Purga y su impacto en el sistema judicial y la sociedad ecuatoriana en general, es crucial examinar en profundidad las causas subyacentes de la corrupción y las consecuencias que esto tiene a nivel institucional y social. Estos casos no solo exponen la corrupción arraigada dentro del sistema judicial, sino que también evidencian cómo esta corrupción afecta diversas esferas de la sociedad ecuatoriana, erosionando la confianza en las

El caso Purga, al exponer esta dinámica corrupta, destaca la urgente necesidad de reformas institucionales que fortalezcan la independencia y la imparcialidad del sistema judicial. También subraya la importancia de la rendición de cuentas y la transparencia en todas las ramas del gobierno para prevenir la interferencia indebida y garantizar la igualdad ante la ley.

instituciones democráticas y el estado de derecho.

Las causas de la corrupción en el sistema judicial son multifacéticas y complejas. En primer lugar, la falta de independencia judicial es un factor crucial que contribuye a la corrupción. Cuando los jueces y magistrados no son completamente independientes y están sujetos a influencias políticas o económicas, es más probable que tomen decisiones sesgadas en lugar de seguir el imperio de la ley de manera



imparcial. Esta falta de independencia puede ser explotada por actores externos, como políticos o grupos criminales, que buscan manipular el sistema judicial para sus propios fines.

En el contexto específico de Ecuador, factores como la influencia política indebida y la presencia de grupos criminales organizados agravan aún más el problema de la corrupción en el sistema judicial. La corrupción política puede llevar a la cooptación de funcionarios judiciales y a la interferencia en la administración de justicia, mientras que la presencia de grupos criminales puede ejercer presión sobre el sistema judicial para obtener decisiones favorables o manipular el curso de los procesos legales.

El caso Metástasis ejemplifica estas dinámicas, con la Fiscalía formulando cargos contra varios funcionarios públicos y operadores de justicia supuestamente vinculados al narcotráfico. Esta interacción entre el crimen organizado y el sistema judicial pone

de relieve la vulnerabilidad del sistema a la influencia externa y la corrupción, lo que afecta la capacidad del sistema para administrar justicia de manera imparcial y efectiva.

Por otro lado, el caso Purga revela cómo el poder político ha sido utilizado para manipular el sistema judicial y proteger los intereses individuales, en lugar de buscar la justicia y el cumplimiento de la ley. Esta interferencia política compromete la integridad del sistema judicial y debilita su capacidad para garantizar la igualdad ante la ley y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Las consecuencias de la corrupción en el sistema judicial ecuatoriano son profundas y generalizadas. En primer lugar, la falta de confianza en el sistema judicial influye en la legitimidad del estado de derecho y mina la estabilidad democrática. Cuando los ciudadanos perciben que el sistema judicial está corrupto o sesgado, es

menos probable que confíen en él para resolver disputas legales o buscar justicia, lo que puede generar descontento social y aumentar la polarización política.

Se observa como la corrupción en el sistema judicial tiene un impacto directo en la protección de los derechos humanos y civiles de los ciudadanos. Cuando los funcionarios judiciales son susceptibles a la influencia externa o al soborno, existe un riesgo real de que las personas no reciban un juicio justo y equitativo, lo que puede llevar a la violación de sus derechos fundamentales. Esto crea un clima de impunidad y desconfianza en las instituciones estatales, lo que impulsa más la cohesión social y la confianza en el gobierno.

Esta tiene consecuencias económicas negativas, al desincentivar la inversión extranjera y obstaculizar el desarrollo económico. Cuando los inversores perciben que el sistema judicial es corrupto o poco confiable, es menos

probable que estén dispuestos a invertir en el país, lo que puede obstaculizar el crecimiento económico y el desarrollo a largo plazo.

En resumen, los casos analizados son ejemplos vívidos de la corrupción arraigada en el sistema judicial ecuatoriano y su impacto devastador en la sociedad. Estos casos subrayan la necesidad urgente de fortalecer las instituciones democráticas, promover la transparencia y rendición de cuentas, y garantizar la independencia e imparcialidad del sistema judicial. Solo a través de esfuerzos concertados para combatir la corrupción y fortalecer el estado de derecho se podrá restaurar la confianza en las instituciones públicas y garantizar una sociedad justa y equitativa para todos los ciudadanos ecuatorianos.

## ***Puntos a favor y en contra de los casos Metástasis y Purga***

La reflexión sobre las deficiencias en la integridad institucional del sistema judicial ecuatoriano, en el contexto de los casos Metástasis y Purga, es un ejercicio complejo que requiere considerar una serie de puntos a favor y en contra. Estos casos, aunque lamentables, ofrecen una oportunidad para examinar críticamente el funcionamiento de las instituciones judiciales y explorar posibles soluciones para abordar las debilidades identificadas.

En este análisis, se destacarán tanto los aspectos positivos como negativos, con el objetivo de comprender mejor los desafíos que enfrenta el sistema judicial ecuatoriano y explorar vías para mejorar su integridad y eficacia.

### **Puntos a favor:**

Conciencia de los problemas: Uno de los aspectos positivos que surge de los casos Metástasis y Purga es que ponen de relieve los problemas de corrupción y falta de integridad en el sistema judicial ecuatoriano. Estos

casos han generado un debate público sobre la necesidad de abordar estos problemas de manera efectiva y han aumentado la conciencia sobre la importancia de fortalecer la independencia judicial y promover la transparencia y la rendición de cuentas en el sistema judicial.

Presión para la reforma: Los casos Metástasis y Purga han generado presión para llevar a cabo reformas en el sistema judicial ecuatoriano.

La revelación de casos de corrupción y falta de integridad ha provocado llamados de la sociedad civil y de organismos internacionales para implementar medidas destinadas a fortalecer la independencia judicial y mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en el sistema judicial.

Fortalecimiento de la institucionalidad: Si se abordan adecuadamente, los casos Metástasis y Purga podrían conducir

al fortalecimiento de la institucionalidad en Ecuador. La implementación de reformas destinadas a mejorar la independencia judicial y promover la transparencia y la rendición de cuentas en el sistema judicial podría contribuir a fortalecer las instituciones democráticas y el estado de derecho en el país.

**Puntos en contra:**

**Daño a la confianza pública:** La revelación de casos de corrupción y falta de integridad ha generado escepticismo y desconfianza entre la población, lo que podría afectar negativamente la percepción de la justicia y la legitimidad de las instituciones judiciales en el país.

**Impunidad y falta de responsabilidad:** Uno de los principales problemas asociados con los casos Metástasis y Purga es la impunidad y la falta de responsabilidad de los responsables de corrupción y falta de integridad en el sistema judicial. Si los responsables de estos actos no son

llevados ante la justicia y no se enfrentan a consecuencias adecuadas por sus acciones, esto podría perpetuar un ciclo de corrupción e impunidad en el sistema judicial ecuatoriano.

**Desafíos para la reforma:** Aunque los casos Metástasis y Purga han generado presión para llevar a cabo reformas en el sistema judicial ecuatoriano, también enfrentan desafíos significativos para su implementación. La resistencia institucional, la falta de recursos y la oposición política pueden obstaculizar los esfuerzos de reforma y dificultar la implementación de medidas destinadas a fortalecer la independencia judicial y promover la transparencia y la rendición de cuentas en el sistema judicial.

El análisis anterior representa una llamada de atención para el sistema judicial ecuatoriano y para la sociedad en su conjunto. Si bien estos casos han expuesto graves deficiencias en la integridad institucional del sistema judicial,

también ofrecen una oportunidad para abordar estos problemas de manera efectiva y promover reformas que fortalezcan las instituciones democráticas y el estado de derecho en Ecuador.

Para lograr esto, es necesario un compromiso firme por parte de todas las partes interesadas, incluidos el gobierno, la sociedad civil y la comunidad internacional, para trabajar juntos en la implementación

de medidas destinadas a fortalecer la independencia judicial, promover la transparencia y la rendición de cuentas, y combatir la corrupción en el sistema judicial ecuatoriano.

Si se abordan adecuadamente, estos casos podrían servir como catalizadores para el cambio positivo y contribuir a la construcción de un sistema judicial más justo, transparente e imparcial en Ecuador.

#### **9.4. ¿Deficiencias en la integridad institucional o ataques contra el poder judicial?: Un análisis desde diversos ángulos**

Al reflexionar sobre los casos Metástasis y Purga en el contexto del sistema judicial ecuatoriano, se revela una compleja red de desafíos y consideraciones que afectan no solo a las instituciones judiciales, sino también a la sociedad en su conjunto.

Estos casos han puesto de manifiesto problemas sistémicos arraigados que van más allá de incidentes aislados de corrupción, evidenciando debilidades

estructurales y culturales que requieren una atención seria y una acción decidida.

En primer lugar, es esencial reconocer la gravedad del impacto que la corrupción en el sistema judicial tiene en la sociedad.

Cuando los ciudadanos perciben que la justicia no es imparcial y que las decisiones judiciales pueden estar influenciadas por intereses políticos o económicos, se erosiona

la confianza en el estado de derecho y en las instituciones democráticas. Esto debilita los cimientos de una sociedad justa y equitativa, donde todos los individuos deben ser tratados igualmente ante la ley, independientemente de su estatus socioeconómico o político.

Los casos Metástasis y Purga han destacado cómo la corrupción puede infiltrarse en múltiples niveles del sistema judicial, desde jueces y fiscales hasta funcionarios de alto rango y políticos.

Esto sugiere una falta de controles efectivos y mecanismos de supervisión dentro del sistema, lo que permite que la corrupción prospere y se perpetúe. Además, revela una cultura de impunidad en la que aquellos que están en posiciones de poder pueden evadir la rendición de cuentas y el escrutinio público.

Otro aspecto importante a considerar es el papel de la política en la administración de justicia. Los casos Metástasis y Purga han

arrojado luz sobre la influencia indebida que algunos actores políticos pueden ejercer sobre el sistema judicial, comprometiendo su independencia y su capacidad para actuar de manera imparcial. Esto plantea interrogantes sobre la separación de poderes y la autonomía del poder judicial, pilares fundamentales de cualquier democracia saludable.

Sin embargo, es crucial no caer en la trampa de la generalización al evaluar la integridad del sistema judicial en su conjunto. Si bien los casos Metástasis y Purga han puesto de manifiesto graves problemas, no representan necesariamente la norma en todas las instancias judiciales.

Es importante reconocer y valorar el trabajo de los numerosos jueces, fiscales y funcionarios públicos que desempeñan sus funciones con integridad y profesionalismo todos los días, a menudo en circunstancias difíciles y con recursos limitados.

Además, es esencial abordar las causas subyacentes de la corrupción en el sistema judicial, que pueden incluir desde incentivos perversos y falta de transparencia hasta deficiencias en la capacitación y la supervisión. Esto requiere un enfoque integral que aborde tanto los aspectos institucionales como culturales de la corrupción, y que promueva una cultura de ética y responsabilidad en todas las áreas del sistema judicial.

En cuanto a las opiniones sobre estos casos, existen diferentes perspectivas dentro de la sociedad ecuatoriana. Por un lado, aquellos que están de acuerdo con la gravedad de la situación argumentan que se necesitan medidas urgentes para restaurar la confianza en el sistema judicial y garantizar que se haga justicia. Estos individuos suelen abogar por reformas institucionales, mayor transparencia y rendición de cuentas, y una mayor participación ciudadana en la supervisión del sistema judicial.

Por otro lado, hay quienes cuestionan la magnitud del problema y sostienen que los casos de corrupción que han sido analizados, son incidentes aislados que no reflejan la integridad del sistema judicial en su conjunto. Estos individuos pueden argumentar que la corrupción existe en todas las instituciones y que no se debe estigmatizar al sistema judicial por algunos casos destacados. También pueden enfatizar la presunción de inocencia y el derecho a un debido proceso para aquellos acusados de corrupción, señalando que es importante evitar juicios apresurados y garantizar un proceso justo para todos los involucrados.

Pero lo que no cabe en duda, son las serias preocupaciones sobre la integridad institucional y la corrupción en el sistema judicial ecuatoriano. Sin embargo, es importante abordar estos problemas de manera equilibrada y basada en la evidencia, evitando generalizaciones que puedan afectar la confianza en todo el sistema.

Razones por las cuales, mantener un equilibrio entre la condena de los casos de corrupción y la preservación de la integridad del sistema judicial en su conjunto. Si

bien es fundamental abordar de manera decisiva los incidentes de corrupción, también es crucial evitar la estigmatización del sistema judicial en su totalidad.



# Capítulo 10

## Alternativas Futuras y Recomendaciones

# Capítulo 10

## Alternativas Futuras y Recomendaciones

**A** la luz de los desafíos planteados por los casos Metástasis y Purga, es fundamental considerar una serie de alternativas futuras y recomendaciones para fortalecer el sistema judicial y prevenir la corrupción en Ecuador. Estas medidas pueden abordar diversos aspectos, desde la reforma institucional hasta el fortalecimiento de la cultura de integridad en la sociedad.

Comprender cómo opera la corrupción en las instituciones de un país es esencial, ya que permite a diversos actores, como individuos, sociedad civil, partidos políticos, representantes electos y funcionarios técnicos, evaluar la transparencia y la equidad en el ejercicio de las funciones democráticas. La efectividad, transparencia y equidad en el ejercicio de estas funciones son indicativos de la solidez de la democracia. La corrupción distorsiona la imparcialidad en el cumplimiento de las funciones, lo cual no solo afecta la salud de las instituciones políticas, sino que también genera "ruidos" en el ámbito económico, desalentando las inversiones y frenando el crecimiento. Socialmente, la corrupción intensifica las desigualdades, fortaleciendo a los sectores privilegiados y marginando a los menos favorecidos, quienes se vuelven impotentes y excluidos de las instituciones.

La relación entre corrupción y el poder judicial es compleja. Por un lado, el poder judicial debe administrar justicia de manera imparcial para todos los ciudadanos, como cualquier otra función del Estado de Derecho. Por otro lado, tiene la responsabilidad de supervisar y garantizar la legalidad del funcionamiento de las instituciones públicas, incluyendo a sí mismo. En un Estado de Derecho, además de distribuir decisiones de acuerdo a la ley, el poder

judicial controla la coherencia de las demás funciones. Por lo tanto, existe la necesidad de proponer y accionar alternativas para la precaución y lucha contra la corrupción en nuestro sistema judicial.

### **10.1. Reflexión sobre el futuro del sistema judicial ecuatoriano y las posibles reformas necesarias.**

Como ciudadanos preocupados por el estado de la justicia en Ecuador, nos resulta necesario reflexionar sobre el futuro de nuestro sistema judicial y las reformas que se requieren para fortalecerlo y garantizar una administración de justicia más justa, transparente y eficaz.

A lo largo de los años, hemos sido testigos de diversos desafíos que han afectado la credibilidad y la eficiencia de nuestras instituciones judiciales, desde la politización y la corrupción hasta la falta de recursos y capacitación adecuada. Sin embargo, no podemos dejar a un lado los avances significativos y de un creciente compromiso por parte de diversos actores sociales y políticos para impulsar reformas estructurales que permitan superar

estos desafíos y construir un sistema judicial más sólido y confiable.

Uno de los principales retos que enfrenta el sistema judicial ecuatoriano sigue siendo la necesidad de fortalecer su independencia y separación de los otros poderes del Estado.

La independencia judicial es un pilar fundamental de un Estado de Derecho democrático, ya que garantiza que los jueces puedan ejercer sus funciones de manera imparcial y libre de presiones políticas o externas.

Sin embargo, en Ecuador, hemos visto cómo la politización y la interferencia política han afectado la independencia del poder judicial, incidiendo en su capacidad para administrar justicia de manera

objetiva y equitativa. Por lo tanto, una de las reformas más urgentes que se requieren es fortalecer los mecanismos y las garantías que protegen la independencia judicial, asegurando que los jueces puedan tomar decisiones basadas únicamente en la ley y la evidencia, sin temor a represalias o interferencias externas.

Es fundamental mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en el sistema judicial. La transparencia es un principio clave de cualquier sistema judicial democrático, ya que garantiza que las decisiones judiciales sean accesibles al público y que los procesos judiciales se lleven a cabo de manera abierta y transparente.

Por lo tanto, es necesario implementar medidas que promuevan la transparencia y la rendición de cuentas en todas las etapas del proceso judicial, desde la selección de jueces y fiscales hasta la ejecución de las sentencias. Esto podría incluir la creación de registros públicos de las decisiones judiciales,

la divulgación de información sobre los casos en trámite y la adopción de códigos de ética y conducta para los jueces y demás funcionarios judiciales.

Otro aspecto importante a considerar es la necesidad de mejorar la accesibilidad y la calidad de la justicia en Ecuador. A pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años para ampliar el acceso a la justicia y garantizar la representación legal para todos los ciudadanos, aún existen barreras significativas que impiden que muchas personas puedan acceder a una justicia oportuna y efectiva.

Por ejemplo, la falta de recursos y personal en algunas regiones del país ha llevado a largos tiempos de espera para la resolución de los casos, lo que afecta especialmente a los grupos más vulnerables de la sociedad.

La calidad de la justicia también es un tema preocupante, ya que algunos jueces y fiscales carecen de la formación y capacitación

adecuada para desempeñar sus funciones de manera efectiva. Por lo tanto, es necesario invertir en la mejora de la infraestructura judicial, el aumento del número de jueces y fiscales, y la capacitación continua del personal judicial para garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a una justicia rápida, imparcial y de calidad.

En conjunto con estos aspectos, es importante abordar la corrupción y la impunidad en el sistema judicial ecuatoriano, adoptando medidas firmes para prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción en el sistema judicial, así como para fortalecer los mecanismos de control interno y externo que supervisan el desempeño ético de los jueces y fiscales.

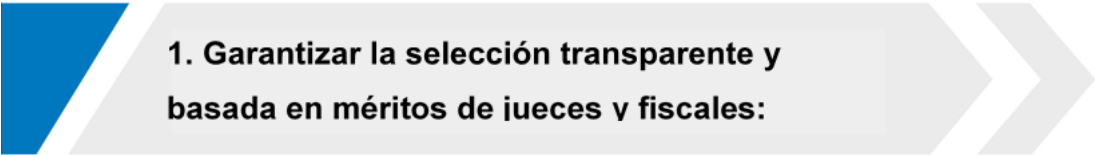
Esto podría incluir el fortalecimiento de la lucha contra la

corrupción en el poder judicial, la implementación de sistemas de monitoreo y evaluación del desempeño judicial, y la promoción de una cultura de integridad y ética en todas las instancias del sistema judicial.

Es indudable que el futuro del sistema judicial ecuatoriano depende en gran medida de nuestra capacidad para abordar estos desafíos de manera efectiva y para impulsar reformas significativas que fortalezcan la independencia, la transparencia, la accesibilidad y la integridad de nuestras instituciones judiciales. Si logramos superar estos desafíos y construir un sistema judicial más sólido y confiable, estaremos dando un paso importante hacia la consolidación de un Estado de Derecho democrático y justo en Ecuador.

## **10.1. Recomendaciones para mejorar la independencia judicial, combatir la corrupción y fortalecer la integridad institucional.**

Desde el estudio que se ha desarrollado a lo largo de este libro, consideramos de gran importancia que el Estado ecuatoriano diseñe mejoras que permitan instaurar de manera sólida la independencia judicial, combatir la corrupción y fortalecer la integridad institucional, con la finalidad de garantizar un sistema judicial confiable, a través de las siguientes acciones:



### **1. Garantizar la selección transparente y basada en méritos de jueces y fiscales:**

Garantizar la selección transparente y basada en méritos de jueces y fiscales: Es necesario establecer procesos de selección de jueces y fiscales que sean transparentes, imparciales y basados en méritos. Esto implica la creación de comités de selección independientes y la adopción de criterios claros y objetivos para evaluar a los candidatos.

**Criterios claros y objetivos de evaluación:** Es fundamental establecer criterios claros y objetivos para evaluar a los candidatos a jueces y fiscales. Estos criterios deben basarse en la formación académica, la experiencia profesional, la integridad ética, la capacidad técnica y otros aspectos relevantes para el ejercicio de la función judicial. Además, es importante que estos criterios se definan de manera pública y se apliquen de manera consistente en todos los procesos de selección.

**Comités de selección independientes:** Para garantizar la imparcialidad y la independencia de los procesos de selección, es necesario crear comités de selección independientes y multidisciplinarios. Estos comités podrían estar integrados por representantes de la sociedad civil, académicos, miembros del poder judicial y otros actores relevantes, y

tendrían la responsabilidad de evaluar a los candidatos de manera objetiva y transparente.

**Participación ciudadana y sociedad civil:** Es importante promover la participación ciudadana y la transparencia en los procesos de selección de jueces y fiscales. Esto podría lograrse mediante la divulgación pública de los perfiles de los candidatos, la realización de audiencias públicas donde los candidatos expongan sus propuestas y visiones sobre la administración de justicia, y la consulta a la sociedad civil y a organizaciones especializadas en materia judicial.

**Evaluación periódica del desempeño:** Además de la selección inicial, es importante establecer mecanismos de evaluación periódica del desempeño de jueces y fiscales. Estas evaluaciones podrían realizarse mediante la revisión de expedientes, encuestas de satisfacción de usuarios del sistema judicial, y evaluaciones de pares y superiores. Los resultados de estas evaluaciones podrían utilizarse para identificar áreas de mejora y proporcionar retroalimentación a los jueces y fiscales.

**Transparencia en el proceso de selección:** Para garantizar la transparencia en los procesos de selección, es necesario que los procedimientos sean públicos y accesibles a todos los ciudadanos. Esto implica la divulgación de las convocatorias, la publicación de las listas de candidatos, la difusión de los criterios de evaluación y la rendición de cuentas sobre las decisiones tomadas en el proceso de selección.

Garantizar la selección transparente y basada en méritos de jueces y fiscales requiere establecer criterios claros y objetivos de evaluación, crear comités de selección independientes, promover la participación ciudadana y la transparencia, evaluar periódicamente el desempeño de los funcionarios judiciales y asegurar que todo el proceso sea público y accesible. Estas medidas

son fundamentales para fortalecer la independencia y la calidad del poder judicial, y para construir una administración de justicia confiable y efectiva.



## **2. Fortalecer la independencia del poder judicial:**

Fortalecer la independencia del poder judicial es un objetivo clave para asegurar un sistema judicial imparcial, justo y efectivo. Ampliemos esta recomendación abordando aspectos específicos que contribuyan a garantizar esta independencia:

**Estabilidad en el cargo de los jueces:** Una de las piedras angulares para garantizar la independencia judicial es la estabilidad en el cargo de los jueces. Esto implica establecer mecanismos que protejan a los jueces de presiones externas y políticas que puedan influir en sus decisiones. La estabilidad en el cargo brinda a los jueces la seguridad necesaria para actuar de manera independiente, sin temor a represalias o interferencias indebidas.

**Prohibición de interferencias políticas:** Es fundamental establecer normativas claras que prohíban cualquier forma de interferencia política en el funcionamiento del poder judicial. Esto incluye la designación de jueces basada únicamente en criterios de mérito y capacidad, sin influencias partidistas o políticas. Asimismo, se deben implementar mecanismos efectivos para garantizar que las decisiones judiciales se tomen de manera objetiva y sin presiones externas.

**Autonomía presupuestaria y administrativa:** Para que el poder judicial pueda ejercer sus funciones de manera independiente, es necesario garantizar su autonomía presupuestaria y administrativa. Esto implica que el poder judicial tenga control sobre la asignación de recursos financieros y la gestión de su propio presupuesto, sin depender de otros poderes del



Estado. Asimismo, la autonomía administrativa garantiza que el poder judicial pueda establecer sus propias políticas y procedimientos internos, sin interferencias externas.

**Sistema de ascensos transparente y basado en méritos:** Para fortalecer la independencia judicial, es importante establecer un sistema de ascensos transparente y basado en méritos. Esto significa que las promociones y ascensos dentro del poder judicial deben otorgarse en función del desempeño y la capacidad de los jueces, y no por motivaciones políticas o favoritismos. Un sistema de ascensos transparente garantiza la igualdad de oportunidades y promueve la meritocracia dentro del poder judicial.

**Fortalecimiento de los órganos de control y supervisión:** Además de establecer garantías internas de independencia, es necesario fortalecer los órganos de control y supervisión externos que puedan garantizar el respeto a la independencia judicial. Estos órganos, como los consejos de la judicatura o los tribunales de ética judicial, deben contar con la autoridad y los recursos necesarios para investigar denuncias de interferencia política o cualquier otra forma de violación a la independencia del poder judicial.

Fortalecer la independencia del poder judicial requiere establecer garantías sólidas, como la estabilidad en el cargo de los jueces, la prohibición de interferencias políticas, la autonomía presupuestaria y administrativa, un sistema de ascensos transparente y basado en méritos, y el fortalecimiento de los órganos de control y supervisión. Estas medidas son fundamentales para asegurar que el poder judicial pueda ejercer sus funciones de manera independiente y garantizar la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

### **3. Implementar medidas de transparencia y rendición de cuentas:**

La implementación de medidas de transparencia y rendición de cuentas en el sistema judicial implica adoptar acciones concretas que promuevan la apertura, la responsabilidad y la confianza en el funcionamiento de las instituciones judiciales.

**Creación de registros públicos de decisiones judiciales:** Además de divulgar información sobre las sentencias emitidas por los tribunales, es importante establecer registros públicos en línea donde se puedan consultar todas las decisiones judiciales, incluidas las resoluciones interlocutorias y los fallos de primera instancia. Estos registros deben ser accesibles para el público en general, lo que permitirá una mayor transparencia y rendición de cuentas en el proceso judicial.

**Divulgación de información sobre casos en trámite:** Para promover la transparencia en el sistema judicial, es necesario divulgar información sobre los casos en trámite, incluyendo el estado procesal, las audiencias programadas y cualquier otra información relevante. Esto puede realizarse a través de plataformas en línea o mediante comunicados periódicos que informen a la ciudadanía sobre el progreso de los casos judiciales.

**Adopción de códigos de ética y conducta:** Es fundamental que los jueces y demás funcionarios judiciales adhieran a estándares éticos elevados en el ejercicio de sus funciones. Para ello, se deben adoptar códigos de ética y conducta que establezcan los principios fundamentales de integridad, imparcialidad y profesionalismo que deben guiar su actuación. Estos códigos deben incluir disposiciones claras sobre conflictos de interés, aceptación de regalos o beneficios, y respeto a los

derechos fundamentales de las partes involucradas en los casos judiciales.

**Promoción de la formación en ética judicial:** Además de establecer códigos de ética y conducta, es importante proporcionar formación y capacitación continua en ética judicial para los jueces y funcionarios judiciales. Esto puede incluir cursos, seminarios y talleres sobre dilemas éticos comunes en el ejercicio de la función judicial, así como el análisis de casos prácticos y la discusión de principios éticos fundamentales.

**Participación de la sociedad civil en la supervisión del sistema judicial:** Para fortalecer la rendición de cuentas en el sistema judicial, es importante involucrar a la sociedad civil en la supervisión y vigilancia de su funcionamiento. Esto puede lograrse mediante la creación de mecanismos de participación ciudadana, como comités de vigilancia judicial o consejos consultivos, que permitan a la sociedad civil contribuir a la mejora continua del sistema judicial.



#### **4. Promover una cultura de integridad y ética en el sistema judicial:**

Promover una cultura de integridad y ética en el sistema judicial es esencial para garantizar la confianza del público en la administración de justicia y para fortalecer la legitimidad y la efectividad de las instituciones judiciales. Para lograr este objetivo, es necesario implementar una serie de medidas que fomenten valores éticos y promuevan prácticas transparentes y responsables en todas las instancias del sistema judicial.

**Desarrollo de programas integrales de formación y capacitación en ética judicial:** Se deben diseñar programas de formación y capacitación en ética judicial dirigidos a jueces, fiscales, defensores públicos y demás funcionarios judiciales. Estos programas deben abordar temas como los

principios éticos fundamentales, la imparcialidad en la toma de decisiones, el respeto a los derechos humanos, la prevención de conflictos de interés y la responsabilidad en el ejercicio de la función judicial. Además, es importante que estos programas incluyan estudios de casos, ejercicios prácticos y actividades de discusión que permitan a los participantes reflexionar sobre dilemas éticos y desarrollar habilidades para tomar decisiones éticas en situaciones difíciles.

**Fomento de una cultura de transparencia y rendición de cuentas:**

Junto con la promoción de la ética judicial, es fundamental fomentar una cultura de transparencia y rendición de cuentas en el sistema judicial. Esto implica la adopción de medidas para garantizar la divulgación pública de información sobre el funcionamiento del sistema judicial, incluyendo estadísticas sobre el desempeño de los jueces y fiscales, decisiones judiciales fundamentadas y procesos disciplinarios contra funcionarios judiciales. Asimismo, se deben establecer mecanismos efectivos para investigar y sancionar los actos de corrupción y violaciones éticas, asegurando que los responsables rindan cuentas por sus acciones.

**Fortalecimiento de los mecanismos de control y supervisión interna:**

Para garantizar el cumplimiento de los estándares éticos y promover una cultura de integridad en el sistema judicial, es necesario fortalecer los mecanismos de control y supervisión interna. Esto incluye la creación de órganos de control interno encargados de monitorear el cumplimiento de las normas éticas y de investigar denuncias de corrupción y mala conducta. Estos órganos deben contar con la autoridad y los recursos necesarios para llevar a cabo investigaciones exhaustivas y garantizar el cumplimiento de las medidas disciplinarias.

**Promoción de valores éticos desde la etapa de formación profesional:** Es importante promover valores éticos desde la etapa de

formación profesional de los futuros jueces y fiscales. Para ello, se deben incorporar cursos de ética judicial en los planes de estudio de las facultades de derecho y proporcionar oportunidades para que los estudiantes participen en actividades extracurriculares relacionadas con la ética y la responsabilidad social. Además, se puede fomentar la realización de prácticas profesionales en instituciones judiciales, donde los estudiantes puedan aprender de la experiencia y el ejemplo de jueces y fiscales éticos y comprometidos con la justicia.

**Apoyo y reconocimiento a la integridad y la ética judicial:** Por último, es importante promover el apoyo y el reconocimiento a los jueces y fiscales que demuestren un alto nivel de integridad y ética en el ejercicio de sus funciones. Esto puede incluir la creación de premios y reconocimientos para aquellos funcionarios judiciales que se destaquen por su compromiso con los principios éticos y su contribución al fortalecimiento del sistema judicial. Además, se puede promover la difusión de buenas prácticas y experiencias exitosas en materia de integridad y ética judicial, con el fin de inspirar a otros profesionales a seguir su ejemplo.

Promover una cultura de integridad y ética en el sistema judicial requiere la implementación de programas de formación y capacitación, el fomento de la transparencia y la rendición de cuentas, el fortalecimiento de los mecanismos de control interno, la promoción de valores éticos desde la etapa de formación profesional y el apoyo y reconocimiento a la integridad y la ética judicial. Estas medidas son fundamentales para garantizar la probidad y la imparcialidad en el ejercicio de la función judicial y para fortalecer la confianza del público en el sistema judicial.

## **5. Reforzar los mecanismos de control interno y externo:**

Reforzar los mecanismos de control interno y externo en el sistema judicial ecuatoriano es una medida crucial para asegurar la integridad y la transparencia en el ejercicio de la función judicial. Para lograr este objetivo, se pueden implementar diversas acciones que fortalezcan la supervisión y el control del desempeño ético de los jueces y fiscales.

**Creación de una unidad especializada de lucha contra la corrupción en el poder judicial:** Establecer una unidad especializada dentro del poder judicial encargada de investigar y combatir los casos de corrupción y mala conducta en el ámbito judicial. Esta unidad debe contar con recursos humanos y técnicos adecuados para llevar a cabo investigaciones exhaustivas e independientes, y colaborar estrechamente con otras instituciones del Estado, como la Fiscalía General y la Contraloría General, en la lucha contra la corrupción.

**Implementación de sistemas de monitoreo y evaluación del desempeño judicial:** Desarrollar sistemas de monitoreo y evaluación del desempeño judicial que permitan identificar y analizar indicadores clave de integridad y eficiencia en la administración de justicia. Estos sistemas pueden incluir la revisión periódica de expedientes judiciales, la realización de encuestas de satisfacción de usuarios del sistema judicial, y la evaluación del tiempo de duración de los procesos judiciales. Los resultados de estas evaluaciones pueden servir para identificar áreas de mejora y promover la rendición de cuentas de los jueces y fiscales.

**Promoción de una cultura de denuncia:** Fomentar una cultura de denuncia dentro del poder judicial, donde los funcionarios y empleados judiciales se sientan seguros y motivados para informar sobre posibles

actos de corrupción o mala conducta. Para ello, es importante establecer canales de denuncia confidenciales y seguros, así como brindar protección y apoyo a los denunciantes que enfrenten represalias o intimidación. Además, se puede incentivar la colaboración ciudadana en la detección y prevención de la corrupción judicial, mediante campañas de sensibilización y difusión de información sobre los canales de denuncia disponibles.

**Fortalecimiento de la cooperación interinstitucional:** Promover la cooperación y el intercambio de información entre las diferentes instituciones del Estado responsables de combatir la corrupción, como la Fiscalía General, la Contraloría General y la Policía Nacional. Esta cooperación interinstitucional es fundamental para investigar de manera efectiva los casos de corrupción y garantizar que los responsables sean llevados ante la justicia. Además, se pueden establecer mecanismos de coordinación y trabajo conjunto para abordar de manera integral los problemas de corrupción en el sistema judicial.

**Promoción de la transparencia y el acceso a la información:** Mejorar la transparencia y el acceso a la información en el poder judicial mediante la publicación de datos relevantes sobre el funcionamiento del sistema judicial, como estadísticas de casos, resoluciones judiciales y procesos disciplinarios. Esto permitirá a la ciudadanía conocer y evaluar el desempeño de los jueces y fiscales, y contribuirá a fortalecer la confianza en la administración de justicia.

Reforzar los mecanismos de control interno y externo en el sistema judicial ecuatoriano es esencial para prevenir y combatir la corrupción y promover una administración de justicia íntegra y transparente.

Esto incluye la creación de una unidad especializada de lucha contra la corrupción, la implementación de sistemas de monitoreo y evaluación del

desempeño judicial, la promoción de una cultura de denuncia, el fortalecimiento de la cooperación interinstitucional, y la promoción de la transparencia y el acceso a la información. Estas medidas son fundamentales para garantizar la probidad y la eficiencia en el ejercicio de la función judicial y para fortalecer la confianza del público en el sistema judicial ecuatoriano.



## **6. Apoyar la participación ciudadana en la supervisión del sistema judicial:**

Apoyar la participación ciudadana en la supervisión del sistema judicial es esencial para fortalecer la integridad, la transparencia y la rendición de cuentas en la administración de justicia. La sociedad civil, al estar directamente involucrada en la supervisión del sistema judicial, puede contribuir significativamente a la detección y denuncia de actos de corrupción, así como a la promoción de una mayor transparencia y responsabilidad por parte de los funcionarios judiciales.

**Creación de mecanismos de participación ciudadana:** Es fundamental establecer mecanismos institucionales que permitan la participación activa de la ciudadanía en la supervisión del sistema judicial. Esto puede incluir la creación de consejos judiciales consultivos, comités de vigilancia ciudadana y mesas de diálogo entre la sociedad civil y las autoridades judiciales. Estos mecanismos brindarán a los ciudadanos la oportunidad de expresar sus preocupaciones, presentar propuestas de mejora y realizar seguimiento a las acciones implementadas por el poder judicial.

**Promoción de una cultura de acceso a la información:** Es necesario promover una cultura de acceso a la información en el ámbito judicial, garantizando que la ciudadanía tenga acceso oportuno y completo a la información relevante sobre el funcionamiento del sistema judicial. Esto incluye la publicación de datos estadísticos, resoluciones judiciales, agendas de



audiencias y procesos disciplinarios en portales de transparencia judicial. Además, se deben implementar mecanismos para facilitar la solicitud de información por parte de los ciudadanos y para asegurar la transparencia en la gestión de la información judicial.

**Empoderamiento ciudadano en materia judicial:** Es importante empoderar a la ciudadanía en materia judicial, proporcionándole herramientas y conocimientos para comprender y participar de manera efectiva en el proceso judicial. Esto puede lograrse a través de programas de capacitación y educación ciudadana en derechos y procedimientos judiciales, así como mediante la difusión de información sobre los derechos y responsabilidades de los ciudadanos en relación con el sistema judicial. Además, se pueden promover campañas de sensibilización y educación cívica sobre la importancia de la participación ciudadana en la supervisión del sistema judicial.

**Fomento de la colaboración entre la sociedad civil y las instituciones judiciales:** Es necesario fomentar la colaboración y el diálogo constructivo entre la sociedad civil y las instituciones judiciales, con el fin de fortalecer la confianza mutua y promover una supervisión efectiva del sistema judicial. Esto implica la organización de espacios de encuentro y diálogo entre representantes de la sociedad civil y autoridades judiciales, donde se puedan discutir temas de interés común, identificar problemas y buscar soluciones colaborativas. Asimismo, se pueden establecer mecanismos de seguimiento y evaluación de la participación ciudadana en la supervisión del sistema judicial, con el fin de garantizar su efectividad y relevancia.

Apoyar la participación ciudadana en la supervisión del sistema judicial es fundamental para fortalecer la integridad y la transparencia en la administración de justicia.

Esto implica la creación de mecanismos institucionales de participación ciudadana, la promoción de una cultura de acceso a la información, el

empoderamiento ciudadano en materia judicial y el fomento de la colaboración entre la sociedad civil y las instituciones judiciales.

Estas acciones contribuirán a mejorar la calidad y la legitimidad del sistema judicial, así como a fortalecer la confianza del público en la administración de justicia.

## **CONCLUSIONES FINALES: LLAMADO A LA ACCIÓN PARA GARANTIZAR UNA JUSTICIA EQUITATIVA Y TRANSPARENTE EN ECUADOR**

Tras explorar en detalle los desafíos y obstáculos que enfrenta el sistema judicial ecuatoriano debido a las redes de corrupción y su impacto en la integridad institucional, es evidente la complejidad y la magnitud de este problema. Desde la interferencia política hasta la falta de transparencia, el sistema judicial se ve afectado por una serie de factores que desvirtúan su funcionamiento eficiente y la confianza del público en su imparcialidad.

A lo largo de este libro, hemos analizado las raíces y las manifestaciones contemporáneas de la corrupción en el sistema judicial ecuatoriano. Desde la cooptación de jueces y fiscales hasta la manipulación de decisiones judiciales en beneficio de intereses particulares, hemos documentado cómo estas prácticas corruptas minan los cimientos de la democracia y el Estado de Derecho en Ecuador.

Sin embargo, a pesar de los desafíos significativos que enfrenta el sistema judicial, también hemos identificado oportunidades para el cambio y la mejora. La creación de instituciones clave, como la Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Judicatura, demuestra un compromiso por parte del Estado ecuatoriano para combatir la corrupción y fortalecer la integridad institucional. Igualmente, la participación ciudadana y la sociedad civil juegan un papel fundamental en la supervisión del sistema judicial y en la denuncia de actos de corrupción.

Para avanzar hacia un sistema judicial más transparente, eficiente e independiente, es necesario abordar los problemas estructurales que facilitan la corrupción y promover una cultura de integridad y ética en todas las instancias del poder judicial. Esto requiere un esfuerzo conjunto por parte del gobierno, las instituciones judiciales, la sociedad civil y la ciudadanía en general.

Finalmente, el combate contra la corrupción en el sistema judicial ecuatoriano es un desafío continuo que exige un compromiso permanente con la justicia, la transparencia y el Estado de Derecho. Solo mediante la colaboración y la acción colectiva podremos superar los obstáculos y construir un sistema judicial que garantice la igualdad ante la ley y la protección de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos ecuatorianos.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aguirre Rivera, Sara Diana. «EL DELITO DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y SU IMPACTO SOCIAL, EN EL JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE HUÁNUCO 2016». *Universidad de Huánuco*, 2017. <http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1102>.
- Alcívar Trejom Carlos y Murillo Mena, Ámbar. «LA JUSTICIA EN LA CONFORMACIÓN DEL ESTADO DE DERECHO ECUATORIANO», s/f. <https://libros.ecotec.edu.ec/index.php/editorial/catalog/download/79/76/1088-1?inline=1>.
- Álvarez, Gladys. «LOS MÉTODOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LOS PROCESOS JUDICIALES: EXPERIENCIAS ARGENTINAS», s/f. <https://www.oas.org/juridico/spanish/adjusti1.htm>.
- Asamblea Nacional. «Codificación 14 Registro Oficial 417 de 14-dic.-2006 Última modificación: 22-may.-2015», s. f. <https://www.funcionjudicial.gob.ec/pdf/Ley%20de%20Arbitraje%20y%20Mediaci%C3%B3n.pdf>.
- Asamblea Nacional. «Ley 0 Registro Oficial Suplemento 506 de 22-may.-2015 Última modificación: 21-ago.-2018», 2015. <https://www.telecomunicaciones.gob.ec/wp-content/uploads/2018/09/Codigo-Org%C3%A1nico-General-de-Procesos.pdf>.
- Asís, María González De. «La corrupción judicial». *Gestión y Análisis de Políticas Públicas*, 30 de abril de 2001, 93-96. <https://doi.org/10.24965/gapp.vi20.248>.
- Austin, Anastasia. «Cómo las élites criminales manipulan las leyes para eludir la justicia en Ecuador», 2024.
- Ávila-Hernández, Flor María, Manuel Asdrúbal Prieto-Salas, Jorge Enrique León-Molina, José Vicente Villalobos-Antúnez, Gustavo Machado, Luis

- Romero-Neces, Dimitri Endrizzi, y Camilo Humberto Prieto-Fetiva. *Derechos humanos, democracia y poder judicial*. Universidad Católica de Colombia, 2020, 2020. <https://repository.ucatolica.edu.co/entities/publication/08fbad1a-a1a1-4629-895a-540db0d0a05c>.
- Binder, Alberto. «Corrupción y sistemas judiciales». *Reforma Judicial: Revista Mexicana de Justicia*, n.º 10 (2007): 135-41.
- Carvajal Martínez, Jorge Enrique, Carlos Arturo Hernández Díaz, José Eduardo Rodríguez Martínez, Jorge Enrique Carvajal Martínez, Carlos Arturo Hernández Díaz, y José Eduardo Rodríguez Martínez. «La corrupción y la corrupción judicial: aportes para el debate». *Prolegómenos* 22, n.º 44 (2019): 67-82. <https://doi.org/10.18359/prole.3667>.
- «Caso Purga: cómo un contrato de obras en Quito terminó enredado en la Corte de Guayas». Accedido 30 de abril de 2024. <https://www.primicias.ec/noticias/seguridad/caso-purga-cuerpo-ingenieros-remodelacion-corte-guayas/>.
- «Casos Encuentro, Metástasis y Purga: ¿afectarán electoralmente a CREO, Revolución Ciudadana y PSC? | Política | Noticias | El Universo». Accedido 30 de abril de 2024. <https://www.eluniverso.com/noticias/politica/casos-encuentro-metastasis-y-purga-afectaran-electoralmente-a-creo-revolucion-ciudadana-y-psc-nota/>.
- Claudio Nash Rojas y Marie Fuchs. «Corrupción, Estado de derecho y derechos humanos». KONRAD, 2019. <https://www.corteidh.or.cr/tablas/r39615.pdf>. «codigo\_organico\_fj.pdf». Accedido 25 de abril de 2024. [https://www.funcionjudicial.gob.ec/www/pdf/normativa/codigo\\_organico\\_fj.pdf](https://www.funcionjudicial.gob.ec/www/pdf/normativa/codigo_organico_fj.pdf).
- «Constitucion-de-la-Republica-del-Ecuador\_act\_ene-2021.pdf». Accedido 25 de abril de 2024. <https://www.defensa.gob.ec/wp->

content/uploads/downloads/2021/02/Constitucion-de-la-Republica-del-Ecuador\_act\_ene-2021.pdf.

«Delitos contra la eficiencia de la administración pública ecuatoriana. Caso de estudio: Morona Santiago | Apuntes Contables». Accedido 30 de abril de 2024.

<https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/contad/article/view/5744>.

«El caso Metástasis destapa el cáncer de la corrupción en Ecuador». Accedido 30 de abril de 2024. <https://insightcrime.org/es/noticias/caso-metastasis-destapa-cancer-corrupcion-ecuador/>.

«Explicando la corrupción judicial en las cortes intermedias e inferiores de Chile, Perú y Ecuador». Accedido 28 de abril de 2024. [https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0188-76532013000200004](https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-76532013000200004).

«Fiscalía General del Estado | Caso Purga: 9 procesados con prisión preventiva, 2 con medidas alternativas y uno con arresto domiciliario». Accedido 30 de abril de 2024. <https://www.fiscalia.gob.ec/caso-purga-9-procesados-con-prision-preventiva-2-con-medidas-alternativas-y-uno-co-arresto-domiciliario/>.

Gómez Pérez, Mara. «Jueces y derechos humanos. Hacia un sistema judicial transnacional», 2017. [https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1405-91932017000200345](https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-91932017000200345).

infobae. «Nuevo informe global sobre corrupción: América Latina se hunde por Nicaragua, Venezuela y la falta de independencia judicial», 30 de enero de 2024. <https://www.infobae.com/america/america-latina/2024/01/30/nuevo-informe-global-sobre-corrupcion-america-latina-se-hunde-por-nicaragua-venezuela-y-la-falta-de-independencia-judicial/>.

Organización de las Naciones Unidas. «CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN.», 2005. [https://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic2\\_ecu\\_anexo16.pdf](https://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic2_ecu_anexo16.pdf).

«Justicia Abierta: un desafío para la gobernanza democrática | Comunidades Cepal». Accedido 19 de abril de 2024. <https://comunidades.cepal.org/ilpes/es/grupos/discusion/justicia-abierta-un-desafio-para-la-gobernanza-democratica>.

Macías, Jessica, y Elicza Bermúdez. «LA CORRUPCIÓN EN EL SISTEMA JUDICIAL. SITUACIONES DEL CONTEXTO ECUATORIANO». *Revista Inclusiones*, 15 de abril de 2019, 64-82.

Observatorio Judicial. «LA JUSTICIA EN ECUADOR ¿Cuenta la Función Judicial con suficientes recursos para cumplir con su labor?», 2020. [https://observatoriojudicial.ec/storage/Informes/1589513020\\_10%20La%200Justicia%20en%20Ecuador%20-%20Cuenta%20la%20Funci%C3%B2n%20Judicial%20con%20suficientes%20recursos%20para%20cumplir%20con%20su%20labor.pdf](https://observatoriojudicial.ec/storage/Informes/1589513020_10%20La%200Justicia%20en%20Ecuador%20-%20Cuenta%20la%20Funci%C3%B2n%20Judicial%20con%20suficientes%20recursos%20para%20cumplir%20con%20su%20labor.pdf).

Peñafiel Valencia, Diego y Aguirre Avilés, Johana. «Crimen organizado y corrupción en Ecuador: desafíos para la formación continua de las y los jueces especializados nuevos jueces especializados», 2023. <https://revistasapientia.organojudicial.gob.pa/index.php/sapientia/article/view/493>.

Platonova, Anastasia. «Corrupción, derechos humanos, independencia judicial». Accedido 22 de abril de 2024. [//www.unodc.org](https://www.unodc.org).

Ramos Rollón, Marisa y Álvarez García, Francisco. «El control de la corrupción en América Latina: agenda política, judicialización e internacionalización de la lucha contra la corrupción», 2019. <https://e-archivo.uc3m.es/rest/api/core/bitstreams/4eef4e5a-ed03-46c7-b01c-dfe295f81cc1/content>.



Seña, Malem, y Jorge F. «Pobreza, corrupción, (in)seguridad jurídica», 2017, 1-144.

Transparency Internacional. «ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN 2023: EL DEBILITAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE JUSTICIA DEJA A LA CORRUPCIÓN SIN CONTROLES», 2024.  
<https://www.transparency.org/es/press/cpi2023-corruption-perceptions-index-weakening-justice-systems-leave-corruption-unchecked>.

United Nations Human Rights. «el SISTEMA JUDICIAL y derechos humanos - Buscar con Google», s/f.  
[https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Women/WRGS/JudiciaryGuide\\_SP.pdf](https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Women/WRGS/JudiciaryGuide_SP.pdf).

Villacrés, Santiago Elías Cárdenas, Mayeixi Melisa Pita Moreira, Hugo Hernán Chavarrea Sela, y Isaac Alberto Cárdenas Villacrés. «Luces y sombras en la justicia ecuatoriana. Explorando la corrupción en la actualidad». *Ciencia y Educación* 4, n.º 9 (7 de septiembre de 2023): 15-29.  
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8325905>.

ISBN: 978-9942-663-10-8

